

39 · SEPTIEMBRE 2014

FUNDACIÓN 1 DE MAYO

Cuadernos

Renovación, Democracia y Ciudadanía



WWW.1MAYO.CCOO.ES

RENOVACIÓN, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

FUNDACIÓN 1º DE MAYO
C/ Longares, 6. 28022 Madrid
Tel.: 91 364 06 01
1mayo@1mayo.ccoo.es
www.1mayo.ccoo.es

COLECCIÓN CUADERNOS, NÚM: 39
ISSN: 1989-5372

© Madrid, Septiembre 2014

INDICE

5

RECUPERAR LOS VALORES PROPIOS DE LA CULTURA DEL TRABAJO
FRENTE A LOS VALORES ESPECULATIVOS

Rodolfo Benito

Secretario Confederal de Estudios y Presidente Fundación 1º de Mayo

7

CONCLUSIONES DEL FORO RENOVACIÓN, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

10

MIEMBROS DEL FORO

11

PONENCIAS

RECUPERAR EL IMPULSO CÍVICO

Félix Taberna

NEOCONSERVADURISMO, NEOLIBERALISMO Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA:
UN NUEVO CICLO DE PROTESTAS

Pedro Chaves Giraldo

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA: UN MARCO PARA DESARROLLAR
EL GOBIERNO ABIERTO

Quim Brugué

CAMBIO DE SIGLO, FALLO DEL SISTEMA. REINICIAR

Jesús Oliva Serrano

GOBIERNO ABIERTO. LA ÚNICA SALIDA POLÍTICA

Guzmán Garmendia

LO PÚBLICO, LO COOPERATIVO Y LO PROFESIONAL CON ANIMO DE LUCRO TASADO:
UN DIÁLOGO CLAVE PARA LA IZQUIERDA POSTAUSTERICIDIO

Javier Burón Cuadrado

RECUPERAR LOS VALORES PROPIOS DE LA CULTURA DEL TRABAJO FRENTE A LOS VALORES ESPECULATIVOS

RODOLFO BENITO

Secretario Confederal de Estudios y Presidente Fundación 1º de Mayo

Inmersos en un contexto cultural e ideológico predominantemente neoliberal y caracterizado por el pensamiento único, asistimos en los últimos años a un «resurgir» de movimientos sociales, corrientes críticas, que mediante nuevas formas de comunicación y movilización, ponen en duda la calidad democrática del sistema y hacen evidente el distanciamiento ciudadano y social con el sistema de representación político y las instituciones.

Sin duda la crisis económica es parte fundamental de este proceso. Una crisis que en el caso de España, aunque no solo, comenzó como una crisis financiera, que inmediatamente devino en económica, para convertirse en una crisis de social y de empleo para finalmente haberse convertido en una crisis política e institucional.

Ello agravado con la gestión conservadora de la crisis mediante sus políticas de austeridad y recortes, complementarias a la reforma laboral (prevalencia del poder empresarial y desarticulación de la negociación colectiva) y la ofensiva contra el sindicalismo (marginación contractual y deslegitimación social), con el resultado de una creciente desigualdad tanto en el ámbito laboral (paro, diferencias salariales, precarización...) como civil (pobreza, desahucios, recortes en educación, sanidad, pensiones, dependencia...).

Se construyen, a partir de ahí, nuevas identidades políticas que configuran un nuevo sujeto de ciudadanía que reclama mayor participación y protagonismo en las decisiones que afectan a lo colectivo, mayor y más rápida capacidad de respuesta ante los graves problemas que afectan a la sociedad, más transparencia pública también y más calidad democrática.

Comisiones Obreras no ha sido ajena a este proceso de construcción social y ciudadana de un nuevo discurso y renovadas reivindicaciones, desde la participación en los movimientos y desde la aportación al debate abierto, pero tampoco ha estado al margen de la patente desafección ciudadana.

La imagen de los sindicatos ha sufrido una importante erosión, en el marco, no podemos en ningún caso obviar, de una estrategia concertada que se alienta una amplia campaña de acoso y desprestigio global del sindicalismo (acusado de anacrónico, disfuncional, poco representativo, subvencionado), por otra se impone una reforma laboral con el objetivo de limitar el poder contractual del sindicalismo (descuelgues, empresarización, fin de la ultractividad...), al tiempo que se intenta restringir el derecho de huelga y se reprime su ejercicio (81 procedimientos judiciales abiertos contra 260 sindicalistas), retro trayéndonos a tiempos que creíamos largamente superados.

Aunque cierto es, que al margen de la intensa campaña de desprestigio armada e intencionada y manipuladora, no podemos obviar que el discurso anida en una parte de la sociedad, de trabajadores y trabajadoras, y que debemos trabajar por cambiar esta percepción desde el análisis crítico de

nuestras formas y estructuras, desde el intercambio de ideas y reflexiones, desde la transparencia,... para seguir construyendo democracia, recuperar la legitimidad y la centralidad del valor del trabajo.

El sindicato es un sujeto colectivo principal y protagonista y ha de tener un lugar destacado en este proceso de construcción de un renovado discurso social y democrático, cívico, y su lugar, que siendo singularmente el centro de trabajo, para anclarse más y mejor en la sociedad, debe favorecer una fluida relación también con en el entramado de redes y movimientos surgidos al calor de las demandas de más y mejor democracia.

El sindicato debe estar presente en estos cambios. Una sociedad en la que el «mercado» es el principal articulador social y en el que el «trabajo» ha perdido centralidad es una sociedad democráticamente precaria y democráticamente insatisfecha.

El sindicato ha sido y debe seguir siendo una figura social clave en la propia civilización democrática y debe «recuperar» su valor central en un contexto hostil desde el conflicto, la negociación, la propuesta, y desde la reflexión colectiva y la generación de discurso social y político.

CCOO reflexionaba sobre los peligros de la hegemonía del pensamiento único en los documentos y debates de su 10º Congreso, alertando sobre las negativas consecuencias en el sistema democrático y en la participación política ciudadana: *“Este pensamiento ha debilitado la democracia y la participación responsable de la ciudadanía. Queremos recuperar unos valores, al tiempo que combatir otros. Recuperar los valores propios de la cultura del trabajo frente a los valores especulativos»*. Y es en esta línea que iniciamos el debate que hoy presentamos.

En este contexto la Fundación Primero de Mayo puso en marcha un espacio de reflexión en torno a la Democracia y Ética Pública. El objetivo ha sido doble. Por un lado, ensalzar la necesidad de vivificar la democracia, como sistema de responsabilidad ciudadana, aunque adoptando nuevas formas. Y, por otro, unir y divulgar el valor del trabajo y el valor de la ciudadanía.

Se presenta ahora un interesante trabajo de reflexión colectiva en torno a la calidad y el fortalecimiento de la democracia, la deslegitimación ciudadana de las instituciones, las fórmulas de participación directa, la transparencia, el bien común y el equilibrio de los intereses colectivos, lo público y su formas, el sindicalismo y los nuevos movimientos sociales..., con la aportación de un nutrido grupo de personas expertas a las que agradecemos su esfuerzo y participación en la construcción de este debate. ♦

CONCLUSIONES

FORO RENOVACIÓN, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

La Fundación 1º de Mayo constituyó, en septiembre del 2013, un Foro de Debate en torno a la Renovación, Democracia y Ciudadanía. Su misión era facilitar la reflexión colectiva en torno a la calidad y fortalecimiento de la democracia y responsabilidad ciudadana. A lo largo de este año, en este espacio reticular, de encuentro y de coordinación, entre investigadores sociales y pensadores se han producido ponencias de mucho interés. Una vez cerrado el presente Foro procedemos a presentarlas de forma conjunta. También, a modo de conclusión, exponemos a continuación una serie de ideas fuerza que condensan el trabajo del presente Foro.

- 1.- La política, acción ciudadana colectiva, arranca del conflicto. Tiene que ver más con decepciones que con satisfacciones. **Las estructuras de intermediación intentan construir proyectos colectivos, generando decepciones individuales.** Por ello, es preciso que se expliquen las razones de la decisión adoptada, que se opere con transparencia, que se escuchen nuestras opiniones y que se rinda cuentas de las acciones realizadas.
- 2.- La ciudadanía sabe y entiende que no todo es posible, que sus preferencias no siempre coinciden con las de los vecinos. Lo que no entiende –y ya no admite– es que nuestros representantes tomen estas decisiones con opacidad, escudados en informes técnicos invisibles o, simplemente, invocando una sacrosanta legitimidad electoral que hoy es claramente insuficiente. **La ciudadanía no nos propone tanto una eliminación de las estructuras de intermediación como una profunda revisión de las mismas.**
- 3.- Hoy necesitamos tanto **recuperar la legitimidad, como la inteligencia que aporta la democracia;** de manera que nuestro sistema político-administrativo debe impregnarse de transparencia, de diálogos, de interacciones, de valores y de liderazgo.
- 4.-El **valor público está asociado a una reivindicación de los intereses colectivos y del equilibrio entre los intereses de unos y otros.** Mientras, el individualismo dominante de las últimas décadas ha situado el acento en los intereses particulares y en una lógica meritocrática donde el ganador «se lo lleva todo».
- 5.-La felicidad y el bienestar no dependen solo del crecimiento sino también de la distribución de la riqueza. **La renta concentrada en un reducido segmento social impide el crecimiento del conjunto.** Por ello, prosperidad redistributiva frente a la desigualdad. Un Modelo Social, en un proyecto Federal Europeo.
- 6.- El trabajo era una clave fundamental para el orden social (inserción laboral, provisión de derechos, sustento vital). **El deterioro y ausencia del trabajo, sin nada que le sustituya, supone una importante anomia social.** El proceso de pérdida de centralidad social del trabajo corre paralelo al de pérdida de condición ciudadana. Una sociedad precaria laboralmente es una sociedad precaria democráticamente.
- 7.- La actual situación de crisis sistémica ha colocado en el espejo del fracaso a toda una generación. Generación no como cohorte de edad sino como contexto cultural generacional. **Por lo tanto, las nuevas generaciones, desde valores alternativos, tienen la obligación moral de asumir nuevos liderazgos.**

8.- El ejercicio de la representación pública requiere hoy de un liderazgo intenso y renovado. **El interés público reclama de políticos que lideren proyectos colectivos y que, por lo tanto, no se limiten a gestionar asaltos tácticos a posiciones de poder.** Los responsables públicos no deberían hacer del ejercicio del poder un objetivo, sino un medio para articular su voluntad de transformación social.

9.- La ruptura del Contrato Social de postguerra mediante el asalto del neoliberalismo económico a la democracia, ha marcado **una nueva frontera social.** Un nuevo modelo social postcrisis.

10.- En esta nueva frontera social, el mercado adquiere una posición central como articulador social. Lo que deriva en la **subordinación, consecuente, de la política a la economía y en la minorización de los sujetos políticos tradicionales como representantes y como interlocutores.**

11.- Las dos últimas décadas han erosionado y debilitado, hasta hacerlo casi irreconocible, el gran acuerdo de convivencia e integración económica y política de postguerra. **Pero la actual crisis ha tenido un efecto devastador sobre el imaginario de un proceso democrático** que controle las decisiones económicas.

12.- La democracia representativa ha sido superada por la modernidad. No se trata solo de una desafección por la política sino de una generalización de la conciencia de la inutilidad de la misma. **Las formas de la ortodoxia política acumulan la erosión de los cambios sociales que no asimilan.** Como resultado, los nuevos movimientos ciudadanos vuelven a surgir en los márgenes de la política institucional. El malestar social frente al pobre papel que ofrece como solución la política oficial, se nos muestra todos los días.

13.- Conviene recordar que la **resistencia cultural y política de los partidos reformistas tradicionales ha sido más bien escasa** y, de hecho, ha contribuido a la extensión de un ideario que, a la postre, se vuelve contra sus propios intereses políticos.

14.- El anterior éxito del **movimiento alterglobalizador, precursor ineludible del movimiento de los indignados,** fue abrir una grieta en la amurallada lógica explicativa del modelo. Crear un instrumento político y social que podría haber sido una plataforma de reconstrucción programática de la izquierda social y política alternativa. Este movimiento y su correlato internacional, el Foro Social Mundial, fueron los últimos movimientos posibles bajo el paraguas del contrato social.

15.- La **fuerza del movimiento de los indignados** no radica en su capacidad propositiva, sino en su capacidad de reacción ante un cambio de paradigma de consecuencias impredecibles.

16.- La desafección a la política, la matriz conservadora del sentido común hegemónico y la crisis de la representación política hacen posible **escenarios neopopulistas** de diferente signo.

17.- Si la ciudadanía percibe a nuestros gobiernos y nuestras administraciones como una rémora no sólo es por la desconfianza en el poder sino también por la falta de respuestas de las instituciones públicas. **Se sienten profundamente frustrados ante su incapacidad para incidir de manera efectiva en la resolución de nuestros problemas.** No es sólo que lo hagan mal sino que, peor aún, lo que hacen no sirve de nada, afirman.

18.- En la actual situación, un número creciente de ciudadanos está renunciado a buscar respuestas en un sistema político-administrativo en el que ya no confían. Algunos **están construyendo nuevas alternativas en el trabajo comunitario, en el cooperativismo o en la recuperación de los bienes comunes.** Ya no se pide a las instituciones que recuperen su eficacia sino que, destilando una enorme frustración, se les exige que nos dejen en paz, que ya nos espabilaremos, que no necesitamos de sus fracasadas políticas.

19.- Diferentes procesos confluyen en la tendencia **hacia una continua retirada del Estado,**

que abre paso a una especie de sociedad del “hágaselo-usted-mismo” (ideología del individualismo, políticas de recortes, autoempleo como salida al colapso del mercado de trabajo, sustitución gradual de servicios presenciales por otros virtualizados, etc.).

20.- Para que nuestro sistema político-administrativo recupere su legitimidad será imprescindible que muestre **una renovada capacidad para afrontar los problemas de la ciudadanía. Simultáneamente, que se incorpore a los propios ciudadanos en el diseño y la implementación de estas soluciones.** Los ciudadanos actuales se han activado y exigen participar tanto en el diagnóstico como en la respuesta a sus dificultades de presente y a sus retos de futuro.

21.- La puesta al día de nuestras instituciones públicas pasa por **incorporar el diálogo con la ciudadanía (participación), en los diferentes ámbitos sectoriales de su estructura administrativa (transversalidad) y entre los diferentes niveles gubernamentales que operan en un determinado territorio (gobierno multi-nivel).** Y para trasladar esta afirmación a la práctica es preciso la profundización democrática y el gobierno abierto.

22.- Frente a la regularidad y a las garantías que ofrecen las administraciones tradicionales, **una administración inteligente debe ser, sobre todo, una administración innovadora.** La innovación es un concepto muy ajeno a nuestras instituciones públicas, pero imprescindible para adaptarse a un mundo complejo y volátil como el actual. No podremos decretar la introducción de la innovación en las administraciones públicas, pero sí convertirlas paulatinamente en espacios más propicios para la innovación: espacios abiertos, que admitan la experimentación y el error, que faciliten la hibridación creativa, que permitan generar giros conceptuales y metodológicos, etc.

23.- **Frente a la privatización en sentido estricto, hay que dar oportunidad a nuevas formas de acción públicas, a través de un pacto sociedad civil-mercado-estado.** La clave de bóveda del sistema es el servicio al público y el control público estratégico. Desde esta base es preciso conjugar proyectos y servicios públicos en los que hay que erradicar el lucro privado, sin renunciar a la máxima profesionalización y a la dignidad de los trabajadores, en un contexto de restricción presupuestaria y de amenaza de privatización pura y dura.

24.- **La evolución tecnológica no se puede separar de la realidad democrática en la que vivimos.** Están cambiando las relaciones, se está eliminando la lejanía física y están dejando de tener sentido infinidad de ideas, posturas, filosofías y, cómo no, objetos. Tiene tantas potencialidades como riesgos.

25.- El papel de los medios de comunicación tradicionales, que hasta ahora denunciaban e indicaban el camino de los gobernantes, está siendo sustituido por una gran masa de ciudadanos que realmente marcan el camino, y están obligando a que sean escuchados. **Las redes sociales son las nuevas plazas del pueblo.**

26.- Nueva cronopolítica. **Las redes sociales surgidas se configuran en muchas ocasiones como verdaderos espacios deliberativos que recuperan la reflexión política y exhiben capacidades organizativas excepcionales.** Su actividad establece una asimetría que antepone otras formas de sincronización. La denostada ‘clase política’ debe permanecer atenta a las novedades, juega en desventaja, ya que a la ciudadanía no le hace falta en este relato.

27.- **Transparencia colaborativa (open data) frente al control social (big data).** La tendencia hacia la transparencia y la publicación de datos por las administraciones públicas, pero también hacia la posibilidad de recabar información en tiempo real de forma colaborativa con los ciudadanos ofrece un notable potencial de regeneración democrática y legitimación social. Pero también es un productor continuo de información personal que ofrece una minería de datos para la industria del consumo y el control social (big data). ♦

MIEMBROS DEL FORO

Pedro Chaves, Profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III; experto en Ciudadanía y Europa.

José María Sauca, Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Profesor en universidades europeas y americanas, ha publicado y editado diversos trabajos sobre sociedad civil, participación y derechos humanos.

Quim Brugé, Profesor de Ciencia Política y miembro del Instituto de Gobernabilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue Director General de Participación ciudadana del Gobierno de Cataluña.

Irene Ramos, Responsable del área de Política, Ciudadanía e Igualdad de la Fundación Ideas. Ha sido Visiting Fellow en University of Western Sydney; Indiana University y Harvard University. Uno de sus campos de interés reside en la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito sociopolítico y la participación ciudadana.

Julio Alguacil, Profesor titular de Carlos III; Investigador en Desarrollo Comunitario.

Guzmán Garmendia, ex Director General de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra; Asesor en Gobierno Abierto, Transparencia y Nuevas Tecnologías, miembro de la Junta Directiva de la Open Knowledge Foundation en España.

Javier Camacho, Profesor universitario, línea de investigación movimientos sociales. Autor entre otros de los “Movimientos sociales urbanos en la periferia social”

Tania Sánchez, educadora social, experta en participación ciudadana y cooperación.

Javier Burón, Socio y Gerente de Urbania ZH Gestión (empresa dedicada a la gestión profesionalizada de proyectos públicos y cooperativos); ex Viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco.

Jesús Oliva, Profesor titular de Sociología en la Universidad Pública de Navarra (UPNa); Especializado en la investigación social de Transformación de Tiempos y Espacios Urbanos.

Javier Lorenzo, Profesor de Ciencia Política y de la Administración Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Comunicación Política. Director del estudio “*Jóvenes, Ciudadanía y Derechos*”.

Félix Taberna, Director del Foro. Sociólogo, colaborador de la Fundación Primero de Mayo. Fue Director Gerente del Instituto Navarro de Administración Pública.

PONENCIAS

13

RECUPERAR EL IMPULSO CÍVICO

Félix Taberna

19

NEOCONSERVADURISMO, NEOLIBERALISMO Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA:
UN NUEVO CICLO DE PROTESTAS

Pedro Chaves Giraldo

49

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA: UN MARCO PARA DESARROLLAR
EL GOBIERNO ABIERTO

Quim Brugué

63

CAMBIO DE SIGLO, FALLO DEL SISTEMA. REINICIAR

Jesús Oliva Serrano

71

GOBIERNO ABIERTO. LA ÚNICA SALIDA POLÍTICA

Guzmán Garmendia

77

LO PÚBLICO, LO COOPERATIVO Y LO PROFESIONAL CON ANIMO DE LUCRO TASADO:
UN DIÁLOGO CLAVE PARA LA IZQUIERDA POSTAUSTERICIDIO

Javier Burón Cuadrado

RECUPERAR EL IMPULSO CÍVICO

FÉLIX TABERNA

Con la presente ponencia, se inicia este Foro de Debate. El propósito del mismo es facilitar la reflexión colectiva, el intercambio de información y análisis; a la vez que elevar propuestas en lo concerniente a responsabilidad ciudadana y sistema político. Representa también un espacio de comunicación entre el ámbito sindical y el ámbito del pensamiento progresista.

Cabe recordar que tradicionalmente, el sindicalismo ha defendido la cultura democrática, la ética, la honradez, la fraternidad, el consumo sostenible y responsable. Estos valores han nutrido históricamente al mundo del trabajo; practicando formas y estilos de vida propios. Son los valores propios de la cultura del trabajo frente a los valores especulativos; frente al fetichismo consumista y la era de la codicia. Esos valores son los que en estos momentos hay que reforzar. Es preciso reforzarlos ante la pérdida de esa conciencia social.

No podemos desligar el proceso de deconstrucción social del trabajo, y su consecuente desvalorización, del proceso de pérdida de la condición ciudadana y quiebra del sistema político en el que estamos inmersos. Ambos están unidos; al desplazar al trabajo de la Centralidad Social; se desplaza también a sus ciudadanos trabajadores. Un mundo organizado alrededor de las exigencias del mercado y no de las necesidades ciudadanas es un mundo profundamente desigual y antidemocrático. El mercado, por principio, es la antítesis de la igualdad política, ni siquiera en términos formales. Por tanto, ambos sujetos políticos (en lato sensu) trabajadores/as y ciudadanos/as están unidos.

También hay que considerar que bajo el amparo de causas en origen económicas se está llevando a cabo medidas políticas de calado. En demasiadas ocasiones, la crisis se está convirtiendo en mera ideología política. No es la economía, es la ideología; reiteran desde el pensamiento crítico. Hay que recordar que la economía es una relación social y como tal los componentes psicológicos, sociales son importantes. Pero sobre todo, el modelo económico trasluce el modelo social, la ideología de la sociedad.

Por otro lado, se está avanzando hacia formas políticas autoritarias que campan placenteramente y se acompañan con medidas económicas neoliberales. Se impone, en lo político, modelos sectarios, exclusivos, excluyentes e intolerantes. Se prioriza el recurso a la seguridad privada haciendo escaso hincapié al concepto de seguridad colectiva, de protección social. Todo ello, bajo lo que algunos definen, como el “totalitarismo de la indiferencia”; el crecimiento de la cultura de la indiferencia. Que no es otro que la redefinición del concepto griego de idiotez, el que se desvincula de lo común.

Quizás por todo ello el X Congreso Confederal de CCOO asumió el reto de confrontar con la hegemonía cultural del pensamiento neoliberal (pensamiento único). Esta apuesta por confrontar modelos y pensamientos conlleva poner el énfasis en la construcción de un pensamiento fuerte, propio, no subsidiario. Necesitamos de ese pensamiento fuerte ante los graves tiempos que vivimos nos toca asumir.

Los documentos congresuales en este apartado explicaban que se ha debilitado la democracia y la participación responsable de la ciudadanía y que esta tendencia había que revertirla. Así pues, el sindicalismo de clase toma partido por un modelo social basado en la responsabilidad ciudadana, en la virtud cívica, donde el trabajo sea un eje social básico.

Esta decisión por la confrontación cultural, de valores, entre el modelo neoliberal de pensamiento único y el modelo de la cohesión y vínculo social no es baladí. Existe un consenso, evidenciado en los diferentes barómetros de opinión, a la hora de indicar que la valoración hacia el actual sistema político ha tocado suelo. La confianza ciudadana en la política como canal de vertebración y canalización de demandas sociales se ha roto. No es que nos hayan secuestrado la política es que la política ha dejado de serlo.

Además, se percibe una tendencia hacia un nuevo modelo social donde el fraccionamiento o desintegración es notable. Unas personas se blindan del resto de la sociedad mientras otras sufren procesos de marginación. La regresión de las políticas públicas no solo produce desigualdad y pobreza también conduce a diferentes circuitos sociales, cerrando espacios que antes se compartían. Uno de los principios básicos del Estado de Bienestar eran los mecanismos de integración social; hoy se avanza, contrariamente, hacia procesos de exclusión social. Como sostiene Sassen, hemos pasado de la lógica de incorporación de la ciudadanía a la lógica de expulsión y exclusión.

Desconfianza ciudadana hacia lo político, hacia lo común; prevalencia de la corrupción; supeditación de la política a directrices económicas supranacionales; autoritarismo; aumento de la pobreza; fuerte recesión de las políticas públicas que rompen la igualdad de oportunidades, todos ellos son síntomas más que preocupantes en este nuevo modelo social. Una tendencia que es preciso revertir. Pero, ¿por dónde empezamos?

Sin dar respuestas acabadas, cualquier comienzo de renovación política y ciudadana, de ahondamiento de la calidad de la democracia, pasa por:

- La construcción de un nuevo relato social. Un relato que sea capaz de valorizar el Bien Común y Mutualismo como patrimonio social.
- Asimismo, por la defensa del republicanismo cívico. Es preciso profundizar en el ejercicio de ciudadanía. Participar de lo que es de todos todas, compartiendo espacios, conocimientos, experiencias.
- Avanzar a fórmulas de cogestión social: Diálogo Social; participación Ciudadana en las Instituciones y de los Trabajadores en la Empresa.
- Políticas Públicas soportadas en impuestos progresivos; que vertebran la cohesión social y la igualdad de oportunidades evitando la desigualdad, marginación y exclusión social.
- Situarnos en un horizonte global de propuestas, alianzas y movilizaciones conjuntas donde construyamos un Modelo Social en un proyecto Federal Europeo.
- Empezar las reformas legales precisas para ahondar en el mandato constitucional de democratización de los partidos; también en la transparencia, en la limitación de mandatos públicos, en la calidad de la democracia...

Pero quizás, el primer impulso a tomar sea de actitud y voluntad. Mostrar la voluntad de cambiar el actual marco de pensamiento dominante. Apostar por otro relato social, renovar la confianza en lo colectivo. Recuperar el relato común de ciudadanía. Reivindicar la autenticidad y la honestidad desde el concepto de actuar de acuerdo con nosotros mismos.

También en el plano de las emociones, trastocando el miedo en esperanza. Porque se trata de plasmar valores e ideales desde principios. Un renovado relato, storytelling, que debiera ser capaz de conectar con el alma social de la esperanza, con el espíritu de la superación, que, sin duda, ha sido en muchas ocasiones motor de la Historia. Se trata de comunicar, conectar y convencer. De llegar a la razón, pero también al corazón. De transmitir actitudes, formas y estilos de vida.

Una vez situados en el optimismo de la voluntad, hay que recuperar racionalmente el impulso cívico.

El civismo combina derechos y obligaciones. Aristóteles definía al ciudadano como aquel que sabe gobernar (puede participar) y sabe ser gobernado (acepta las decisiones que se toman colectivamente aunque no siempre sean las que esperaba). Tal como afirma Salvador Giner, la condición de ciudadano es el mayor logro de la civilización moderna; de esa condición parte el resto de derechos sociales. Por tanto, un primer paso es compartir, en el ideario, los valores que nos constitucionalizan como ciudadanos: Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Libertad, desde el concepto de garantizar las condiciones materiales para que la persona tenga autonomía. Igualdad, desde la extensión de esos derechos a todas las personas y Fraternidad, desde el concepto de solidaridad. La libertad, igualdad y fraternidad nutren a las personas; son caracteres definitorios de ciudadanía. Son valores que no pueden ser mercantilizados. Ni se compran ni se venden. Ya Robespierre consagró el “derecho a la existencia” para expresar la idea de que la sociedad debe garantizar a todos sus miembros, como primer derecho, el de existir material y socialmente.

Por otra parte, el derecho de ciudadanía hay que entroncarlo con la tradición republicana. Recuperar la noción de ciudadanía, como sujeto social activo que influye y construye sociedad; apostando por un orden social dependiente de la responsabilidad ciudadana. De ahí, la importancia de defender lo público y la construcción democrática y participativa del mismo. También su espacio. Los espacios públicos, son nudos de convergencia, de relación y de intercambio social; donde se suman grupos heterogéneos fortaleciendo la actitud cívica. Dotan de identidad colectiva a lo común. En la convivencia en un espacio público (físico o virtual) la gente se da cuenta de que existe; de que es suyo y de que está obligado (unido) con el otro. Como afirma Castells, lo que produce los cambios históricos es la combinación de un espacio de comunicación, un espacio de reunión, un espacio de influencia política. Compartir conocimientos y experiencias; unirse para emprender acciones desde los intereses comunes y proponer proactivamente respuestas es más ni menos que ejercicio de ciudadanía.

Algunos pensadores evidencian las serias dificultades de salidas alternativas globales al capitalismo financiero. En cualquier caso, es preciso, proponer, construir y reforzar socialmente iniciativas alternativas viables porque éstas condicionan la existente. La necesidad de expresiones alternativas a las actuales es una demanda ciudadana y una exigencia moral. Es preciso experimentar nuevas fórmulas de producción y distribución y sobre todo, de regulación.

Pero también de relación, de convivencia social. Bauman, nos recuerda la necesidad de recuperar la idea de la emancipación, de retomar el control de nuestras propias vidas como punto de partida de cambio social. “Debemos crear un nuevo modo de vida, nuevos mecanismos cotidianos que nos permitan redescubrir la felicidad fuera de los modos tradicionales que ha impuesto el capitalismo. Y debemos hacerlo ya. La sociedad necesita ayuda mutua, solidaridad, cooperativismo...”

El lustro de crisis que llevamos ha potenciado la aparición de fórmulas micro; alternativas al corazón del sistema financiero y capitalista que hay que apreciarlas con interés. La innovación social es muy activa y emergente; da vigor a la sociedad cívica. Quizás sea necesario construir alternativas en ambos frentes. Por un lado, favoreciendo nuevos modelos sociales de economía basados en la participación, responsabilidad y eficiencia social. Tales como el cooperativismo; el fomento del tercer sector de la economía; el trueque de servicios: los bancos de tiempos; el desarrollo de monedas sociales; los microcréditos; la financiación colectiva, la participación laboral en los beneficios de las empresas... Pero por otro lado, se hace preciso, seguir trabajando en la restauración de los derechos sociales perdidos y en la capacidad de proponer medidas y proyectos de sostenibilidad del Estado de Bienestar Social, nacido hace más de medio siglo.

En esa ambigüedad que nos deparan estos intensos tiempos, hay que apreciar un hecho. El desamparo por parte del Estado ha provocado intensas bolsas de pobreza. Ante ello, son muchos los colectivos sociales, mayoritariamente religiosos, pero también laicos, que se dedican a proyectos de ayuda

social, paliando el deterioro de las políticas públicas. A veces, parecen confundirse estas acciones solidarias con meros ejercicios de beneficencia proselitista que pensábamos desterradas. En otras ocasiones, es el propio Estado el que fomenta la caridad para aliviarse del gasto público. Ante ello, ¿Cómo actuar? ¿Es oportuno involucrarse en programas de ayudas sociales o limitamos a reivindicar el derecho ciudadano de Bienestar Social y los derechos laborales? El debate está abierto. Desde mi punto de vista, la salida estriba en ser capaces de reforzar la sociedad y sus vínculos, también los solidarios, de tal modo que podamos reforzar lo público. Fortaleciendo la sociedad civil, fortalecemos lo común. Fortaleciendo lo común avanzamos en la responsabilidad pública.

Asimismo, en el pensamiento y en la acción sindical puede existir también una dialéctica permanente entre modelo social y la praxis. Por ejemplo, en materia medioambiental. Como movimiento sociopolítico nos encuadramos en la apuesta por modelos sostenibles medioambientalmente y ecológicos; sin embargo, este principio choca, a veces, con la defensa de empleo de determinadas acciones contaminantes.

Por otra parte, no hay que olvidar el horizonte y la convicción por un modelo social europeo como salida y oportunidad. Y no caben procesos políticos ni sociales de renacionalización o autarquía. Tampoco de desmantelamiento de nuestra democracia. Precisamente uno de los graves problemas políticos es el desacoplamiento de poderes. Ya que mientras el poder financiero se ha globalizado, el político se ha localizado y fragmentado. De ahí la necesidad de un federalismo político europeo.

En tiempos de incertidumbre crece el temor; ante ello, las personas se refugian en lo conocido, en su pequeño cosmos. De ahí, los movimientos sociales de refuerzo identitario (entre personas idénticas, similares). En algunos casos, por identidad de religión, en otros de etnia, en otros de proximidad o localidad... No se pueden despreciar las diversas identidades colectivas forman parte de la realidad social pero se hace necesaria una pedagogía por la vocación universal, global; a la vez que intercultural. Podemos trabajar desde las nuevas experiencias de redes locales y cotidianas (nivel micro), pero también hemos de reivindicar el modelo de estado y los derechos colectivos (nivel macro). Demasiado a menudo respondemos únicamente con iniciativas micro a problemas que son macro. Lo primero es muy importante, pero deberíamos ser capaces de ser más ambiciosos y no recluirnos.

La política como vertebración ciudadana y canal de participación y demanda choca con nuestro sistema político de partidos. Tenemos un sistema político muy estrecho, en el que los partidos canalizan y colonizan prácticamente todas las esferas institucionales. Existen pocos espacios para la responsabilidad y cogestión social de lo público. Nos envuelve un partidismo casi omnímodo, donde además el funcionamiento de sus organizaciones está escasamente regulado; más allá de la fórmula genérica de que deba ser democrático.

Quizás por esa propia naturaleza endogámica y cerrada de nuestro sistema político, los partidos no han sido capaces de dar respuestas flexibles a las actuales demandas sociales. Al estar retroalimentados en su propia lógica, no han percibido con precisión los movimientos y demandas sociales de fondo que se están produciendo. Han carecido de sistema de feed-back, de retorno social. Caso dramático, ha sido contemplar la falta de respuesta ante la rigidez en la regulación de nuestro sistema hipotecario. Hecho que ha provocado un ingente número de desahucios de viviendas. Adquiriendo, a su vez, un problema social y humano de grave calado. Por todo ello, es preciso avanzar en fórmulas políticas de corresponsabilidad entre los partidos y la sociedad organizada. Hacen falta proyectos políticos que inviten a gobernar junto a la ciudadanía. En este campo, en los últimos tiempos han surgido interesantes y aleccionadoras iniciativas para avanzar en calidad y calidez democrática. Tampoco hay que olvidar que el Diálogo Social, sin ser la síntesis superadora de la lucha de clase, supone, una herramienta de los trabajadores para la construcción de modelos sociales sostenibles.

Recuperar la política, la nueva política, requiere asumir conciencia de la misma. Entender que su

objetivo es construir un proyecto colectivo (con ciudadanos que legítimamente tienen intereses y valores diferentes). Por lo tanto, la buena política no es la que nos da siempre la razón, la que nos dice siempre que sí. La buena política, trágicamente, es aquella que nos decepciona personalmente en pos de un proyecto colectivo. Por otro, en las sociedades actuales la política ha de decepcionarnos, pero no puede hacerlo de cualquier manera. Hoy sólo entenderemos esta decepción si se hace con transparencia, con criterios, con explicaciones, escuchando y respondiendo...

Finalmente, la crisis ha colocado en el espejo del fracaso a toda una generación. Generación no como cohorte de edad sino como contexto cultural generacional. Generación al compartir corrientes de pensamiento y socialización mayoritarias en ese momento. Por lo tanto, las nuevas generaciones, desde valores alternativos, tiene la obligación moral de asumir nuevos liderazgos. Todo ello, desde un compromiso ético por el Bien Común; preservando la equidad como fin; cambiando la jerarquía de valores y rechazando conductas autoritarias y corruptas. Todo ello, desde la virtud cívica nutrida por el derecho y deber de estar informado, por la tolerancia, el respeto a la pluralidad y la confianza en la acción individual para cambiar las cosas. ♦

NEOCONSERVADURISMO, NEOLIBERALISMO Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA: UN NUEVO CICLO DE PROTESTAS¹

PEDRO CHAVES GIRALDO

«Cuando el noble enseñe al sastre su empleo
y, en lugar de herejes, ardan los puteros,
será porque el reino de Albión
ha entrado en la gran confusión.
Cuando en todo pleito se haga justicia,
Y amo y escudero sin penurias vivan;
Cuando nuestras lenguas no murmuren más
Y nuestros rateros dejen de robar;
Cuando el usurero saque sus reservas
Y erijan iglesias putas y alcahuetas,
Un tiempo habrá entonces, ¿Y quién lo verá?
En que nuestros pies sirvan para andar».

Profecía del Bufón (Final III.ii), El Rey Lear, Shakespeare, 1605.

RESUMEN

El artículo propone un análisis sobre el 15M en el contexto de la crisis de la política que viven nuestras sociedades. Se trata de responder a cuestiones que tienen que ver con el origen de la protesta, su originalidad, sus argumentos y propuestas, sus perspectivas y su legado.

El análisis propone, en primer lugar, enmarcar las protestas de los indignados en el contexto de los cambios tectónicos que han vivido nuestras sociedades y que han sido dirigidos y orientados por un bloque social y político liderado por una élite global. El conjunto de esos cambios se relaciona con el concepto de globalización. Lo destacable de este proceso remite a la modificación sustancial de las condiciones en las que se hizo posible el pacto social de posguerra y que lo hacen ahora irreproducible.

El artículo se detiene a explicar la relevancia del asalto que el neoliberalismo ha lanzado contra los fundamentos de la democracia liberal. La situación actual cambia los principios de constitucionalidad, igualdad ante la ley, libertades política y civiles, autonomía política y universalismo por los criterios de mercado, la relación coste/beneficio, la eficacia y la rentabilidad.

La confluencia de estos dos momentos: el fin del contrato social de posguerra y su irreproducibilidad y el asalto del neoliberalismo a la democracia, marcan una frontera que nos anuncia la emergencia de un nuevo contractualismo de matriz claramente neoliberal y confrontado con el contrato social que dio origen al estado del bienestar.

La hipótesis para explicar el 15M se relaciona con el concepto de “estructura de oportunidades políticas”, propuesto inicialmente por Peter Eisenger y desarrollado por Sidney Tarrow. El concepto in-

corpora entre sus variables: el grado de apertura o cierre del sistema político y la capacidad de este para gestionar nuevas demandas; el nivel de inestabilidad o no de las alianzas políticas; la posición estratégica de aliados poderosos y los conflictos políticos entre las elites.

En todo caso, creo que lo más significativo respecto al 15M es que inaugura un nuevo ciclo de protesta². La articulación de nuevas oportunidades políticas y la propia acción de los movimientos ha situado en un nuevo contexto la respuesta social a la crisis económica. Todo parece indicar que la crisis y sus efectos serán duraderos y no se vislumbra el momento de un cambio a mejor. Por otra parte, persisten las políticas que han sido impugnadas por el 15M y por otros actores. Por último, la politización de la crisis económica ha sacado la gestión de la misma del espacio de las decisiones inevitables y la ha convertido en una elección ubicable en el eje izquierda-derecha.

INTRODUCCIÓN

Decía Alain Touraine³ que lo más sorprendente de la situación de crisis brutal que estamos viviendo era el silencio de las víctimas. El libro cerraba su edición justo cuando estallaba en Madrid, y otros lugares de España, una revuelta singular y que llamó rápidamente la atención de todo el mundo. Nadie pudo dejar de sentirse preocupado por el alcance de las demandas, por las críticas y por la masividad de la protesta, pero también por el original modo de organización y por el uso de una democracia deliberativa de alta intensidad.

Parecía que las víctimas, finalmente, sí reivindicaban su espacio a través de una gestión inusual de su «voz», esto es de su capacidad de expresarse en el espacio público. Precisamente, esta condición diferente y desafiante del 15M casi desde cualquier punto de vista, fue la primera cuestión llamativa de su irrupción en la agenda política. Ni siquiera era sencillo determinar con claridad de qué tipo de sujeto estábamos hablando. No era un partido político, no era un grupo de interés, no era un movimiento social. Pero sin ser nada reconocible en los viejos conceptos de la ciencia política o la sociología, su impacto político estaba siendo espectacular y muy importante.

Quedaba por ver si esta «presencia colectiva» como la ha llamado Boaventura de Sousa Santos, estaría en disposición de revertir la tendencia de la «sociedad capitalista» a la desaparición de los actores⁴. No es este asunto menor. Los síntomas de esa «crisis de la representación» tradicional son conocidos y reiterados. La fragmentación y/o hundimiento de los modelos clásicos de representación no han impedido la emergencia de otras formas de dar satisfacción a la necesidad de encontrar referencias en los conflictos. Las perspectivas neopopulistas, las fórmulas de relación «directa» del líder con su electorado o base social, son una de ellas, pero no la única. Rosanvallon⁵ plantea la emergencia de la impolítica, esto es, de fórmulas de control indirecto del poder, expresión de la consolidación de una sociedad de la desconfianza. En cualquier caso, crisis de la representación y crisis de los sujetos sociales y políticos que han dado sentido y sustancia a nuestras democracias representativas hasta el momento.

El propio movimiento 15M o el movimiento de los indignados (usaremos indistintamente ambas calificaciones en nuestro texto), expresaba su punto de vista sobre estos asuntos elevando a categoría de símbolo mismo de la movilización lemas como: «no nos representan» o «lo llaman democracia y no lo es».

En todo caso, la cuestión que se planteaba es hasta que punto, el movimiento de los indignados recuperaba una perspectiva de la representación en condiciones de reverdecer la confianza en la política y la voluntad de canalización de demandas ausentes de la agenda política institucional.

Se albergaban, también, dudas acerca de la condición espumosa y efímera de un movimiento que, aparentemente, había salido de ningún sitio y no había pedido permiso para reivindicar su espacio.

Si el 15M se convertiría en un actor político estaba por ver y parte del cumplimiento de ese desafío estaba asociado a su «utilidad», esto es, a tratar de cumplir algunos objetivos asociados a las demandas del movimiento.

Desde entonces una parte de los análisis han incidido en la futilidad del movimiento y en su liviandad programática. Zygmunt Bauman, resumía una buena parte de esos acercamientos manifestando que «el 15M es emocional, le falta pensamiento»⁶ y alertaba sobre el hecho de que el movimiento corría el riesgo de evaporarse.

Ambas cuestiones, la que hace referencia, en primer lugar, a la condición inocua del movimiento, aquella que querría describir que el movimiento ha sido espumoso, muy poco sustantivo, nos exige reflexionar sobre la relación entre movimientos sociales y política. Es importante que determinemos qué estamos intentando medir exactamente, y que tratemos de analizar los diferentes planos de interacción entre la acción colectiva, la movilización social, la política y sus repercusiones para el conjunto de la sociedad.

La segunda cuestión, la de saber si el 15M ha sido o puede convertirse en actor político (no necesariamente en partido político), está aún por dilucidar en el medio plazo. Lo primero que habría que señalar es que para intentar atinar con la respuesta, necesitamos saber que estamos preguntando exactamente. No podemos seguir dando por hecho el significado de lo que es un actor en el contexto de un mundo en transición, que ha alterado profundamente la estructura de los conflictos y su capacidad de representación. Si la pregunta se refiriera solo al impacto mediático y simbólico de un movimiento, aún cuando este fuera puntual y/o ocasional, podríamos decir que en el período de máxima incidencia pública de este movimiento, la respuesta sería que, obviamente, sí. Pero la duda y la respuesta deben dar cuenta de la posibilidad de revertir esa tendencia histórica de la crisis del capitalismo a terminar con todos los actores, sacrificados en el altar del mercado.

En esta hora, el movimiento como tal ha, prácticamente, desaparecido del espacio público. La etiqueta 15M parece languidecer atrapada entre su éxito y sus dificultades para continuar. Parece agotado el momento mágico de las acampadas y el proceso deliberativo que acompañó esos días a miles de jóvenes y no tan jóvenes, que vivieron una experiencia generacional única de politización intensa. Y sin embargo, las encuestas siguen señalando un increíble apoyo a “las causas” del 15M.

Pero todo indica que este movimiento ha dejado un legado muy importante: ha reverdecido la movilización crítica y ha reivindicado la responsabilidad política por lo que está ocurriendo. Sobre estos aspectos hablaremos más adelante.

Así es que, nada más aventurado que hacer predicciones sobre los movimientos sociales. Éstos tienen por costumbre impugnar las proyecciones y perspectivas de los analistas y una tendencia irremediable a hacernos quedar mal. Así es que les anticipo mucha mesura y prudencia –no exenta de algún atrevimiento- respecto a los escenarios previsibles de evolución de un movimiento tan singular.

Intentaré, eso sí, ser más contundente respecto a aquellas cuestiones que nos pueden permitir entender el porqué de su emergencia, la fisonomía de los actores protagonistas y sus principales reivindicaciones. También en este punto podríamos haber aducido humildad en el análisis, recordando que doscientos años después de revolución francesa, un dirigente chino afirmó que aún no había transcurrido tiempo suficiente como para poder realizar una apreciación equilibrada de su trascendencia histórica. Pero no avanzaríamos mucho con tanto comedimiento.

1. Cuatro propuestas de interpretación

Las tres cuestiones, en forma de hipótesis, que pretendo defender en este trabajo otorgan esa explicación sobre la emergencia y condición de los protagonistas del 15M, a una confluencia de factores entre los que destacaría los siguientes: en primer lugar, un conjunto de cambios tectónicos que han mutado la condición de nuestras sociedades y que han sido dirigidos y orientados por un bloque social y político liderado por una elite global. Este liderazgo global y minoritario ha sido posible con la complicidad del Estado y con el apoyo activo y/o pasivo de importantes sectores de las viejas clases medias (las vinculadas al Estado del bienestar) y las nuevas clases medias crecidas al calor de los ciclos de expansión económica desde finales de la década de 1970. Este liderazgo ha construido un sentido común cuyas referencias básicas pueden ser formuladas alrededor de las ideas de Estado mínimo, la condición central del mercado como regulador social y la pérdida progresiva de espacio de la política, atenazada por el deterioro y minorización creciente del espacio público y por el desprestigio de su acción relacionado con decisiones que, justamente, merman y deterioran sus condiciones de existencia y relevancia.

Lo importante de este conjunto de cambios remite a la modificación sustancial de las condiciones en las que se hizo posible y reproducible el pacto social de posguerra.

En segundo lugar, la crisis económica ha puesto de manifiesto la irreproducibilidad de este pacto social. Es decir, si durante el período de afirmación y consolidación del proyecto neoliberal, pudo pensarse y mantenerse, precariamente, el pacto social, la crisis ha mostrado la imposibilidad de su mantenimiento, ni siquiera con un deterioro mayor de sus condiciones de reproducción. Lo que la crisis fractura es la tendencia histórica que dio sentido, precisamente, a ese gran acuerdo de convivencia, al predominio estructural de los procesos de inclusión sobre los procesos de exclusión⁷.

La cuestión está en el efecto acumulado de estos decenios de desregulación, privatización y crisis del régimen general de valores propio de nuestra modernidad. Ese efecto acumulado tiene dos implicaciones importantes para esa no reproducibilidad del pacto social de posguerra.

En primer lugar, económica, las bases de autorreproducción del capitalismo versión neoliberal hacen inviable el sostenimiento de un Estado del bienestar, en condiciones de asegurar sustento material para el pacto social y para esa perspectiva histórica de inclusión creciente en la que creíamos vivir. Por primera vez en la historia de occidente, sin la intervención de una guerra o de una catástrofe natural, los hijos vivirán, con toda probabilidad, peor que sus padres. Aún cuando en la explicación de la crisis cuentan mucho la codicia y la avaricia sin límites de los que más tienen⁸, lo sustancial remite a los cambios económicos en el capitalismo tardío y, entre ellos, la centralidad del sistema financiero en el conjunto de la estructura económica y sus exigencias. La crisis marca un antes y un después: los viejos tiempos no volverán.

En segundo lugar, como señala Wendy Brown⁹, el neoliberalismo ha lanzado un asalto frontal contra los fundamentos de la democracia liberal. Si la globalización ya había vuelto problemáticas las instituciones liberales, al vaciarlas de su sustancia reguladora y representativa, la situación actual implica una vuelta de tuerca que cambia los principios de constitucionalidad, igualdad ante la ley, libertades políticas y civiles, autonomía política y universalismo por los criterios de mercado, las relaciones coste/beneficio, la eficacia y la rentabilidad. El Estado deja de ser la encarnación de la soberanía popular para convertirse en una arena propicia para la gestión de negocios y el reparto de prebendas a partir de la legitimidad, cada vez más problematizada, de esa institución.

Convendría aclarar en este punto que el Estado no es víctima, sin más, del proceso de globalización. No comparto la idea de la pérdida de relevancia del Estado fruto de su situación de objeto en el devenir del mundo globalizado. Como si lo ocurrido hasta ahora se hubiera hecho a expensas del Es-

tado y contra su voluntad. Esta es una idea insostenible. Sin el concurso activo de los Estados y de sus élites políticas este proceso hubiera sido imposible. Ahora bien, conviene reconocer, por sus implicaciones, esta situación paradójica del Estado, atrapado entre las exigencias de un mercado internacional, al que se reverencia sin crítica, y que demanda minimizar el papel del Estado, para que este deje de ser un obstáculo en el camino hacia la hiperglobalización¹⁰ y los efectos devastadores de estas políticas sobre el mismo Estado que las enuncia. Si el Estado está usando su reserva de legitimidad para acometer estas políticas de desregulación y flexibilización en todos los órdenes, hay que decir que los efectos de estas políticas malbaratan esa reserva, agotando con más rapidez sus recursos.

La confluencia de estos dos momentos: el fin del contrato social de posguerra y su irreproducibilidad y el asalto del neoliberalismo a la democracia, marca una frontera que nos anuncia la emergencia de un nuevo contractualismo de matriz claramente neoliberal y confrontado con el contrato social que dio origen al Estado del bienestar.

Este nuevo contrato se caracteriza por la manifiesta posición central del mercado como articulador social; la subordinación, consecuente, de la política a la economía; la minorización de los sujetos políticos tradicionales como representantes y como interlocutores y un nuevo papel de las instituciones como impulsores de este nuevo modelo de contrato social, por un lado y como gestores al servicio de la disminución de los costes de oportunidad de las empresas.

Por último, y por lo que hace a las hipótesis de este trabajo, convendría intentar aproximarse a una explicación de los porqués de la emergencia de este fenómeno del movimiento de los indignados. En primer lugar, la estructura de oportunidades política que ha posibilitado la emergencia de esta reacción social tan importante tiene que ver con el efecto disruptivo que sobre el sentido común neoliberal o, mejor, sobre la racionalidad política neoliberal¹¹, ha tenido la crisis económica. Conviene recordar que al comienzo de la misma escuchamos aquellas declaraciones que pedían desde «refundar el capitalismo» a «congelarlo». Opiniones emitidas, todo hay que decirlo, por eximios representantes del orden establecido. Era evidente que se cumplían algunas de las condiciones que suelen argüirse para dar cuenta de la aparición de la acción colectiva: la percepción de un cambio significativo en nuestra sociedad y de la aparición de fracturas o grietas en el, hasta entonces, immaculado lienzo de la narración hegemónica y, con ello, la evidencia de que las elites dominantes se encontraban perturbadas y divididas respecto a lo que hacer.

No es significativo para esta explicación que ese momento de incertidumbre durase unos meses. Tiempo suficiente para que se activase la protesta y que esta fuera, además, muy transversal en términos de afinidades políticas.

Convendría incorporar, justamente aquí, el espectacular incremento de la desconfianza hacia la política y los políticos. Diferentes encuestas daban (y dan) cuenta de esta aversión y antipatía hacia la actividad política. Entre las explicaciones plausibles aparecen las relacionadas con la certeza de que, respecto a la política económica al menos, no hay diferencias apreciables entre las grandes formaciones políticas; que los políticos no hacen lo que deben; que los políticos –la mayoría al menos- se pliegan sin demasiada oposición a las exigencias de los celeberrimos mercados; el conocimiento público de que la arrobada relación de algunos políticos con los mercados tiene una generosa recompensa cuando estos se retiran; la certeza de que hay leyes y normas que se realizan con el fin de satisfacer intereses inconfesables y privados o el tema de la corrupción y su capacidad propagar la metástasis a todo el sistema político de su ponzoña.

No obstante, fuerzas políticas minoritarias que, hasta entonces, arrastraban sus discursos por los lugares menos luminosos del espacio público, encontraban una nueva oportunidad para recordar sus previsiones y, de paso, se ofrecían a servir de cobertura institucional al movimiento. Esto es, el

movimiento encontraba apoyo en aliados que le ayudaban a trascender el umbral de la calle y «usar» lugares reservados a la representación tradicional.

En segundo lugar, conviene abordar el asunto de la novedad o no del movimiento. A mi juicio el 15M daría cuenta de una nueva realidad en la acción colectiva y en la protesta. La movilización social vinculada al 15M sería así, desde este enfoque, la representación de un nuevo momento y de un nuevo tipo de movimientos. Este movimiento es novedoso no tanto por las reivindicaciones como por la articulación de las mismas; por la ocupación del espacio público; por el modo de organización y sobre todo, porque el contexto otorga a su acción una significación novedosa y original.

Está por ver si esa novedad reflejaría elementos sostenibles en un nuevo período de conflicto social, que resultarían propios, también, para otros movimientos posteriores. O su novedad se agotaría como acción colectiva de transición que respondería a condiciones rápidamente cambiantes e irrepetibles. Si esto fuera así, el 15M habría prestado a la movilización social una amplia cantidad de recursos para poder ser dispuestos en otra estructura de conflicto y en otro ciclo de acción colectiva.

Por último, es imposible explicar la coalición social que ha posibilitado la irrupción de los indignados, sin referirse a la crisis de sentido de las diferentes tradiciones de la izquierda, la reformista y la alternativa. La izquierda socialdemócrata ha hecho particularmente bueno el viejo axioma según el cual «la izquierda se echa de menos cuando no está en el gobierno y se deplora cuando está». Tras la caída del muro de Berlín, esta pensó que se abría un tiempo de oportunidades sin límite habida cuenta de la cuarentena (como mínimo) a la que iba a ser sometida la tradición comunista y/o revolucionaria o alternativa.

Desde entonces su lógica de actuación ha sido la de la acomodación a los valores dominantes y los intentos de reinterpretación de los valores neoconservadores que empezaban a ser dominantes. Leída la globalización o como un mar de oportunidades o como un mal inexorable, la propuesta política de la socialdemocracia perdía prestancia y capacidad de atractivo. De hecho, una vez en el gobierno, ha contribuido (con desiguales dosis de entusiasmo, justo es reconocerlo), a promover y propiciar el grueso de las recetas de ajuste duro promovidas por «los mercados». El fiasco paradigmático de este empeño de acomodación lo ha representado mejor que otras opciones: la tercera vía de Tony Blair.

Recordemos que esta acomodación de la socialdemocracia al neoliberalismo, fue formulada y defendida incluso en términos académicos. Pero su desaparición política y su insustancialidad programática no han dejado huella, pero si han puesto de manifiesto los límites de esa estrategia adaptativa. La socialdemocracia forma parte de los males del sistema a los ojos de millones de personas que no distinguen, en esta tradición, diferencias semánticas significativas respecto a la derecha supuestamente antagonista.

En España el gobierno de Zapatero ofrece un balance poliédrico respecto a su gestión, sin duda. Pero en los asuntos que nos ocupan su actividad puede reseñarse como la de una acomodación clásica al ciclo económico: gasto cuando hay crecimiento, limitaciones cuando hay recesión o dificultades. Pero sin duda la reforma constitucional express, con la introducción del artículo 135 de la constitución, señala los límites reformistas de este proyecto en el contexto de la globalización.

Por lo que respecta a las tradiciones alternativas, parece evidente que las viejas tradiciones emancipadoras han agotado su capacidad de enunciación de la utopía y del cambio social. Quedan, a lo sumo, como testimonio de una época de vivencia épica de la política y de un compromiso insobornable contra la injusticia, pero eso no es suficiente para representar lo viejo y lo nuevo, simultáneamente. Su condición de reservorios de espíritu de resistencia les otorga un papel inestimable en su condición

de opositores a los desmanes del capitalismo senil, pero no es atractivo suficiente para canalizar nuevas demandas y, sobre todo, nuevas propuestas.

En ambos casos, su condición de partidos políticos les ha emparentado –a veces injustamente- a los ojos de la ciudadanía, como parte del mismo problema: los partidos y la política.

La crisis de la izquierda tradicional no es necesariamente la crisis de la izquierda, en general, ni siquiera la advertencia sobre un futuro sin partidos políticos en ese espacio de referencia. En este punto el 15M puede ser leído como una oportunidad para la renovación programática, organizativa y generacional de la izquierda y de las tradiciones de resistencia y emancipación.

2. Del terrorismo global a los problemas económicos y sociales

El Siglo XXI comenzó con los atentados de Al Qaeda sobre las Torres Gemelas en Nueva York. El 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines, pilotados por terroristas islamistas, impactaban sobre dos edificios emblemáticos de Estados Unidos produciendo una conmoción mundial de consecuencias incalculables, en aquel momento.

La expresividad de ese atentado terrorista incalificable ponía de relieve cambios en nuestro mundo con implicaciones en todos los ámbitos. De pronto se retaba al imperio desde presupuestos cultural-religiosos y mediante acciones lejos de los estándares convencionales, fueran estos políticos o militares, con efectos devastadores en términos simbólicos. Emergía con mucha fuerza el papel de la identidad, el uso de las nuevas tecnologías y la condición global de algunos hechos políticos.

La respuesta de Estados Unidos y sus aliados tuvo como consecuencia un importante conjunto de cambios de naturaleza política y geoestratégica que siguen proyectando su larga sombra hoy día.

Siguieron después los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y del 7 de julio de 2005 en Londres, cuya brutalidad y objetivos (los sectores más populares) fueron buena muestra de la condición criminal de los que los cometieron.

Pero mostraron un enemigo diferente que usaba los canales hegemónicos de la globalización para transmitir un discurso preñado de un pasado antimoderno y una reivindicación de una identidad cultural anclada en una visión profundamente retrógrada de la religión y la moral.

Pero la larga sombra de esos días proyectada sobre nuestro presente, remite a la actividad de los gobiernos en esa hora. Una respuesta global en clave conservadora buscaba mostrar el poder de los Estados agredidos y, reinterpretar en clave securitaria, los desafíos del momento.

De ese tiempo rescatamos al menos tres cuestiones relevantes que han moldeado la acción política de los Estados desde entonces. En primer lugar, la idea del Estado de excepción como normalidad. La retórica posterior a los atentados hablaba el lenguaje de lo excepcional, un cambio epocal que nos obligaba a reconsiderar nuestra civilización y sus relaciones con otras culturas. De ese momento data la carta que 60 conocidos intelectuales norteamericanos publicaron¹² en febrero de 2002. La idea de la guerra justa, de la guerra defensiva para defender al inocente, es el argumento central de ese llamamiento. Aunque, posteriormente, algunos de esos intelectuales se han desmarcado abiertamente de la política de la administración Bush, su propuesta añadió agua al molino de la singularidad de la situación y su más que probable extensión en el tiempo.

La política, tal y como la habíamos conocido hasta ese momento, podía ser congelada a voluntad de los nuevos poderes ejecutivos de los que las administraciones se dotaban entregados por Parlamentos asustados y con poca decisión.

En ayuda de ese imaginario de excepcionalidad se desplegó una importante actividad legislativa. Y

esta sería la segunda cuestión significativa. El trade off democrático de esos días aparecía magníficamente interpretado por esa sentencia que proclamaba lo siguiente: «aquí tienen nuestros derechos civiles, ahora protéjannos». Y, efectivamente, la entrega de derechos civiles se produjo y fue sancionada normativamente. La USA Patriot Act, aprobada el 26 de octubre de 2001, suponía un radical recorte de derechos civiles y su subordinación, supuestamente, a la estrategia de lucha contra el Terrorismo.

Recordemos, simplemente, las críticas que ya en su momento recibió esa Ley por dejar la vida privada de los individuos expuesta a los servicios de inteligencia y de represión. La norma, conviene recordarlo, fijaba un plazo (hasta finales del año 2005), de prescripción de aquellas normas más lesivas para los derechos civiles y políticos. Tras un arduo debate, fue finalmente ratificada el 9 de marzo de 2006 por el Presidente Bush con muy pocos cambios respecto a la original. Es decir, aquello que fue aprobado en condiciones de excepcionalidad se ha convertido en la nueva normalidad.

Cambios legislativos de parecida naturaleza se produjeron en varios países y queda como testimonio oprobioso de ese tiempo el penal de Guantánamo, que ponía de manifiesto la capacidad de la primera potencia mundial para burlar el derecho internacional sin más explicaciones. Con posterioridad WikiLeaks demostró, haciendo pública información secreta sobre esta materia, hasta qué punto se habían violado sistemáticamente derechos y se había encarcelado inocentes sin más culpa que su aspecto, estar en un lugar equivocado o tener un familiar supuestamente terrorista. Pese a las pretensiones iniciales de Obama, el penal sigue abierto mostrando al mundo la doble vara de medir en la interpretación de los derechos humanos y del cumplimiento de la legalidad democrática por parte de la primera potencia mundial.

La combinación de psicosis, lenguaje bélico desde el poder y cambios normativos, instaló en la sociedad la idea de un momento de excepcionalidad cuyos riesgos compensaban la transferencia de poder e intimidad a los servicios más opacos del Estado: la inteligencia y los cuerpos de seguridad. Lo importante es, precisamente, esto, la aquiescencia de las poblaciones que entregaron su patrimonio de derechos a cambio de la protección del Estado, sin preguntar nada más.

De paso se consolidó en el imaginario social la idea de que las situaciones excepcionales precisan de medidas excepcionales. Y que ese nuevo estado de la sociedad exige disposiciones que serán dolorosas. Probablemente, nunca antes el poder político —en connivencia con otros poderes— tuvo tantos recursos a su disposición para hacer del miedo un gran regulador social. Se ponían sólidos cimientos cultural-políticos para usar estos medios en otros momentos excepcionales. Seguro que la ocasión se presentaría.

La tercera cuestión hace referencia a un cambio en la perspectiva del Estado. Si la lógica neoliberal ha buscado afanosamente su desmontaje pieza a pieza, la perspectiva de la «lucha contra el terror» incrementó el poder del Estado y le habilitó para incrementar su poder represivo y fiscalizador. Podría parecer sorprendente que, precisamente, aquellos más denodados defensores de la entronización del mercado y de su lógica como único referente válido incluso en términos morales, sean, al tiempo, los más fervientes defensores del incremento en la capacidad represiva y vigilante del Estado. Pero es solo una paradoja aparente.

El análisis foucaultiano del neoliberalismo ya mostraba que la nueva racionalidad política no se acompañaba de una disminución de las prerrogativas del Estado, o incluso de su perímetro, sino, al contrario, de un potente voluntarismo estatal.

Para Wendy Brown, la suma de fuerzas que han defendido este conjunto de políticas que hemos denominado, convencionalmente, neoliberales, representa la articulación de un conjunto muy variopinto

de integrantes: ultras religiosos y políticos; rancios conservadores; una parte de la elite social y profesional que ha prosperado con la globalización; la jerarquía de varias iglesias; los dirigentes de varias familias políticas etc... en términos culturales, ese bloque político y social mezcla de manera virtuosa la perspectiva neoliberal y la neoconservadora.¹³ Ambas abiertamente diferentes e incluso contradictorias en algunos puntos, se refuerzan en una dinámica incremental e integradora. Por una parte, el aumento de la autoridad del Estado, es el corolario evidente del proceso de despolitización individual que viene produciéndose. Por el otro, el neoconservadurismo y su reivindicación del Estado, así como sus afirmaciones morales e identitarias, proponen un reencantamiento político, susceptible de compensar el desencantamiento producido por la lógica tsunami de las prácticas neoliberales en todos los órdenes.

Este punto me parece especialmente importante. Entender, entre otras cosas, el 15M nos exige salir de la visión estrecha y simple que considera el neoliberalismo, solo, como una ideología económica o que desprecia o minusvalora los efectos combinados de estas políticas, sobre la democracia, el ejercicio de los derechos y la cultura política de nuestras sociedades.

3. Las consecuencias políticas de la globalización: el giro neoautoritario

Hemos vivido un acumulado de situaciones y procesos que han convergido en cambios tectónicos en nuestras sociedades. Nuestra vida ha transitado del mundo previsible y ordenado del fordismo, al mundo desordenado y descontrolado de la globalización¹⁴. Esos cambios han afectado a todos los ámbitos, pero es en la esfera política donde las transformaciones han resultado, aparentemente, menos manifiestas y, sin embargo, son más significativas y sensibles. La consecuencia más llamativa es esta pérdida de significación de la política como institución reguladora de la vida de las comunidades. Sometida hoy al dominio de la lógica del mercado y a la pérdida de legitimidad por sus decisiones, pero sobre todo, por sus subordinaciones. Estos cambios están significando un auténtico cambio de sistema. Una mutación sustancial de nuestras condiciones a la hora de pensar la vida en comunidad. Estos cambios afectan a las instituciones y sus lógicas, pero también a las poblaciones y su disposición respecto a los asuntos públicos, así como a su virtud cívica.

Entre los autores que ha reflexionado sobre esta cuestión, destacaría a Luigi Ferrajoli que se refiere a la emergencia de poderes desregulados y salvajes consecuencia del proceso de deconstitucionalización de nuestros Estados de derecho¹⁵. Este proceso, desconocido por la masividad e incumplimientos del orden constitucional, se explica por la doble crisis destructiva de la representación política, por arriba y por abajo. En todos los casos se pone en cuestión o se niegan otras tantas separaciones entre esferas o niveles de poder: entre Estado y pueblo, entre esfera pública y privada, entre fuerzas políticas e instituciones públicas, entre poderes mediáticos y libertad de la cultura y de la información¹⁶.

Formarían parte de esa doble tenaza destructiva, según Ferrajoli, cuestiones como la verticalización y la personalización de la representación con la aparición de liderazgos mediáticos y carismáticos que permitirían –a juicio de sus defensores– formas más genuinas de democracia directa y participativa. Un segundo factor, sería el de la progresiva confusión y concentración de poderes. Esto es, tanto la primacía creciente de los intereses privados sobre los públicos, como la subordinación al ejecutivo del resto de poderes. A juicio de Ferrajoli: «[...] cabe hablar de una forma singular de regresión premoderna. En síntesis, de una forma de patrimonialismo populista o de populismo patronal, que se manifiesta en una suerte de apropiación privada de la esfera pública, acompañada de formas de feudalización de la política y de las instituciones basadas en el intercambio entre fidelidad y protección». El tercer aspecto se refiere al proceso de cartelización de los partidos políticos o a la creciente integración de los partidos en el Estado. El último aspecto habla de «la total ausencia

de garantías de la información». La combinación, letal para la democracia, del control político y el control propietario de los medios de información.

Los dos aspectos de la crisis por abajo nos hablan de la «homologación de los que consienten y la denigración de los que disienten», junto al declinar del sentido cívico y del compromiso ciudadano, fruto de la exacerbación de los peores egoísmos individuales y sociales.

Todo este conjunto de factores ha modificado las condiciones que permitieron, mejor o peor, la pervivencia del pacto social de posguerra. Recordemos que este pacto fue, en gran medida, el fruto tanto del acumulado histórico de reivindicación de derechos, como de las condiciones del final de la Segunda Guerra Mundial, entre las que merece la pena destacar: la confrontación sistémica entre capitalismo y socialismo y la acrecida importancia de los partidos y organizaciones sindicales obreras y de izquierdas.

El pacto social funcionó como un gran acuerdo de apaciguamiento de la confrontación de clases y se instituyó como un modelo de convivencia, un nuevo contrato social que favoreció un importante ciclo económico expansivo y, sobre todo, perspectivas razonables para la mayoría de la sociedad de prosperidad y seguridad. Por vez primera en la historia, estaba al alcance de una mayoría pensar en el ciclo vital con una cierta estabilidad y confianza. El futuro ya no era, necesariamente, una amenaza. En palabras de Tony Judt: «¿Qué legaron la confianza, la tributación progresiva y el Estado intervencionista a las sociedades occidentales en las décadas que siguieron a 1945? La sucinta respuesta es seguridad, prosperidad, servicios sociales y mayor igualdad en diversos grados»¹⁷.

Esta articulación de prosperidad y certidumbre, generó un vínculo muy intenso entre democracia y economía. Esta relación dimensionó la intervención de la política en la economía con la voluntad de favorecer procesos de redistribución de riqueza con una perspectiva claramente igualitarista.

Esta vinculación de la democracia con el progreso social no era nueva. De hecho, ese nexo se construyó históricamente fruto del conflicto social protagonizado por el movimiento obrero o el movimiento feminista, entre otros. Frente a la propuesta elitista o liberal de reducir la democracia a la elección de los que nos van a gobernar en los próximos cuatro años, o bien, acentuar la separación entre política y economía, de manera que la democracia sea un asunto de ciudadanía al margen e independiente de consideraciones económicas, sociales o de bienestar, las tradiciones de base obrera, feminista, republicana y marxista, reivindicaron una democracia sustancial y con capacidad para mejorar las condiciones de vida de la mayoría. La política y su gestión deberían ser puestas al servicio de garantizar sociedades del bien vivir para una parte sustancial de la población.

La virtud de las «décadas doradas» del Estado del bienestar, más allá de legítimas críticas, es que consolida esa tradición, le da un sentido y le ofrece un marco institucional y político en el que verse proyectado.

Se construyó, así, ese triángulo virtuoso de la democracia que relaciona de modo responsable las instituciones con las comunidades políticas y las políticas públicas con las poblaciones. En resumen, esa idea fuerte de la democracia contribuyó a consolidar en el imaginario social la narración de una concepción de la misma fuertemente protectora y al servicio de las mayorías. Los procesos democráticos podían revertir y encauzar los signos adversos del funcionamiento del mercado sobre la base del control político que las instituciones estatales realizaban, de manera efectiva, sobre la mayoría de los flujos económicos significativos.

3.1. Hiperglobalización y crisis económica: el fin del contrato social socialdemócrata

El proceso de hiperglobalización ha permitido revertir la situación en todos los órdenes y ha justificado

la voladura, más o menos controlada, del Estado del bienestar y del contrato social que le estaba vinculado, por mor de las necesidades de la economía. Nada más significativo que el cambio de prioridades en la política de los Estados: del desempleo a la inflación y el déficit público.

El desplazamiento a una esfera transnacional del espacio de decisión en el ámbito económico, junto con otros factores, ha cambiado por completo la naturaleza de los Estados, con consecuencias sustanciales para ese contrato social que había presidido la vida de nuestras sociedades hasta ahora.

Es sabido que ese estado de bonanza económica y esa posibilidad de autodeterminación política eran solo, en realidad, predicables para un conjunto relativamente reducido de Estados. Pero no es menos cierto, que esa perspectiva política y social se convirtió en un objetivo, además de un deseo, para la inmensa mayoría de países y de poblaciones. Mediante este modelo de convivencia y este contrato social, Europa se convertía en un referente y en un modelo frente a Estados Unidos, toda vez que, primero, el socialismo real se mostró como una alternativa inviable o indeseable o las dos cosas¹⁸; y, en segundo lugar, tras la caída del muro de Berlín y la implosión del modelo, no había más que un gran paradigma en competencia con dos alternativas: el modelo de capitalismo anglosajón, desregulado y salvaje y el modelo europeo de capitalismo embridado y democráticamente controlado.

Los empeños por desmontar el Estado del bienestar europeo llevan tiempo en la agenda y, de hecho, se han producido cambios que han modificado sensiblemente el contrato originario. Pero no ha sido hasta la aparición de la crisis económica que se ha hecho visible la condición de «reproducible» para ese contrato social.

Las dos últimas décadas han erosionado y debilitado hasta hacerlo casi irreconocible ese gran acuerdo de convivencia e integración económica y política. Pero mientras las crisis del sistema financiero ocurrían en la periferia, para las mayorías en nuestras sociedades era posible seguir imaginando o bien que los incendios serían controlados o bien, que, pasados algunos momentos de incertidumbre era pensable regresar a la situación anterior.

La crisis ha tenido un efecto devastador sobre el imaginario de un proceso democrático con capacidad de controlar las decisiones económicas. Pero también sobre la perspectiva de un progreso económico donde predominarían las lógicas inclusivas sobre las de exclusión. Los datos sobre el incremento de la desigualdad en los últimos 30 años son demoledores.

Según la OCDE¹⁹ en su informe Seguimos divididos: ¿por qué la desigualdad sigue aumentando? publicado en diciembre de 2011, la diferencia entre ricos y pobres ha alcanzado su nivel más alto en 30 años. Los ingresos medios del 10 por 100 más rico es ahora cerca de nueve veces mayor que los del 10 por 100 más pobre en toda la OCDE.

La brecha de ingresos ha aumentado incluso en los países tradicionalmente más equitativos, como Alemania, Dinamarca y Suecia, del '5 a 1' en la década de 1980 hasta el '6 a 1' de hoy. La diferencia es de '10 a 1' en Italia, Japón, Corea y el Reino Unido, y aún mayor, de '14 a 1' en Israel, Turquía y Estados Unidos. En Chile y México, los ingresos de los más ricos siguen siendo más de 25 veces superiores a los de los más pobres, los más altos de toda la OCDE.

La desigualdad de ingresos es mucho mayor en algunas grandes economías emergentes fuera de la zona de la OCDE. De '50 a 1' es la diferencia de ingresos en Brasil, que sigue siendo muy superior a la de muchos otros países, aunque ha ido disminuyendo de manera significativa durante la última década.

Más informes ayudan a aquilatar el significado de lo que está ocurriendo y sus consecuencias en todos los órdenes. En el Informe de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo): Desigualdades en el trabajo durante la crisis. Testimonios de Europa se dice: «Los datos obtenidos sobre países europeos muestran que la crisis ha agravado las desigualdades existentes y que determinadas categorías de

trabajadores se han visto más afectadas que otras»²⁰. Las razones de estas desigualdades hay que buscarlas en la contratación temporal que ha funcionado como un amortiguador del empleo, el 90 por 100 de los desempleados tenían contratos temporales; los recortes salariales o el crecimiento de los empleos con bajo salario. Según el Informe un 40 por 100 de los empleados declaran dificultades para llegar a fin de mes. Este dato –junto con otros– dan testimonio del acercamiento del modelo laboral europeo al estadounidense, con la aparición del *working poor*, del trabajador pobre, empleado a tiempo completo, incluso, pero cuyo salario no le permite asegurar su supervivencia en condiciones dignas.

El Informe plantea que: «En Europa más que en otras regiones, la combinación de medidas de estímulo, subsidios para preservar la inversión y la estabilidad laboral, y diálogo social, han ayudado a limitar los efectos de la crisis en el empleo y en la cohesión social». Conocer que los paquetes de medidas de reforma de los mercados laborales van en la dirección contraria, nos permite entender mejor el sentido de estos cambios y para lo que nos ocupa, fortalece esta idea de modificaciones irreversibles en la esfera económica y del trabajo que irían, claramente, a contrapelo de lo que había sido hasta el momento el pacto que aseguraba el contrato social de posguerra.

El Foro Económico Mundial considera que los desajustes fiscales crónicos y la grave disparidad de ingresos serán los riesgos con mayor predominancia en los próximos 10 años en la economía global, amenazando el crecimiento a nivel mundial, según señala en su Informe «Riesgos Globales 2012».²¹

En España, el número de pobres en España crece por el desempleo y los bajos ingresos. El recorte en un 4,4 por 100 de los ingresos medios de los hogares en 2010 incrementan el número de personas con pocos recursos y crece el porcentaje de españoles que vive por debajo de la línea de pobreza, que llega hasta el 21,8 por 100.

Es el dato provisional de la Encuesta de Condiciones de Vida 2011, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que considera pobre a aquel que vive con ingresos inferiores al 60 por 100 de la mediana. Hay menos dinero en casa de los españoles. El ingreso medio anual por hogar lleva dos años bajando, el correspondiente al último ejercicio cerrado (2010) quedó en 24.890 euros, un descenso del 4,4 por 100 respecto a la última encuesta, y la media por persona bajó hasta los 9.371 euros, un 3,8 por 100 menos.

Es interesante señalar que cuando la OCDE quiere explicar el origen de este salvaje incremento de la desigualdad, exculpa a la mundialización pero culpa a las políticas domésticas y reformas institucionales realizadas bajo la presión de la globalización. No es fácil añadir nada a un comentario tan sesudo. La OCDE reconoce, eso sí, que las reformas normativas producidas en el mercado de trabajo han posibilitado que más personas accedan a un empleo con bajos salarios y que, esa situación, ha repercutido en el incremento de la desigualdad.

La misma OCDE ofrece un ejemplo de interpretación de la relación entre economía y política en el nuevo contexto enormemente sugerente. En su Informe de octubre de 2011: *Perspectivas OCDE: España, políticas para una recuperación sostenible*, defiende que “la reforma constitucional, (se refiere a la inclusión constitucional del artículo 135 que sanciona el compromiso de España con la limitación estructural del déficit público), es un ejemplo de liderazgo y responsabilidad para tomar la iniciativa frente a los mercados y lanzar una señal clara e inequívoca de disciplina presupuestaria a largo plazo».

El resumen hasta aquí es que la combinación de globalización y crisis económica ha construido un nueva economía con un impacto demoledor sobre las viejas prerrogativas de los Estados y sobre las condiciones para hacer posibles democracias de calidad. Desde el año 2008, además, la aguda crisis económica ha evidenciado el fin del pacto social de posguerra. La alteración de las condiciones que

lo hicieron posible hacían insostenible ese pacto para las clases dominantes y plantean el interrogante sobre la actitud de las clases subordinadas y/o dominadas.

Los cambios tectónicos que estamos viviendo han sido posibles por la combinación de varios factores: cambios económicos; cambios tecnológicos muy significativos; la articulación de un bloque social y político que los ha promovido y defendido; el apoyo activo y/o pasivo de las nuevas clases medias emergentes y de parte de las viejas clases medias, más vinculadas al modelo de welfare state; cambios normativos que o bien han modificado la constitución material de nuestros modelos democráticos o bien ha producido cambios normativos de amplio calado. Por último, en este período se ha consolidado un sentido común, una racionalidad política, que ha ofrecido una cobertura ideológica y moral plausible para los cambios.

Hablando sobre Estados Unidos un periodista²² que tenía la intención de explicar el radical cambio político de su padre: de obrero demócrata a hooligan del Tea Party, ponía de relieve la trama ideológica que había permitido esa adscripción incondicional de una parte de las clases medias a un programa que les era claramente perjudicial. Su propuesta es que la agenda conservadora articula un programa de demandas socialmente muy agresivo y populista: valores morales, valores familiares, religión, antintelectualismo, guerra a lo políticamente correcto, «liderazgos cercanos» etc. Con una agenda económica oculta, profundamente regresiva. Dice Thomas Frank: «Votad por la prohibición del aborto y tendréis una buena reducción del impuesto sobre el capital. Votad para que vuestro país vuelva a ser más fuerte y tendréis la descentralización. Votad por hacerle una butifarra a esos universitarios políticamente correctos y tendréis la desreglamentación de la electricidad. Votad para que el gobierno afloje su presión (o no nos apriete tanto los zapatos) y tendréis los conglomerados y monopolios de medios de comunicación de la industria agroalimentaria. Votad para resistir al terrorismo global y tendréis la privatización de la seguridad social. Votad para darle una colleja al elitismo y tendréis un orden social en el seno del cual los ricos serán más ricos de lo que lo han sido nunca, los trabajadores despojados de todo poder y los ejecutivos de las empresas remunerados más allá de toda imaginación».²³

La naturaleza de este dominio es de tal magnitud, que los conservadores se han asegurado su poder incluso «si milagrosamente el libre mercado fracasa, si su libertarismo no aporta nada concluyente y si su “nueva economía” se hunde».²⁴

La consolidación de esta hegemonía neocon ha contribuido a reforzar una Zeitgeist, un «espíritu del tiempo» que refuerza este dominio poderoso de la racionalidad política del capitalismo de nuestros tiempos.

4. ¿Una tormenta perfecta para la contestación social? ¿En qué dirección?

El 15 y 16 de septiembre de 2008 son fechas emblemáticas en la visibilización de la crisis económica y su magnitud. Esos dos días vieron la quiebra de Lehman Brothers y la práctica nacionalización de AIG. La compañía de servicios financieros más grande del mundo y la compañía de seguros más grande del planeta quebraban iniciando una sucesión de acontecimientos en cadena que mostraban al mundo la fragilidad del sistema financiero y la enorme cantidad de mentiras y trampas sobre las que se había montado el entramado económico de aparente éxito de los años anteriores. «Es el momento en que descubrimos que el sistema es extremadamente corrupto; un sistema que remunera generosamente a quienes lo controlan y evalúan, y distribuye unos indecentes beneficios entre los responsables de los desastres»²⁵.

Aunque las señales más manifiestas del desastre que se avecinaba comenzaron en junio de 2007, con el anuncio por parte de Bear Stearns de la quiebra de dos hedge funds especializados en inver-

siones en subprime. Esa palabra endemoniada ha pasado a formar parte de nuestra realidad de un modo que no podíamos ni imaginarnos y ponía de relieve la financiarización de nuestra economía y su enorme fragilidad.

Se hacía manifiesta la centralidad del sistema financiero en todo el sistema económico y la capacidad de la globalización para amplificar las consecuencias de la economía de casino organizada alrededor del predominio de este sector económico sobre el resto. La evidencia de que los beneficios que mueven el mundo ya no se producen en la economía real –la de la producción y los servicios- si no en las finanzas, en la especulación con recursos ajenos a través de una sofisticadísima gama de productos que repartían los riesgos en la economía mundial y que se basaban en una entelequia más parecida a un fraude que a otra cosa, pero que generaba cuantiosos beneficios para los administradores y ejecutivos de los bancos y empresas financieras diversas. La economía financiera global ha funcionado con un esquema similar al de la pirámide de Ponzi. Una arquitectura fraudulenta que basa su engaño en las importantes retribuciones que produce a los incautos inversores al comienzo del proceso y que termina por esquilmar los patrimonios con una rapidez inversamente proporcional al tamaño de la pirámide. Este desplazamiento del capitalismo productivo al financiero es el que nos ayuda a entender lo ocurrido en la economía mundial en los últimos treinta años y cuya crisis padecemos hoy con unas consecuencias todavía imprevisibles.²⁶

Se trata, sin duda, de la mayor crisis económica de los últimos 80 años y aún no ha tocado fondo. Peor aún, no es que no sea posible adivinar cuándo comenzará la recuperación, sino que es difícil imaginar que significará exactamente esto y sus consecuencias para el empleo y el bienestar. Durante la crisis misma los procesos de desigualdad ya presentes y constatables en el período de esplendor de la globalización financiera se han mantenido y agudizado. Al mismo tiempo, los compromisos de pago de la deuda soberana y la adquisición de préstamos para impedir la quiebra del Estado, están implicando en Europa –especialmente en algunos países- unos sacrificios que se han llevado por delante las mejoras y derechos conseguidos después de décadas de conflictos y reconocimiento. Los partidos de la derecha europea y estadounidense han planteado la salida de la crisis en términos dilemáticos: o trabajo o derechos. Las dos cosas ya no son posibles.

Las reformas acometidas hasta ahora han contribuido al deterioro de los servicios públicos y sus prestaciones universales; a la privatización o semiprivatización de lo que quedaba en manos del sector público en el ámbito productivo y a un retroceso en la práctica de derechos adquiridos especialmente en el ámbito laboral, con una especial incidencia para el papel histórico de los sindicatos.

Aun cuando ha sido después de 2008 cuando la exigencia de esta minorización de la calidad y alcance de estas políticas públicas ha sido más expresivo, se trata, en realidad, de una continuidad respecto a lo que ya venía realizándose. Parecería, más bien, que el impacto singular de esta quiebra y de la economía del pánico que se ha adueñado de las sociedades, estaría sirviendo para apurar la lógica de desregulación y flexibilización que ya venía produciéndose. En este caso el miedo y la situación de excepcionalidad contribuyen a producir ese efecto shock en las poblaciones que paraliza sus capacidades de inteligibilidad y resistencia. Debemos a Naomi Klein la popularización de este concepto que ha contribuido a hacer más comprensible la actividad de las élites y la aparente pasividad de las víctimas.²⁷

En su libro cuenta varias anécdotas expresivas de este comportamiento calculador y carente de cualquier empatía respecto a las víctimas, por parte de las clases dirigente y los celeberrimos «mercados». A finales de agosto de 2005 el huracán Katrina devastó New Orleans causando miles de muertos. El desastre evidenció la incompetencia de la administración Bush y la pérdida de capacidades de las instituciones públicas para reaccionar frente a situaciones de emergencia. La incapacitación teledirigida del estado tenía estas consecuencias, también. En aquellos terribles días frente a la de-

solación crecía la rabia entre los vivos y abandonados que habían acabado en el Centro de Congresos del centro de la ciudad a falta de un plan de evacuación de las autoridades. La ira tenía que ver con el conocimiento de declaraciones y comentarios que ponían de manifiesto el odio racial y de clase que se expresaba cuando la ciudad seguía anegada por las aguas y los muertos continuaban sin recoger. Entre ellas, se hizo célebre el comentario que Richard Baker, un conocido congresista republicano, le había dicho a un no menos conocido grupo de presión: «Por fin hemos limpiado New Orleans de los pisos de protección oficial. Nosotros no podíamos hacerlo, pero Dios sí».

Pero era Milton Friedman, entonces un venerable viejecito de 93 años quien en un artículo en *The Wall Street Journal*, tres meses después de la catástrofe proponía aprovechar la oportunidad que ofrecía la devastación del sistema educativo público para modificarlo de raíz. En lugar de reconstruirlo, Friedman proponía entregar a las familias cheques escolares para que eligieran de entre las escuelas privadas que seguían en pie. A su vez, las escuelas privadas recibirían subsidios estatales a cambio de aceptar nuevos niños entre su alumnado. El artículo proponía que la oportunidad debía aprovecharse para hacer de este cambio una situación permanente. La idea de Friedman de cualquier cosa que fuera etiquetada como pública apestaba a socialismo, fue llevada a cabo por la presidencia de Bush. En menos de 19 meses las escuelas públicas de New Orleans fueron sustituidas casi en su totalidad por una red de escuelas chárter de gestión privada.²⁸

«Antes del huracán Katrina, la junta estatal se ocupaba de 123 escuelas públicas; después solo quedaban 4. [...] Los maestros de la ciudad solían enorgullecerse de pertenecer a un sindicato fuerte. Tras el desastre, los contratos de los trabajadores quedaron hechos pedazos, y los 4.700 miembros del sindicato fueron despedidos. Algunos de los profesores más jóvenes volvieron a trabajar para las escuelas chárter, con salarios reducidos. La mayoría no recuperaron sus empleos».

Esta ejecución implacable de un plan previamente concebido, junto a esta indiferencia por las víctimas respecto a las consecuencias de sus acciones y propuestas es lo que más llama la atención en la gestión de la crisis económica por parte de las elites económicas y políticas.

Este acercamiento tiene dos componentes importantes que merecen la pena ser destacados en este momento: el uso del miedo como regulador social y su legitimación más aceptable después de los cambios que se produjeron tras el atentado contra las torres gemelas.

Pero esta crisis tiene algunas características que la hacen singular. Si los cambios que se están llevando a cabo en prácticamente todos los ámbitos, se consolidan, estaremos viviendo la mayor modificación de nuestras condiciones sociales y políticas de la historia reciente. Con una voluntad manifiesta y explícita por parte de las clases dirigente de hacer de estos cambios una nueva realidad, así las cosas mejorasen en un futuro próximo.

Es la primera vez en nuestra historia europea que una crisis global se salda con un retroceso tan monumental en derechos. La retórica neoliberal del sacrificio se ha convertido en una justificación para considerar como privilegios inaceptables, en situación de excepcionalidad, los derechos adquiridos tras décadas de conflictividad social.

Las crisis de 1844, 1890, 1907 o 1929 se saldaron con:

- Medidas que mejoraban e incrementaban el control de los poderes públicos sobre el mercado. Y esta intervención se hacía tanto para limitar la volatilidad del funcionamiento de los mercados, como para disminuir los riesgos de exclusión para los más desfavorecidos.
- Con mejoras de derechos para los trabajadores, que aseguraban la traslación parcial a la escena productiva de la condición de ciudadanía que empezaba a ser común en el ámbito de la política.

- Con mejoras en la capacidad redistributiva del sistema a través de tres vías: el reconocimiento progresivo del papel del sindicato como intermediador en el proceso de negociación; la consolidación de un capitalismo que precisaba funcionalmente de un consumo de masas para su subsistencia, de donde, la mejora salarial generalizada era una condición imprescindible para mantener saneada la economía; y tercero, a través del incremento de la inversión pública y la extensión de servicios universales: educación, sanidad, pensiones.

Lo que la gestión de clase de esta crisis está quebrando es el paradigma que subyace a esta progresión solo interrumpida, hasta este momento, en Europa en los períodos de guerra, del incremento del control público sobre la economía. Alrededor de este eje y del convencimiento de que el mejor mercado, el mercado que mejor funciona, es el mercado regulado y embridado, se ha construido el contrato social de nuestra modernidad: inclusión económica; el trabajo como institución central en la adquisición de ciudadanía política; una lógica incremental de bienestar con servicios públicos universales y accesibles; un imaginario democrático fuertemente comprometido con la reforma social y la mejora de las condiciones de vida para la mayoría.

Pues bien, esto es lo que la gestión de la crisis se está llevando por delante y con ello las condiciones que hicieron posible dos cosas: un largo período de estabilidad económica en nuestras sociedades y un largo período, igualmente, de estabilidad política y de reconocimiento de los cauces democráticos para la resolución de los conflictos.

La fractura del contrato social de la modernidad y su sustitución por una nueva contractualidad neoliberal tiene varias implicaciones. En primer lugar, si el contrato social anterior había sido el resultado histórico de un compromiso más o menos equilibrado entre diferentes actores e intereses en pugna, el contrato social emergente es el resultado de una imposición de las elites dirigentes frente al resto de la sociedad. Este factor fragiliza la legitimidad del nuevo contrato y amplía las zonas de incertidumbre política y de arbitrariedad de las instituciones, despegadas e «irresponsables» frente a sus ciudadanías y serviles frente a las imposiciones del mercado. En este caso la globalización o la Unión Europea funcionan como coartadas que desplazan la responsabilidad por las decisiones.

En segundo lugar, la nueva contractualidad neoliberal amplía los criterios de exclusión. Si, siguiendo a Boaventura²⁹, el viejo contrato social excluía a la naturaleza, a todos aquellos que no eran considerados ciudadanos y todo aquello que no podía ser sujeto a mercantilización y, por tanto, objeto de un contrato, el actual modelo amplía dramáticamente el ámbito de exclusiones: se amplía el estado de naturaleza y, así, todo aquello que no debe ser incluido en ninguna fórmula contractual; la quiebra de la institución laboral como generadora de ciudadanía propone una disminución de las capacidades políticas para una parte creciente de nuestras sociedades que, ve así, mermados sus derechos y su condición de iguales en el escenario político; la simbiosis creciente mercantilización+despolitización, ha privatizado y excluido de las instituciones reguladoras del contrato social una gran parte de los conflictos contemporáneos, no solo aquellos estrictamente privados, también una buena parte de los que antes eran considerados conflictos claramente políticos; una consecuencia de este último elemento es la creciente judicialización de la cotidianeidad, resultado de la privatización de los conflictos y su desplazamiento del ámbito público (político) a un ámbito privado (mercantilizado y sujeto a exigencias contractuales, por tanto).

En tercer lugar, nuestros sistemas políticos aparecen cada vez más sometidos a una lógica donde se articulan institucionales formalmente democráticas con un incremento del fascismo social a través de diferentes vías.

La condición débil de nuestras democracias ha sido profusamente mostrada y demostrada, lo que me importa en este punto es reseñar como la importancia de este factor en el encadenamiento que nos lleva a la emergencia del 15M. Por una parte, la crisis, como acelerador del compuesto político creado

por la globalización ha quebrado esa expectativa de la democracia como proceso que aseguraba el control social por parte de las poblaciones de las cuestiones más trascendentes para su vida cotidiana.

La legitimidad democrática, el reconocimiento del poder y de sus obligaciones en nuestros sistemas, se intensificó en el modelo del estado de bienestar gracias al entrelazamiento de tres modos de concebir la misma: la legitimidad derivada del reconocimiento social de un poder, la legitimidad como adecuación a una norma o valores y la legitimidad producida por la mejora de las condiciones de vida para la mayoría.³⁰ Esa mezcla de procedimientos formales y sustantivos está en el corazón mismo de la fortaleza y aceptación popular de nuestros sistemas democráticos. Pero es esta articulación la que se ve asediada por la lógica implacable de los mercados y sus requerimientos a la política y a las instituciones.

Por una parte, los resultados de las elecciones ya no garantizan una representación fidedigna de los conflictos sustantivos en el seno de la comunidad política, ni tampoco los actores están en condiciones de garantizar consecuentemente el cumplimiento de sus programas. La elección pierde así mordiente democrático y no va mucho más allá de permitir un procedimiento participado de elección de los gobernantes. Argumentar que esto es lo que la gente quiere pues sigue votando, no permite avanzar mucho en la explicación y sigue dejando el tema de la quiebra de la legitimidad intacto. Es necesario seguir indagando, entonces.

En segundo lugar, el neoconservadurismo versus neoliberalismo ha construido un imaginario de confrontación política extremadamente agresivo. La demonización del adversario se realiza desde perspectivas muy diferentes: administrativas (incompetentes); políticas (sin proyecto); morales (indignos e inmorales); religiosas (sin dios y por tanto sin límites); éticas (favorables a la muerte de inocentes); formativo-cognitivas (iletrados, ignorantes, no están en la realidad) y por supuesto identitarias (estar contra la reforma laboral o contra la política de ajustes es estar contra la patria). Cualquiera de ellas por separado o la suma de algunas de ellas o de todas, hace inviable pensar la comunidad política en su conjunto y, por supuesto, hace incluso imposible considerar que hay, siquiera, unas reglas del juego compartibles, que marcarían territorios que no podrían sobrepasarse. Esta permitido hacer trampas si ese recurso permite ganar al enemigo (nada de adversario).

Junto a esto, como antes comentábamos, encontramos la pérdida de empatía de las clases dirigentes respecto a la suerte del conjunto de la ciudadanía. El estado del bienestar construyó una relación «necesaria» entre los de arriba y los y las de abajo a través, básicamente, de la ampliación de la democracia, la politización de los conflictos y la justificación moral de la política fiscal. La privatización producida de manera consciente por el neoliberalismo más el discurso que responsabiliza a cada individuo singular por su suerte, ha liberado a las clases dirigentes de cualquier responsabilidad moral por el devenir de sus sociedades. Una religión dócil con los poderosos ha completado la auto-justificación para los despropósitos y para un estilo de vida que parece insultante frente a los sufrimientos de la mayoría y que es, simplemente, indiferente respecto a su suerte. El neoliberalismo ha estigmatizado a los perdedores e invisibilizado a los pobres. Esta situación es la que ha permitido a Warren Buffet, multimillonario norteamericano cuya fortuna se estima en 52 mil millones de dólares, afirmar que: «se ha desatado una auténtica guerra de clases y la van ganando los míos». Y esta es la situación que explica que directivos, cuya gestión es directamente responsable de millones de pérdidas en sus empresas, sigan al frente de las mismas embolsándose suculentos salarios y extras, sacados directamente de los fondos de rescate pagados desde el erario público.

Por último, el uso de la reserva de legitimidad democrática de las instituciones para imponer las decisiones previamente tomadas y al servicio de las exigencias de los mercados, devalúa el contenido mismo del procedimiento democrático y rompe ese eslabón de oro entre la democracia y el bienestar que hizo de éstas regímenes estables e inclusivos.

El deterioro de la legitimidad democrática tiene graves implicaciones en términos de convivencia y de cohesión social. La legitimidad es esa «institución invisible» que garantiza una relación sólida entre gobernantes y gobernados. Como dice Rosanvallon³¹: «Si bien la legitimidad es, en el sentido más amplio de la expresión, un simple economizador de coerción, su variante democrática tiene como función más exigente la de tejer lazos constructivos entre el poder y la sociedad. Contribuye a dar cuerpo a lo que constituye la propia esencia de la democracia: la apropiación social de los poderes. La legitimidad democrática produce un movimiento de adhesión de los ciudadanos indisoluble de una sensación de valorización de ellos mismos».

Esta quiebra de la legitimidad está en el corazón de la crisis de representación que minimiza el papel de la política y la somete a los dictados de fuerzas en la periferia del sistema político. Y es un factor explicativo importante para entender las demandas de repolitización y redemocratización que se han mostrado desde el 15M.

El ascenso del fascismo social es la otra cara de ese deterioro de la cultura democrática y de la emergencia de poderes salvajes que imponen una lógica de exclusión en determinadas áreas. Fascismo social es el mantenimiento de una estructura formalmente democrática pero de prácticas institucionales y políticas que vacían de sentido el contenido material democrático de las constituciones. Cuando hablamos de contenido material democrático hablamos de la apropiación social de poderes facilitada por el sistema democrático. La aparición de esas formas de fascismo social, de exclusión y expulsión del contrato social deja la constitución reducida a un cascarón formal, frágil y manipulable.

Ningún otro régimen como el período de gobierno berlusconiano podría ejemplificar mejor hasta que punto se ha llegado en la colonización del estado por intereses privados y en el deterioro crónico del funcionamiento de los sistemas democráticos. La esperpéntica vida del cavaliere formaba parte, también, de una forma de política-espectáculo que disfrazaba, tras los ropajes del absurdo y de la caspa, el asalto a los recursos económicos y políticos del estado de derecho por parte de una minoría que se considera dueña del país. Paolo Flores D'Arcais³² define así la situación: «el régimen de Berlusconi no es el fascismo. Pero indudablemente es una forma nueva e inédita de destrucción de las instituciones democráticas-liberales y de la ética pública mínima que la sustenta». Ahora bien, advierte que si bien el berlusconismo no es todavía el fascismo eso no debiera tranquilizarnos en exceso. Y que, desde luego, hay otros modos posibles de enterrar la convivencia democrática.

5. Un movimiento inesperado: el 15M³³

La aparición del 15M causó una cierta conmoción. Lo hizo por que su potencia y masividad fue completamente inesperada. Se ha argumentado que el 15M surge como un acumulado de protestas³⁴ donde confluyen varias experiencias y movimientos: el movimiento V de Vivienda digna; Juventud sin Futuro; ATTAC; el movimiento universitario contra Bolonia y otros. Pero si bien esto nos ofrece una pista importante para interpretar la «densidad» del 15M, su trabajo en red, debemos admitir que esta «presencia colectiva» es mucho más que la suma de esas experiencias y que, desde luego, su éxito no puede explicarse a partir de esa suma.

De hecho había otras experiencias que sin participar de manera directa en la convocatoria de la primera manifestación, habían alimentado en la periferia del sistema político, la cultura de resistencia, el trabajo en red, la densificación del tejido asociativo crítico y un funcionamiento radicalmente democrático. Podríamos mencionar el movimiento okupa, el movimiento ecologista y movimientos urbanos de diferente tipo: asociaciones de consumo sostenible; experiencias de uso alternativo de espacios urbanos; redes de pensamiento alternativo (fundaciones, institutos, universidades no formales

pero también formales, editoriales, revistas etc.). Sin este tejido la difusión del 15M hubiera sido incomprensible, pero la existencia de este tejido no es la explicación sobre el surgimiento del 15M.

Aunque pueda parecer un asunto sin mucha trascendencia, me parece importante destacar su condición de movimiento inesperado. Pese a que algunos autores defienden que la masividad de la protesta «se palpaba en el ambiente tres días antes»³⁵ creo que una cosa es constatar la difusión extensa de la protesta por las redes sociales y por las organizaciones a las que antes hemos hecho referencia y otra distinta es deducir de aquí que la movilización sería cuantitativamente importante o que tendría esa repercusión mediática y social.

6. La estructura de oportunidades políticas y el 15M

Sin pretender abusar de la elasticidad del concepto, la propuesta inicial de Peter Eisenger (1973) y sistematizada después por Tarrow de «estructura de oportunidades políticas» nos puede ofrecer una referencia de interpretación a propósito de la emergencia de esta acción colectiva. Tarrow integró las diferentes aproximaciones teóricas a este concepto escogiendo como variables significativas: el grado de apertura o cierre del sistema político y la capacidad de este para gestionar nuevas demandas; el nivel de inestabilidad o no de las alianzas políticas; la posición estratégica de aliados poderosos y los conflictos políticos entre las élites. Entendida esta articulación no como un modelo que produce movilización colectiva, «sino como una serie de claves para prever cuándo surgirá la acción colectiva, poniendo en marcha una cadena causal que pueda finalmente conducir a una relación mantenida con las autoridades y, por tanto, los movimientos sociales»³⁶.

Por lo que hace al grado de apertura y cierre del sistema político y a la capacidad de éste para gestionar y tramitar los conflictos políticos, conviene insistir en el modo en el que las fuerzas políticas conservadoras a través de la propuesta neoliberal en primera instancia (una propuesta de ruptura radical con el consenso socialdemócrata), y del programa neoconservador después (una nueva agenda y un nuevo consenso) han hegemonizado la explicación del nuevo mundo. Su capacidad ha consistido en construir un marco de referencia cultural-político que ha hecho inteligible para las mayorías -en clave conservadora- los nuevos problemas y los nuevos desafíos. La naturaleza de este dominio es de tal magnitud, que los conservadores se han asegurado su poder incluso «si milagrosamente el libre mercado fracasa, si su libertarismo no aporta nada concluyente y si su “nueva economía” se hunde».³⁷

La consolidación de esta hegemonía neocon ha contribuido a reforzar una *Zeitgeist*, un «espíritu del tiempo» que refuerza este dominio poderoso de la racionalidad política del capitalismo de nuestros tiempos.

Conviene recordar que la resistencia cultural y política de los partidos reformistas tradicionales ha sido más bien escasa y, de hecho, ha contribuido a la extensión de un ideario que, a la postre, se vuelve contra sus propios intereses políticos. La impugnación del modelo vino desde una combinación de lo social y lo extrapolítico: el movimiento alterglobalizador, en primera instancia. Su éxito mayor, precursor ineludible del movimiento de los indignados, fue abrir una grieta en la, aparentemente, amurallada lógica explicativa del modelo y crear un instrumento político y social que podría haber sido una plataforma de reconstrucción programática de la izquierda social y política alternativa. Este movimiento y su correlato internacional, el Foro Social Mundial, fueron los últimos movimientos posibles bajo el paraguas del contrato social socialdemócrata.

Esto significa que hay varias puertas de salida para el malestar creciente en nuestras sociedades. La desafección a la política, la matriz conservadora del sentido común hegemónico y la crisis de la representación política hacen posible escenarios neopopulistas de diferente signo.

A mi juicio la crisis económica ha actuado como catalizador de este compuesto político-cultural tan inestable e impredecible. Por una parte, ha consolidado la idea de la pérdida de relevancia de la política y de la dinámica política.

Esta desafección se ha sumado a la evidencia de que la gestión de la mayor crisis económica desde hace 80 años se hacía, con rotundidad, en interés del sistema financiero, es decir, de los responsables mismos de la crisis y de una exigua minoría en detrimento de los intereses de la mayoría. El immaculado lienzo de la explicación natural y despolitizada de los procesos se agujereaba dejando al descubierto las vergüenzas de la economía de mercado. La concentración de esfuerzos por parte de las clases dominantes para debilitar, hasta hacerlo irreconocible, el edificio de las políticas públicas universales, ha sido leído por una parte de la sociedad, como un línea roja cuyo rebasamiento hace inútiles las viejas convenciones del conflicto político.

Por último, la Unión Europea se ha sumado al panel de instituciones que promovían en la misma dirección y con parecida intensidad, la intervención en la crisis. Su papel o ha influido o no ha diferido del de los gobiernos nacionales. Incluso estos han utilizado como coartada las exigencias de la UE para explicar ante sus poblaciones la inevitabilidad de sus políticas de ajuste. La UE, de este modo, cerraba el espacio de salidas institucionales. El mensaje que llegaba a las poblaciones era –machaconamente repetido–, el compromiso de las institucionales nacionales e internacionales con una gestión de la crisis al servicio de intereses minoritarios. La ausencia de esperanza en la política formal alimentaba una indignación que hará de la crítica a la política un elemento singular de su identidad.

El resumen de esta parte podría ser el siguiente: la crisis económica ha sido ese cambio, imprescindible, en el sistema político que ha modificado las reglas del juego y ha promovido una respuesta social en aquellos sectores directamente concernidos por la misma. Los cambios han modificado la percepción de la situación, han puesto de manifiesto contradicciones entre los sectores dominantes y han favorecido los discursos que impugnan el modelo de gestión de la crisis. Por otra parte, el factor ético y moral ha sido muy importante para entender la emergencia del 15M, la indignación como argumento y como identidad solo se explican sobre la base de esta percepción general de que la gestión de la situación de crisis servía a intereses minoritarios y soslayaban intereses generales, cuando no se despreciaban abiertamente. En este punto la corrupción política generalizada y la impunidad judicial asociada y la seguridad de que entre la política profesional y el mundo de las empresas existen puertas giratorias permanentemente en uso, ha alimentado este Estado de ánimo que tan importante papel ha jugado en la activación de la protesta.

7. La relevancia del factor generacional

Hay un factor cognitivo-generacional que debe considerarse: hablamos de que se ha movilizado, en primer instancia, la generación internet que suma a su uso regular de este nuevo «universo»³⁸, unos niveles de formación que cumplen un papel subjetivo de primer orden en la protesta: son conscientes del significado y contenidos de la misma. Este factor es de vital importancia para comprender la novedad del movimiento y la potencia simbólica de su denuncia. Y sugiere tres conclusiones tentativas: en primer lugar, pone en cuestión las tesis que han enfatizado el exceso de emotividad de este movimiento frente a la necesaria templanza y racionalidad de la acción política. La complejidad de la organización durante la ocupación de las plazas; el mantenimiento de la condición pacífica del movimiento en todo momento; un compromiso con una cultura cívica (limpieza de la plaza, prohibición de botellones etc.) convertida en una opción estratégica de interacción con la ciudadanía. Estas evidencias se compadecen mal con la idea de un movimiento descabezado o falto de reflexión.

En segundo lugar, la participación de un público joven (no adolescente) bien formado y con uso masivo de internet ha multiplicado el efecto difusión de las iniciativas y actividades vinculadas al 15M, también ha diversificado las voces y ha consolidado la imagen del 15M como una «marca». Es la idea de franquicia: un paraguas que ayuda a referenciar las diferentes iniciativas, aun cuando éstas gozan de una importante autonomía.

En tercer lugar, el movimiento de los indignados ha cumplido con creces algunos de los objetivos que deben satisfacerse para asegurar la visibilidad y proyección del movimiento: ha denunciado y señalado responsables; ha enunciado los problemas en términos de justicia y su resolución en clave ciudadana, no corporativa. El conjunto de motivos que activaron la protesta y que se convirtieron, ulteriormente en un abanico de propuestas y acciones, incorporaba: la denuncia del papel de los bancos (esto no es una crisis, es una estafa); la lucha contra la corrupción; la denuncia de la clase política y de la corrupción; el rechazo a las condiciones precarias de trabajo y de salario; el papel de la UE; la denuncia de la condición injusta del sistema electoral y la exigencia de su reforma; el papel deliberadamente partidista de los medios de comunicación y su alejamiento del ideal de objetividad y neutralidad; que la crisis la paguen sus responsables.³⁹

8. Las propuestas del movimiento⁴⁰

Las propuestas del 15M dan cuenta de una agenda que no puede interpretarse como un programa electoral ni como una agenda coherente de cambio. Lo más interesante tiene que ver, a mi juicio, con el modo y manera en que ese programa fue elaborado: mediante un ejercicio intenso de deliberación democrática basada en multitud de asambleas sectoriales.

Las propuestas del movimiento hacen referencia a los siguientes aspectos:

- Eliminación de los privilegios de la clase política
- Contra el desempleo
- Derecho a la vivienda
- Servicios públicos de calidad
- Control de las entidades bancarias
- Fiscalidad
- Libertades ciudadanas y democracia participativa
- Reducción del gasto militar

Destacan sobre todo los aspectos relacionados con una gestión alternativa de la crisis (al menos en algunos aspectos, porque no hay nada sobre política económica); medidas de control sobre las instituciones responsables de la crisis (los bancos, especialmente); una reforma de radicalización democrática de la democracia y la defensa de algunos derechos básicos.

La ingenuidad programática de algunas propuestas han alimentado la idea de la ausencia de reflexión estratégica del movimiento, o incluso la ausencia de propuestas. Pero esto es medir la significación de un movimiento mediante un indicador adecuado solo para otros actores. La identidad del movimiento está construida alrededor de un eje moral: la indignación, el estupor por la situación, convertido en acción política. Y este es su valor fundamental: la politización de la indignación, la voluntad de encontrar una salida desde la «política» a la situación de crisis y a su gestión.

Desde este punto de vista y considerando también las propuestas, se pone de manifiesto la rigidez del actual sistema político y económico, sus dificultades para dar cabida y canalizar el rechazo a la

gestión de la crisis. La propia ingenuidad de algunas propuestas pone de manifiesto hasta que punto el sistema político se ha blindado frente a las demandas ciudadanas.

Por último, el movimiento, a través de sus propuestas llama la atención sobre la crisis de legitimidad en ciernes que puede afectar severamente a nuestros sistemas políticos.

El deterioro de la legitimidad democrática tiene graves implicaciones en términos de convivencia y de cohesión social. La legitimidad es esa «institución invisible» que garantiza una relación sólida entre gobernantes y gobernados. Como dice Rosanvallon: «Si bien la legitimidad es, en el sentido más amplio de la expresión, un simple economizador de coerción, su variante democrática tiene como función más exigente la de tejer lazos constructivos entre el poder y la sociedad. Contribuye a dar cuerpo a lo que constituye la propia esencia de la democracia: la apropiación social de los poderes. La legitimidad democrática produce un movimiento de adhesión de los ciudadanos indisoluble de una sensación de valorización de ellos mismos».⁴¹

Esta quiebra de la legitimidad está en el corazón de la crisis de representación que minimiza el papel de la política y la somete a los dictados de fuerzas en la periferia del sistema político. Y es un factor explicativo importante para entender las demandas de repolitización y redemocratización que se han mostrado desde el 15M.

Por otra parte, el encorsetamiento formal del sistema político hace que las prácticas intensamente democráticas del movimiento, operen simbólicamente como un golpe a la naturalización de los procesos políticos y económicos (el famoso *That is not alternative*, de Margaret Thatcher en sus diferentes versiones). En las plazas de casi todas las ciudades españolas se ha vivido un ejercicio de socialización política a través de prácticas intensamente democráticas desconocido desde el comienzo mismo de la transición política.

La acción colectiva irrumpió, así, con un contenido radicalmente democrático y de fuerte impronta reformista. A diferencia de otras prácticas políticas que han impugnado la política en nombre de fórmulas «más genuinas» de representación como el neopopulismo tanto en su variante de izquierdas como de derechas (liderazgos casi divinos o fórmulas organicistas, entre otras), este movimiento ha reivindicado el retorno a valores originarios de nuestros sistemas democráticos, aderezados con incrustaciones visibles de democracia directa o participativa. El mismo movimiento ha operado, en su espacio de toma de decisiones, mediante procedimientos que han actualizado el debate sobre la representación y la participación: la centralidad de las asambleas en la toma de decisiones; las prácticas deliberativas in extenso (decisión mediante consenso); la renuncia al mecanismo de mayorías-menorías para determinar las decisiones; la práctica de mecanismos expresivos que generan inclusión y no exclusión (los ya famosos gestos con las manos de aprobación, rechazo etc.).

Desde esta perspectiva tanto la crítica a la política como las demandas de democratización son claramente republicanas y alternativas en un sentido intenso de la expresión y aparecen amparadas por un ejercicio de práctica democrática que ha convocado a miles de personas.

9. La ubicación del movimiento en el eje izquierda-derecha

El impacto del movimiento puso de relieve la fragilidad de los consensos en la coalición dominante que dirigía (y dirige) la gestión de la crisis. Y, más importante, evidenció un profundo malestar social intergeneracional e interclasista que se reconocía en diferentes caras del prisma de la desafección y el desencuentro.

Esta condición plural del movimiento se refleja, por ejemplo, en el altísimo apoyo a su existencia. Tanto la encuesta realizada por Metroscopia como la del Centro de Investigaciones Sociológicas

(junio 2011, número 2905), ofrecían cifras de apoyo al 15M de casi el 80 por 100 de los españoles. Lo que implica una transversalidad política que ha podido generar la impresión de un movimiento fuera del eje «izquierda-derecha».

El mismo movimiento en su Manifiesto original sugiere la indignación como identidad-reconocimiento más allá del autoposicionamiento político: «Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos...»⁴².

Sin embargo, el estudio de las propuestas a las que antes hemos hecho referencia cruzado con la variable de auto-posicionamiento político⁴³ nos ofrece una visión claramente diferente.

En primer lugar, los participantes en el 15M no tienen inconveniente en posicionarse en el eje izquierda-derecha (en niveles significativamente más altos que la media de la población). Y cuando lo hacen, lo realizan de un modo inequívocamente de izquierdas. La media de la ideología de los participantes en el 15M es de 2,84 frente a un posicionamiento ideológico del conjunto de la población es de 4,56. Es decir, los y las participantes del 15M se autodefinen como claramente de izquierdas en ese eje de reconocimiento.

El contenido de las propuestas señala una orientación marcadamente progresista. Medidas como: la seguridad en el empleo prohibiendo despidos en empresas con beneficios; prohibición de los rescates bancarios; dación en pago; contratación de personal sanitario y educativo por parte del Estado; expropiación estatal de las viviendas en stock; prohibición de las SICAV etc...dan cuenta de propuestas claramente posicionadas en la izquierda política.

Por otra parte, la recusación de la legitimidad y oportunidad del 15M ha venido, habitualmente, de la derecha política que se ha sentido inmediatamente desafiada. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, señaló el camino del cuestionamiento al afirmar que en el 15M latían las pulsiones de los regímenes totalitarios⁴⁴.

En resumen, aunque el movimiento ha tenido una aceptación claramente transversal y los organizadores del movimiento han perseguido alejarse de las etiquetas izquierda-derecha, el análisis de la variable autoposicionamiento más el análisis del contenido de las propuestas del 15M, así como las reacciones diferentes en las organizaciones políticas, dicen de un movimiento claramente orientado a la izquierda.

10. Una valoración politológica del 15M

El 15M ha merecido un juicio severo desde muchos lugares atendiendo a su falta de concreción y a que, finalmente, su incidencia en términos sustantivos ha sido muy limitada. Apenas el asunto de la dación en pago (para el caso de las hipotecas impagadas) se ha visto reflejado en un cambio normativo de escasa relevancia dada la magnitud del problema.

Pero esto parece una manera muy exigente y poco matizada de valorar la importancia de un movimiento social.

En primer lugar la relación de los movimientos sociales y la acción colectiva sobre la política puede medirse a través de su incidencia simbólica, esto es, a partir de su capacidad para modificar el imaginario colectivo o la percepción social mayoritaria respecto a determinados problemas significativos de la agenda política y social. A menudo los movimientos cumplen un papel esencial a la hora de

cambiar la valoración de la sociedad sobre un determinado aspecto. Solo con posterioridad ese factor de cambio en el imaginario colectivo se sustancia en normas que, de manera efectiva, cambian la vida de las gentes.

Es el caso del movimiento ecologista, feminista, okupa etc... Los cambios en la legislación medioambiental o en políticas públicas de igualdad han necesitado décadas de activismo antes de producir cambios normativos de relieve.

En lo que hace al 15M sus logros en este apartado de la incidencia simbólica son incuestionables: la indignación organizada ha generado un nuevo imaginario y un nuevo sentido común sobre la crisis, sobre quienes son sus responsables y una evaluación en términos de justicia sobre las medidas concretas de los gobiernos.

Este es un valor duradero que debe ser enfatizado e, insistimos, es común a la mayoría de movimientos y a la acción colectiva conflictual que el tránsito del cambio en el imaginario a la aprobación de las leyes lleve su tiempo. No hay ningún automatismo entre la ocupación del espacio público y cambios normativos sobre los temas concernidos por la acción colectiva.

En segundo lugar, el 15M ha alterado el funcionamiento de los otros actores políticos y de las instituciones mismas. Si recordamos lo que decía el PSOE en el gobierno y lo que afirma en la oposición sobre temas como: la reforma laboral; los beneficios bancarios; la justicia del sistema fiscal; la reforma del sistema electoral; la dación en pago; el papel de lo público y su relación con la economía de mercado, encontraremos en todos ellos el eco cercano, muy cercano incluso, de las demandas del movimiento de los indignados.

Esta vinculación es aun más obvia para el caso de Izquierda Unida y otras fuerzas de la izquierda alternativa periférica (Compromís en el País Valencià o la coalición del Bloc e Iniciativa en les Illes Balears, Equo o los Verdes), cuyos programas electorales para las elecciones autonómicas de 22 de mayo de 2010 o generales de noviembre de 2011 han recogido de manera directa enunciados y formulaciones del mismo 15M.

Como decíamos antes, la condición transversal del apoyo a esta «presencia colectiva» ha obligado a todos los actores a actuar con contención y con voluntad de integración. Formalmente, ningún partido se ha posicionado contra el 15M, ni siquiera el PP.

Aun cuando la valoración positiva del 15M tiende a descender a medida que la escala ideológica se desplaza hacia la derecha, habría que reseñar que los niveles masivos (esperados en este caso) de apoyo en la escala 1-4 (entre la izquierda extrema y las fronteras del centro político) llegan al 84 por 100; en el centro del espectro político (5/6 en la escala de 1 a 10), ese apoyo sigue estando en el 68 por 100⁴⁵. Si lo medimos en términos de recuerdo de voto⁴⁶, la visión positiva del 15M alcanza un 86,6 por 100 de los votantes de IU-ICV y un 80,6 por 100 de los votantes en el PSOE, pero un 55,2 por 100 de los votantes en el PP. En todos los casos, el apoyo al 15M se encuentra por encima del 50 por 100 de los votantes, incluido el Partido Popular.

La conclusión sería que ninguna fuerza quiso/pudo colocarse frente a la marea 15M –al menos en sus primeros momentos- y que una parte de sus agendas se han modificado para tratar de salir al encuentro de este movimiento.

Es en términos sustantivos, donde el 15M ofrece, hasta el momento, resultados menos tangibles. Como decíamos, solo la dación en pago ha conocido un cambio normativo promovido desde el actual partido en el gobierno, que ha sido rechazado por el movimiento mismo.

Pero podríamos decir que para un movimiento tan joven el saldo, hasta ahora, es enormemente significativo.

El 15M ha tenido una importancia mayúscula en términos simbólicos e institucionales y menos importante en términos sustantivos. Pero los dos primeros son factores muy dinámicos que siguen modificando la realidad y que alteran el curso de los acontecimientos. Es decir, su incidencia no ha terminado aún y el estudio de su evolución sigue siendo pertinente.

11. Una comparación con mayo del 68

El contenido mismo de las protestas y su enunciado en términos de propuesta llaman la atención en comparación con otras movilizaciones comparables, especialmente mayo del 68. Hay muchas diferencias contextuales que dificultan la comparación, pero si nos atenemos a los contenidos podríamos formular una primera aproximación marcada por el tiempo histórico: el período dorado del Estado del bienestar en el primer caso; el fin del contrato social keynesiano en el segundo. Frente a las perspectivas posmateriales e incrementales del primero, el retorno a los temas de seguridad económica del segundo. Frente a la demanda de apertura del sistema político y «ampliación de la política» del 68, la exigencia ingenua de que, simplemente, la política y la democracia cumplan su papel. Las asimetrías parecen evidentes y nos inducen a enunciar que estaríamos hablando, en el primer caso, de un movimiento ofensivo y en el segundo, de uno defensivo.

Pienso que esta comparación se merece un poco más de atención. Del 68 se ha hablado in extenso, de sus virtudes y sus límites. La distancia ofrece, además, una perspectiva histórica que ayuda a aquilatar mejor su incidencia. En el caso del 15M la proximidad y su condición incipiente hacen más difícil esta aproximación. No obstante, sí podemos afirmar que el tiempo histórico marca una diferencia profunda de expectativas. Para el caso del 68 el horizonte de cambios podía alargarse, incluso, hasta el socialismo, incluso cuando era evidente que el movimiento mismo no se identificaba con el socialismo realmente existente (ni en su versión socialdemócrata ni en la comunista). Pero esta perspectiva de cambio sistémico sugiere que el movimiento consideraba superables los límites social y políticamente existentes en ese momento.

Para el caso que nos ocupa, el efecto combinado de la globalización más la crisis y sus consecuencias en términos económicos, sociales y políticos está detrás, justamente, de la radicalidad democrática de la protesta y también de su contenido de reformismo fuerte. Tanto en el ámbito económico como en el político se han enunciado denuncias y formulado propuestas con un elevado contenido reformista. Puede argumentarse, razonablemente, que parte de esta condición rupturista tiene más bien que ver con el estrechamiento del horizonte de reformas dentro del propio sistema. Pero, siendo esto cierto, no modifica el diagnóstico sobre el hecho de que las propuestas, de llevarse a cabo, reconstruirían el sistema dando lugar a una nueva situación.

12. El devenir del movimiento

No es fácil hacer predicciones sobre la evolución del movimiento. Creo que los factores estructurales que están en el origen de este movimiento persisten y lo seguirán haciendo en el corto y medio plazo. Entiendo que también persistirán los factores organizativos y subjetivos que ayudaron a hacer emerger la protesta en las formas y modos que conocemos.

Ahora bien, ha cambiado la estructura de oportunidades. La victoria del PP en las pasadas elecciones generales y las políticas de ajuste duro pueden ofrecer protagonismo a otros actores más institucionalizados (los sindicatos). Es muy probable que vivamos un doble movimiento de fragmentación y encuentro de las protestas. Diversificación, porque los sectores afectados por las políticas de recortes son cada vez más, pero encuentro, porque prácticas como la huelga general y la intervención de actores como los sindicatos, o el traslado a las instituciones de una parte de la agenda del 15M, de

lugar a la aparición de otras prácticas más estratégicas e inclusivas. En este contexto más dinámico y complejo no es fácil que el 15M encuentre un perfil específico. Puede verse tentado a intentar conseguirlo sobre la base de un juego de acercamiento y diferenciación a los conflictos emergentes (como en el caso de la huelga general del 29 de marzo de 2012, donde el 15M propuso un itinerario diferenciado y de encuentro respecto a la de los sindicatos). En este escenario, el movimiento ha perdido la iniciativa estratégica y ve condicionada su agenda por otros actores. No es fácil persistir como actor político significativo.

El movimiento ha intentado, con escaso éxito, estabilizarse y darse continuidad con su extensión organizativa a los barrios de las ciudades. Puede, no obstante, intentar mejorar su situación organizativa, o bien, puede intentar constituirse como movimiento organizado y estructurado. Una buena parte de los mileuristas o de los nimileuristas, en fin, del nuevo precariado⁴⁷, puede encontrar más cómodo y accesible la participación en la dinámica 15M que en la estructura de otros movimientos.

En todo caso, creo que lo más significativo respecto al 15M es que inaugura un nuevo ciclo de protesta⁴⁸. La articulación de nuevas oportunidades políticas y la propia acción de los movimientos ha situado en un nuevo contexto la respuesta social a la crisis económica. Todo parece indicar que la crisis y sus efectos serán duraderos y no se vislumbra el momento de un cambio a mejor. Por otra parte, persisten las políticas que han sido impugnadas por el 15M y por otros actores. Por último, la politización de la crisis económica ha sacado la gestión de la misma del espacio de las decisiones inevitables y la ha convertido en una elección ubicable en el eje izquierda-derecha.

La incidencia del 15M ha facilitado la apertura de otras organizaciones (sindicatos, en primer lugar) a una respuesta más contundente frente a la gestión de la crisis, exigidas por las circunstancias y motivadas por los efectos de las políticas de recortes. La organización de la protesta en estas circunstancias será más plural y diversa. Probablemente, también, menos pacífica. El ambiente «buenrollista» propio del 15M y tan profusamente copiado y tergiversado por la publicidad⁴⁹ puede verse rápidamente sustituido por lógicas de confrontación más confrontacionales. La disputa por el espacio público puede adquirir tonos menos amables que los que conocimos en los mágicos meses de mayo, junio y julio de 2011 en nuestras calles y plazas.

La fuerza del movimiento de los indignados no radica en su capacidad propositiva, aunque la ingenuidad de algunos planteamientos no debería ocultar que el 15M ha señalado problemas que se han convertido, ya, en cuestiones relevantes de la agenda política.

Si consideramos estos factores, el 15M es claramente un síntoma, pero es mucho más que eso. Es un movimiento de reacción a un cambio de paradigma de consecuencias impredecibles. Las preguntas alrededor de su evolución y futuro tienen que tener en cuenta el contexto de conflicto estructural al que antes hemos venido haciendo referencia y su emergencia.

Agradecimientos

Algunas de las ideas que aparecen en este artículo son el resultado de horas de debate, de reflexión y de conversaciones realizadas en el marco de la Universidad, con amigos/as y en espacios propios del compromiso político. Como es obligado decir, no hago a nadie responsable por mis errores o insuficiencias, pero reconozco la deuda intelectual con algunas personas en particular. No quiero dejar de mencionar a Juan Carlos Monedero, amigo y compañero con el que hemos compartido muchas de las ilusiones que aquí se expresan y algunas de las tristezas también. A Carlos Prieto del Campo por su fuerza y su optimismo sensato; A Isabel Wences por su inteligencia y generosidad; a José María Sauca por su capacidad para impulsar proyectos y movilizar ideas; a Antonio Natera y Joan Pere Font por animarme a escribir e investigar y prestarme su generoso apoyo; a mi hijo Jaime

porque me enseña cada día a ser mejor y a Sara, mi compañera, porque hay mucho de ella en este texto. ♦

NOTAS

- ¹ Publicado como artículo en: Chaves Giraldo, Pedro; Prieto del Campo, Carlos; Ramírez Gallegos, René (editores) (2013); *Crisis del capitalismo neoliberal, poder constituyente y democracia real*. Traficantes de sueños. Madrid.
- ² Utilizo la definición de Tarrow sobre ciclo de protesta: «Fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados, un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación, marcos nuevos o transformados para la acción colectiva, una combinación de participación organizada y no organizada y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades», Sidney Tarrow, (2004), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (2ª edición), Alianza Ensayo, Madrid, pp. 202-203.
- ³ Alain Touraine (2011), *Después de la crisis. Por un futuro sin marginación*, Paidós, Estado y Sociedad. Madrid
- ⁴ *Idem*, página 29. Con la desaparición de los actores, Touraine se refiere a la desaparición de sujetos colectivos, articuladores de demandas, representantes de conflictos en una sociedad.
- ⁵ Pierre Rosanvallon, (2007), *La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. Editorial Manantial. Buenos Aires.
- ⁶ Entrevista con Zygmunt Bauman en El País, 17 de octubre de 2011. http://elpais.com/diario/2011/10/17/cultura/1318802401_850215.html
- ⁷ De Sousa Santos, Boaventura (2006), *Reinventar la democracia, reinventar el Estado*. Clacso Libros. Buenos Aires.
- ⁸ Hay tantos casos de esa codicia incomprensible que es difícil rescatar alguno en particular, pero se me ocurre como especialmente memorable, el de Richard Fuld, entonces Presidente de Lehman Brothers, que contaba, en su mejor momento, hasta con seis jets privados, entre otras muchas propiedades. ¿Para qué demonios puede alguien necesitar seis jets?
- ⁹ Wendy Brown (2009), «Nous sommes tous démocrates» en *Démocratie, dans quel état?* (VV.AA). Paris, La Fabrique Éditions, pp. 59-76.
- ¹⁰ Esta es la paradoja de la globalización a las que se refiere Dani Rodrik en su libro: *La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la economía mundial*, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 2011.
- ¹¹ Concepto que usa Foucault y que Wendy Brown reinterpreta en su propuesta de interpretación del neoliberalismo, a mi juicio, con mucho sentido. Ver, Brown, Wendy (2007), *Les habits neufs de la politique mondiale. Néolibéralisme et Néoconservatisme*. Les prairies ordinaires. Paris.
- ¹² A. Etzioni, F. Fukuyama, S. Huntington, R. D. Putnam, T. Skocpol, M. Walzer *et al.*, «What We're Fighting For. A Letter From America», *The Washington Post*, 12 de febrero de 2002 .
- ¹³ Ver nota 7, págs., 23 y 24.
- ¹⁴ Para Bauman nuestra modernidad ha contribuido a asociar orden y capacidad de control. Estas dos palabras se convierten, hablando de biografías personales en previsibilidad y estabilidad. Hoy, para Bauman, «se diría que nadie controla el mundo. Peor aún, en estas circunstancias no está claro que significaría controlar», en Bauman, Zygmunt (2005), *La globalización, consecuencias humanas*. FCE, México DF.
- ¹⁵ Ferrajoli, Luigi (2011), *Poderes salvajes. La crisis del Estado constitucional*. Editorial Trotta, Madrid.
- ¹⁶ *Idem*, página 45 y ss.
- ¹⁷ Judt, Tony (2010), *Algo va mal*. (segunda edición), Editorial Taurus, Madrid. Página 77.
- ¹⁸ La síntesis más aguda sobre la verdad de este modelo político y económico dice que en estos países, todo lo que había de socialismo no era real y todo lo que había de real no era socialista. No se puede explicar mejor.
- ¹⁹ http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_1_1_1_1,00.html.
- ²⁰ http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_159594/lang-es/index.htm
- ²¹ <http://reports.weforum.org/global-risks-2012/>

- ²² Frank, Thomas (2008), *Pourquoi les pauvres votent à droite. Comment les conservateurs ont gagné le coeur des États-Unis, celui des autres pays riches*, Marseille, Agone.
- ²³ *Ibid.*, p. 33. El texto en original en francés: «Votez pour interdire l'avortement e vous aurez une bonne réduction de l'impôt sur le capital. Votez pour que votre pays redevienne fort et vous aurez la décentralisation. Votez pour faire la nique à ces universitaires politiquement corrects et vous aurez la dérégulation de l'électricité. Votez pour que le gouvernement vous lâche un peu les baskets et vous aurez les conglomerats et les monopoles del médias et de l'agro-alimentaire. Votez pour résister au terrorismo et vous aurez la privatisation de la sécurité social. Votez pour mettre une bonne taloche à l'élitisme et vous aurez un ordre social au sein duquel les riches sont plus riches qui l'ont jamais été, les travailleurs dépouillés de tout pouvoir et les PDG rémunérés au-delà de toute imagination».
- ²⁴ *Ibid.*, página 30.
- ²⁵ Jacques Attali (2009), *¿Y después de la crisis qué...? Propuestas para una nueva democracia mundial*. Gedisa, Barcelona.
- ²⁶ Para una aproximación a interpretaciones sobre la crisis: Varoufakis, Yanis (2012), *El minotauro global. Estados Unidos, Europa y el futuro de la economía global*. Capitán Swing, Madrid. También: Jeffrey Sachs (2012). *El precio de la civilización*. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona.
- ²⁷ Naomi Klein, (2007), *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre*, Paidós, Barcelona.
- ²⁸ *Ibid.* nota anterior, página 26.
- ²⁹ De Sousa Santos, Boaventura (2005), *El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política*. Madrid. Trotta. Páginas 339 y ss.
- ³⁰ Rosanvallon, Pierre (2010), *La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad*. Paidós Estado y Sociedad nº 176, Madrid, p. 25.
- ³¹ *Ibid.*, p. 31
- ³² Flores D'Arcais, Paolo (2010), «Fascismo y berlusconismo» en *Claves de la Razón Práctica* nº 208. Diciembre 2010. Editorial Progreso.
- ³³ Esta parte del artículo ha sido publicada en la revista *Paideia*, en el número 94, mayo-agosto de 2012. Nuevamente, agradezco a los editores su gentileza al permitirme usar y difundir estas páginas en otros medios.
- ³⁴ Velasco, Pilar (2011), *No nos representan. El Manifiesto de los indignados en 25 propuestas*. Temas de Hoy, Madrid.
- ³⁵ *Ibidem* nota anterior, página 25.
- ³⁶ Tarrow, Sidney (2004), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza ensayo, Madrid.
- ³⁷ Frank, Thomas (2008), *Pourquoi les pauvres votent à droite. Comment les conservateurs ont gagné le coeur des États-Unis (et celui des autres pays riches)*. Contre-feux Agone, Paris. página 30.
- ³⁸ Joan Subirats ha insistido en el cambio cualitativo que implica internet. Lejos de ser una simple herramienta sofisticada estaríamos ante un nuevo paradigma: Joan Subirats, (2011), *Otra sociedad otra política. De "no nos representan" a la democracia de lo común*. Icaria Asaco, Barcelona
- ³⁹ Fundación Alternativas, ZooMPolítico, Especial 15-M (2011/4), página 15.
- ⁴⁰ Tomadas como referencia del Manifiesto de Democracia real ya y de la página web de democracia real ya a fecha 30 de marzo de 2012. <http://www.democraciarealya.es/documento-transversal/>
- ⁴¹ Rosanvallon, Pierre (2010), *La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad*. Paidós Estado y Sociedad nº 176. Madrid. Pág. 31.
- ⁴² <http://www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/>
- ⁴³ El auto-posicionamiento político se refiere a la ubicación de la población en el eje izquierda-derecha, considerando que el valor 1 se corresponde con aquellos que se autodefinen en la extrema izquierda y el valor 10 en la extrema derecha. El centro perfecto estaría, por tanto, en el valor 5. Los datos para esta parte del trabajo han sido extraídos del estudio que la Fundación Alternativas hizo sobre el 15M y que puede encontrarse en la web de esta Fundación con el nombre: ZooMPolítico, Especial 15-M (2011/4). He utilizado también la encuesta de Metroscopia para El País (http://elpais.com/diario/2011/06/26/espana/1309039209_850215.html) y el barómetro del Centro de Estudios Sociológicos 2905, de junio de 2011. Los resultados de los tres estudios arrojan resultados muy similares.

- ⁴⁴ En rueda de prensa de 27 de septiembre de 2011, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, refiriéndose al movimiento 15M, afirmaba que “bajo la apariencia de inocentes movilizaciones se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo y, en definitiva, constituyen la semilla del totalitarismo”.
- ⁴⁵ Estudio CIS 2905, julio 2011.
- ⁴⁶ El recuerdo de voto hace referencia a una variable que nos informa sobre el voto de los encuestados en elecciones pasadas. Responde a la pregunta: “¿a quién votó usted en las últimas elecciones?”. Esta variable constituye la principal fuente de información sobre el comportamiento electoral de los encuestados y su cruce con otras variables genera información significativa sobre el posicionamiento del electorado sobre diferentes temas observados desde el voto a un determinado partido.
- ⁴⁷ Este concepto, originalmente acuñado por la sociología francesa en la década de los 80 para referirse al sector de la clase trabajadora con condiciones laborales más frágiles o inestables (precarización del trabajo), fue retomado y amplificado en el otoño de 2006 en la sociedad alemana, a raíz de un estudio financiado por la Friedrich Ebert Stiftung –fundación del partido social demócrata alemán - que analizaba la sociedad en transformación y señalaba la emergencia de un estrato o clase social caracterizada por la alternancia entre contratos temporales y desempleo, unas limitadas redes familiares y escasa formación. Desde entonces, el concepto se ha empleado con diversas acepciones, llegando a abarcar no solo al estrato social de aquellos que *trabajan*, sino también al de los que *viven* en condiciones precarias. En este último sentido nos referimos aquí a “preariado”. Sobre este debate conceptual, ver entre otros, Gerald Raunig, «Máquinas MayDay», pp. 73-86, en *Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como movimiento social*, Ed. Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.
- ⁴⁸ Utilizo la definición de Tarrow sobre ciclo de protesta: «Fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizadas a los menos movilizadas, un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación, marcos nuevos o transformados para la acción colectiva, una combinación de participación organizada y no organizada y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades», Sidney Tarrow, (2004), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (2ª edición), Alianza Ensayo, Madrid, pp. 202-203.
- ⁴⁹ Como ejemplo de la utilización y tergiversación de la “marca 15M” por parte de grandes multinacionales, véanse las campañas publicitarias lanzadas por Coca-Cola (<http://www.youtube.com/watch?v=5QYbKnDI8JU>) y Movistar (<http://www.youtube.com/watch?v=EnheSudO21M>) en el último trimestre de 2011.
- Véase igualmente el contra-anuncio anónimo creado en respuesta por simpatizantes del movimiento 15M, como ejemplo de las reacciones que ha supuesto: <http://www.youtube.com/watch?v=Z9fagh8RA70>

BIBLIOGRAFÍA

- BROWN, Wendy, «Nous sommes tous démocrates à présent», pags. 59-76, en VV.AA, *Démocratie, dans quel état?*, Ed. La Fabrique, Paris, 2009.
- BROWN, Wendy, *Les habits neufs de la politique mondiale. Néolibéralisme et Néoconservatisme*, Ed. Les prairies ordinaires, Paris, 2007.
- DELLA PORTA, Donatella y DIANI, Mario, *Los movimientos sociales*, Ed. Complutense y CIS, Madrid, 2011.
- DE SOUSA SANTOS, Boaventura, «Desigualdad, exclusión y globalización: hacia la construcción multicultural de la igualdad y la diferencia» en *El milenio huérfano, ensayos para una nueva cultura política*. Editorial Trotta/Ilsa, Madrid, 2005
- FRANK, Thomas, *Pourquoi les pauvres votent à droite. Comment les conservateurs ont gangé le coeur des États-Unis (et celui des autres pays riches)*. Contre-feux Agone, Paris, 2008
- JUDT, Tony, *Algo va mal*. Editorial Taurus, Madrid, 2010
- RAUNIG, Gerald, «Máquinas MayDay», pags.73-86, en *Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como movimiento social*, (Trad. EXPÓSITO, Marcelo), Ed. Traficantes de Sueños, Madrid, 2008
- RODRIK, Dani, *La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la economía mundial*, Ed. Antoni Bosch, Barcelona, 2011.

ROSANVALLON, Pierre, La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, Ed. Manantial, Buenos Aires, 2007.

STRANGE, Susan, La retirada del Estado. Icaria Editorial, Barcelona, 2001

SUBIRATS, Joan, Otra sociedad otra política. De «no nos representan» a la democracia de lo común, Ed. Icaria Asaco, Barcelona, 2011.

TARROW, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Ed. Alianza ensayo, Madrid, 2004.

TOURAINÉ, Alain, Después de la crisis. Por un futuro sin marginación, Ed. Paidós, Estado y Sociedad, Madrid, 2011.

VELASCO, Pilar, No nos representan. El Manifiesto de los indignados en 25 propuestas. Ed. Temas de Hoy, Madrid, 2011.

OTRAS FUENTES

Entrevista a Zygmunt Bauman, publicada en El País, 17 de octubre de 2011. http://elpais.com/diario/2011/10/17/cultura/1318802401_850215.html

Fundación Alternativas, ZooMPolítico, Especial 15-M (2011/4), página 15. Estudio CIS 2905, julio 2011.

Página Web de Democracia Real Ya: <http://www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/>

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA: UN MARCO PARA DESARROLLAR EL GOBIERNO ABIERTO

QUIM BRUGUÉ

Hemos iniciado el siglo XXI con una intensa crisis política y administrativa. Nuestros gobiernos y nuestras administraciones son percibidos por la mayoría de los ciudadanos como una rémora. No sólo se muestran incapaces de abordar satisfactoriamente nuestros problemas sino que, peor aún, contribuyen a intensificarlos. No sólo parecen incapaces de resolver nuestros retos individuales y colectivos sino que –tal como apuntan las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)- se han convertido en parte del problema.

Desde este punto de partida, en las siguientes páginas trataremos de diseccionar las causas de esta situación y apuntar algunas ideas para superarlas. Así, en primer lugar, analizaremos la crisis de legitimidad de nuestros gobiernos y nuestras administraciones, apuntando algunas hipótesis para explicar el derrumbe de legitimidad que arrastran desde hace ya algunos años. En segundo lugar, argumentaremos que la salida a esta situación pasa por democratizar las políticas públicas. Se trata de una hipótesis controvertida y que, además, se sitúa en el difícil equilibrio entre la democracia representativa y la democracia directa. Aunque a menudo los debates nos obligan a situarnos en uno u otro bando, mi opción pasa por buscar un punto de equilibrio entre ambas. Finalmente, relacionaré el concepto de Gobierno Abierto con la propuesta de regeneración democrática que reclaman nuestras instituciones públicas.

LA DOBLE CRISIS DE LEGITIMIDAD

¿Por qué la ciudadanía ha dejado de creer en las instituciones públicas? ¿Cómo argumentan los ciudadanos su creciente desconfianza ante las actuaciones gubernamentales? ¿Qué es lo que nos resulta tan desagradable del funcionamiento de nuestras administraciones públicas?

Ante estos interrogantes, la mayoría de ciudadanos se atropellaría en una vociferante y extensa relación de fracasos, agravios, malas prácticas, corrupciones y dinámicas de funcionamiento inaceptables. Lo difícil no es responder a estas preguntas, que parecen responderse con obviedades. Lo complicado, en todo caso, sería darles la vuelta a estos interrogantes e intentar justificar porque deberíamos confiar en unos gobiernos y unas administraciones que, a todas luces, se nos aparecen como incompetentes e incapaces.

La literatura especializada recoge esta generalizada insatisfacción distinguiendo lo que podríamos llamar la doble crisis de legitimidad de nuestras instituciones: la crisis de legitimidad respecto los inputs del sistema político-administrativo (VALLÈS, 2008) y la crisis de legitimidad respecto los outputs del propio sistema (BOVENS y HARDT, 1998).

Sin confianza en los mimbres del sistema político-administrativo

En primer lugar, la ciudadanía no cree en los inputs del sistema político-administrativo; es decir, no les parecen adecuados los mimbres, los ingredientes, los materiales que dan forma a sus instituciones públicas. No les gustan ni las reglas que las rigen, ni las formas que adoptan, ni las personas que las protagonizan.

Las reglas del sistema electoral, por ejemplo, no son actualmente percibidas como adecuadas para trasladar la voluntad popular a las instituciones públicas. La facilidad con la que el lema “no nos representan” ha impregnado buena parte de nuestra sociedad ilustra la frustración de los ciudadanos con las reglas electorales. Tampoco ingredientes tan cruciales para nuestro sistema institucional como los partidos políticos o el Parlamento despiertan la aceptación de la ciudadanía. Los partidos políticos son considerados como maquinarias obsesionadas por el poder e incapaces de entender el interés público, mientras que el Parlamento ha dejado de ser un espacio de deliberación pública para convertirse en una marioneta donde se ritualizan decisiones previamente ya adoptadas. ¿Y qué decir de los políticos y los funcionarios? Los primeros representan la encarnación de todos los defectos de una política miope y narcisista; mientras que los segundos responden, en nuestro imaginario, a todos los clichés de incompetencia e inoperancia.

No estoy diciendo que las anteriores afirmaciones sean ciertas, pues se trata de caricaturas que seguro deberíamos discutir con mayor profundidad. Me limito, más bien, a constatar que conforman la opinión de la mayoría de los ciudadanos. Unos ciudadanos que no dan crédito a los inputs de su sistema político-institucional y que, en consecuencia, sienten un creciente desapego hacia el mismo.

Esta primera crisis de legitimidad ha sido prolíficamente comentada y discutida, tanto en el ámbito académico como en los medios de comunicación, y ha dado lugar al fenómeno de la desafección política. Es decir, dado que las reglas, las instituciones y las personas de nuestro sistema político-administrativo no merecen nuestra confianza, reaccionamos alejándonos de él. Una desafección que se traduce en el aumento de los niveles de abstención, en el descrédito de la política y en una feroz crítica a las actuaciones de la administración pública.

Insatisfechos con el resultado del sistema político-administrativo

En segundo lugar, tal como apuntábamos más arriba, la ciudadanía tampoco se muestra satisfecha con los outputs del sistema político-administrativo. Desde este punto de vista, la crisis de legitimidad no sólo afecta a los ingredientes del sistema sino también a sus productos. No es sólo que estemos insatisfechos con las reglas y las personas que rigen las instituciones públicas, sino que además nos sentimos profundamente frustrados ante su incapacidad para incidir de manera efectiva en la resolución de nuestros problemas. No es sólo que lo hagan mal sino que, peor aún, lo que hacen no sirve de nada.

Así pues, esta segunda dimensión de la crisis de legitimidad de nuestro sistema se relaciona directamente con la incapacidad de las políticas públicas o, usando los términos de BOVENS y HARDT (1998), con el policy failure –el fracaso de las políticas públicas. Este fracaso no es una sólo una percepción abstracta sino una experiencia concreta y personal: la incapacidad de las administraciones públicas para abordar satisfactoriamente el problema de los que pierden sus casas, para sacarnos de una crisis económica que nos está atormentando, para generar nuevos puestos de trabajo, para cuidar adecuadamente de nuestros mayores o para proteger nuestro entorno natural. La lista de fracasos es extensa, de manera que los ciudadanos han sacado las conclusiones lógicas: nuestro sistema político-administrativo es ineficaz.

La desconfianza de los ciudadanos respecto los outputs del sistema no ha sido un tema tan analizado

y tan mediatizado como el descrédito en los inputs. Mientras las referencias a la desafección política, a la necesidad de un nuevo modelo electoral o a la importancia de una nueva ley de partidos son muy frecuentes, los debates en torno a la eficacia de las políticas públicas son menos populares y, en todo caso, quedan delimitados por los conocimientos sectoriales que a menudo requieren.

Sin embargo, desde el punto de vista de este artículo, se trata de un aspecto crucial para recuperar la legitimidad del sistema político administrativo. En la actual situación, un número creciente de ciudadanos está renunciado a buscar respuestas en un sistema político-administrativo en el que ya no confían y, consecuentemente, están construyendo nuevas alternativas en el trabajo comunitario, en el cooperativismo o en la recuperación de los bienes comunes (SUBIRATS, 2011). Ya no se pide a las instituciones que recuperen su eficacia sino que, destilando una enorme frustración, se les exige que nos dejen en paz, que ya nos espabilaremos, que no necesitamos de sus fracasadas políticas.

Para que nuestro sistema político-administrativo recupere su legitimidad será imprescindible que muestre una renovada capacidad para afrontar los problemas de la ciudadanía y, simultáneamente, que se incorpore a los propios ciudadanos en el diseño y la implementación de estas soluciones. La ciudadanía ha caído del caballo y, consecuentemente, ya no podremos volver a contar con una ciudadanía pasiva que delega en el sistema político-administrativo la resolución de sus problemas. Los ciudadanos actuales se han activado y exigen participar tanto en el diagnóstico como en la respuesta a sus dificultades de presente y a sus retos de futuro.

Y no se trata de una presencia decorativa sino que –tal como lo expresan muchos activistas sociales– pretenden que sea la administración quien siga sus pasos. Nada de paternalismo participativo, sino más bien unos gobiernos y unas administraciones que deben amoldarse al liderazgo de la sociedad civil. Desde este punto de vista, como explicaremos en el siguiente apartado, el reto de las políticas públicas no se sitúa en su solvencia técnica sino, sobre todo, en su calidad democrática.

INSTITUCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS DESBORDADAS

En el apartado anterior hemos identificado los rasgos que definen la doble crisis de legitimidad de nuestro sistema político-administrativo. Sin embargo, la simple identificación no explica las razones de esta situación. ¿Nuestras instituciones siempre han funcionado mal o se trata de una deriva reciente? ¿Nunca han sido capaces de solucionar nuestros problemas o es ahora que están fracasando en sus obligaciones? Si hasta hace poca más de una década no existía esta doble crisis de legitimidad, ¿cómo se ha generado y qué explica su virulenta intensidad?

La respuesta más inmediata hace referencia a una parte de la ecuación “problemas-soluciones”. Lo podríamos formular de la siguiente manera: hemos llegado a esta situación por la incapacidad de construir y ofrecer soluciones adecuadas. La responsabilidad se sitúa, de esta manera, en los solucionadores. Esta respuesta, sin embargo, abre nuevos interrogantes. Respeto a nuestros políticos, ¿cuándo y por qué se han vuelto tan desesperadamente incapaces? ¿En qué momento nuestras instituciones empezaron a fallar y a fracasar con tanto estrépito?

Ante la dificultad de responder a estas preguntas –e inspirándome en la literatura especializada– propongo un giro explicativo que, de entrada, lo reconozco, es menos intuitivo. La crisis, desde esta nueva perspectiva, no se explicaría tanto por la incapacidad de los solucionadores como por las características, cada vez menos abordables, de los propios problemas. Lo que nos ha cambiado no es tanto la calidad de las soluciones como la creciente complejidad de los problemas.

Aquí radicaría el fracaso de nuestras instituciones y de nuestras políticas. Unas instituciones y unas

políticas que no se caracterizarían tanto por su incompetencia como por su desbordamiento. No se trata únicamente de que ofrezcan malas soluciones, sino de que sus soluciones ya no tienen capacidad para incidir en unas problemáticas que las sobrepasan. Más que de incompetencia, se trata de impotencia.

A la hora de diseñar una política hídrica, por ejemplo, no fallan tanto las capacidades para elaborar una solución técnicamente solvente como la creciente complejidad de un problema que afecta de manera poliédrica a aspectos económicos, ambientales, industriales, agrícolas, energéticos o de infraestructuras. De forma parecida, aunque dispongamos de soluciones adecuadas para crear centros de rehabilitación para personas drogodependientes, el problema de su ubicación nos desborda cuando los vecinos manifiestan su rechazo al equipamiento, cuando aparecen quejas relacionadas con la distribución más o menos equilibrada de estos centros en el territorio, o cuando se cuestiona la seguridad en sus entornos. Es decir, las soluciones que están disponibles y que hasta recientemente funcionaban se muestran hoy desbordadas por la creciente complejidad de unos problemas cada vez más poliédricos y multidimensionales.

Desde hace ya algunos años, analistas y profesionales de las políticas públicas son conscientes de la creciente complejidad de los asuntos que han de gestionar. Incluso han acuñado un término específico -wicked problems (problemas malditos)- para expresar gráficamente aquellas situaciones que parecen desbordar las capacidades de la administración y de las políticas públicas (WEBER y KHADEMIAN, 2008). Un desbordamiento que, como hemos visto, no sólo presiona a la propia administración sino que, simultáneamente, se convierte en el motor de una creciente insatisfacción ciudadana (HAY, 2007).

La principal dificultad se encuentra en el contraste entre la simplicidad de las soluciones y la complejidad de los problemas a resolver. El modus operandi administrativo clásico consiste, precisamente, en simplificar los problemas; reduciéndolos a un ámbito especializado capaz de abordarlos desde sus conocimientos sectoriales. La realidad actual, sin embargo, no parece aceptar estas simplificaciones. Es demasiado compleja, sofisticada y diversa como para someterse a las restricciones de una comprensión parcial.

Los problemas son malditos precisamente por su irreductible complejidad, por la imposibilidad de aplicarles recetas simplificadoras que los hagan manejables para las administraciones públicas. En otros términos, hemos preparado a la administración para trabajar con eficiencia, pero nunca nadie antes le había pedido que pensarán con inteligencia sobre cómo abordar asuntos complejos. El reto es como generar esta necesaria inteligencia administrativa (BRUGUE, 2009).

La respuesta no es sencilla, aunque en la literatura encontramos algunas orientaciones que nos indican que la inteligencia únicamente florece a partir del diálogo y del intercambio abierto (FISHER y FORRESTER, 1993; HAJER y WAGENNAR, 2003). Mientras que la eficiencia es técnica, la inteligencia es dialógica. Y esta afirmación es la que –tal como adelantábamos anteriormente- nos traslada al reto de democratizar las decisiones públicas. Con otros términos, para superar la impotencia de nuestras instituciones públicas necesitamos dotarlas de inteligencia deliberativa o, si se prefiere, impregnar nuestras políticas públicas de calidad democrática (WAGENNAR, 2007).

La puesta al día de nuestras instituciones públicas, en consecuencia, pasa por incorporar el diálogo con los ciudadanos (participación), entre los diferentes ámbitos sectoriales de su estructura administrativa (transversalidad) y entre los diferentes niveles gubernamentales que operan en un determinado territorio (gobierno multi-nivel). Y para trasladar esta afirmación a la práctica, durante las últimas dos décadas hemos trabajado en al menos dos direcciones: la profundización democrática y el gobierno abierto.

A continuación nos referiremos a estas dos etiquetas, asumiendo que interseccionan en la voluntad compartida de generar un nuevo sistema político-administrativo. Con una aproximación más genérica, en primer lugar, nos referiremos al reto de la profundización democrática a partir de la hoy muy referida contraposición entre democracia representativa y democracia directa. De forma más concreta, en segundo lugar, usaremos el concepto de gobierno abierto para sugerir algunas líneas de actuación que deberíamos emprender para dotar a nuestras instituciones de la imprescindible inteligencia que le exige la sociedad del siglo XXI.

ENTRE LA REPRESENTACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DIRECTA

“No nos representan” y “democracia real ya”. Bajo estos conocidos eslóganes, muchos ciudadanos han certificado la muerte de la democracia representativa y claman a favor de una redescubierta democracia directa. Se trata de reivindicaciones legítimas y comprensibles, pero que, en su rotundidad, según mi opinión, se expresan sin los necesarios matices.

De hecho, como trataré de argumentar, en sus formas más puras y estilizadas, tanto la democracia directa como la democracia representativa han fracasado históricamente. No se trata pues de optar por una o la otra, por el blanco o por el negro, sino de entender sus peculiaridades para proponer una adecuada combinación de ambas.

El Siglo de Oro y el colapso de la democracia directa

Las primeras referencias democráticas datan de la Grecia del siglo V aC. Tras superar la amenaza tiránica de los persas, Atenas deslumbró por su cultura, su riqueza, su poderío militar y, también, por el desarrollo de un sistema político peculiar: la democracia. Durante este período, conocido como el Siglo de Oro, Atenas desarrolló un modelo de democracia directa que para muchos todavía resuena como un ideal.

Sin embargo, antes de quedar deslumbrados por sus indudables logros, deberíamos recordar que la democracia ateniense acabó fracasando estrepitosamente. La intensidad de su caída fue tal que el término “democracia” desapareció del debate político durante más de 20 siglos. En realidad, hasta finales del siglo XVIII no volvemos a hablar de los regímenes democráticos como de algo positivo. El modelo ateniense, en definitiva, en tanto que presentación más estilizada de una democracia directa pura colapsó y, de esta manera, mostró unos límites que hoy no deberíamos olvidar.

La democracia ateniense funcionaba a través de asambleas. Se convocaba a todos los ciudadanos en la plaza pública (ágora) y éstos, tras un proceso de debate, adoptaban las decisiones de manera directa. Las asambleas también designaban, a través del sorteo, a los principales cargos públicos de la ciudad. La democracia ateniense no creía en la representatividad y, por lo tanto, se nos presenta como una experiencia radical de democracia sin intermediación.

Desde su perspectiva, las decisiones a través de los representantes electos no eran democráticas, ya que éstos son siempre una élite que destaca por sus conocimientos, sus riquezas o sus posiciones privilegiadas. Si la democracia es el gobierno del pueblo, la representación es una violación de este principio. Este argumento, curiosamente, acaba coincidiendo con autores elitistas del siglo XIX como Mosca, Pareto o Michels. Para estos autores, la democracia de su época –ya representativa– no era más que una farsa, pues existen unas élites políticas que controlan los resortes del poder y que acaban siempre controlándolos –con independencia de la voluntad popular. Tal como lo exponía el propio Gaetano MOSCA (1984: 37):

“Que el diputado es elegido por la mayoría de los electores es un supuesto legal que, aunque forme parte de nuestro sistema de gobierno, aunque sea ciegamente aceptado por muchos, está sin embargo en perfecta contradicción con el hecho real. Quienquiera que haya asistido a unas elecciones sabe perfectamente que no son los electores los que eligen al diputado, sino que en general es el diputado que se hace elegir por los electores. Si esta manera de decirlo resulta desagradable, podemos sustituirla por esta otra: que son sus amigos quienes lo hacen elegir. En todo caso, una candidatura es siempre obra de un grupo de personas unidas por un propósito común, de una minoría organizada que, como siempre, fatal e inevitablemente se impone a la mayoría desorganizada.”

A pesar de la distancia en el tiempo, las palabras de Mosca son muy actuales. No en vano, fue el propio Mosca quien acuñó la expresión “clase política” que hoy utilizamos, despectivamente, para referirnos a una grupo de profesionales de la política que, amparados en la idea de representación, habrían usurpado el poder del pueblo. En cualquier caso, como ya hemos anticipado, la alternativa que se propone en Atenas –una asamblea donde el pueblo ejerce el poder sin ninguna intermediación- también tiene sus inconvenientes y, de hecho, experimentó un proceso de profunda degradación.

En primer lugar, no deberíamos olvidar que la democracia ateniense operaba a partir de un concepto de ciudadanía altamente restrictivo –elitista, si se prefiere. En la polis ateniense habitaban unas 300.000 personas, pero no más de 50.000 eran consideradas como ciudadanos con derecho a participar en las asambleas. Los demás –mujeres, extranjeros, esclavos, etc.- no eran considerados como ciudadanos. Además, la participación de los ciudadanos era tan intensa (se podían celebrar hasta tres o cuatro asambleas mensuales) que sólo era asumible para aquellos que disfrutaban de una posición de privilegio. Algunos autores consideran que el tiempo que los ciudadanos atenienses dedicaban a la discusión política era el tiempo que tenía disponible gracias a que los esclavos trabajan por ellos.

Es obvio que esta situación sería hoy absolutamente inaceptable. Si llegar a estos extremos, sin embargo, no deberíamos olvidar que la democracia directa reclama a los ciudadanos una involucración continuada en los asuntos públicos y, consecuentemente, una dedicación que sólo algunos pueden permitirse. La falta de tiempo, de capacidades discursivas, de habilidades digitales o de formación política podrían operar como nuevas formas de exclusión democrática.

En segundo lugar, quizá el problema más grave que sufrió la democracia ateniense tuvo que ver con su captura por parte de los demagogos. En su acepción original, el demagogo era aquel que, gracias a sus habilidades y conocimientos, era capaz de convencer a la asamblea para que votará a favor de sus propuestas y que, simultáneamente, no tenía ninguna responsabilidad a la hora de trasladarlas a la práctica. Además, algunos de estos demagogos –conocidos como “maestros de la sabiduría” (los sofistas)- vendieron sus capacidades al mejor postor, de manera que el debate abierto en el ágora dejó paso a la compra de decisiones por parte de los más poderosos. No necesitamos muchas explicaciones para entender que una democracia capturada por la demagogia tendía al colapso. Y así sucedió, y la democracia pasó a ser considerada un régimen político degradado. Las críticas de Platón a la democracia todavía hoy son de lectura obligatoria para aquellos interesados en este tema.

Trasladándonos al contexto actual, el peligro de la demagogia persiste y se concreta en diversos flancos. TODOROV, en su libro “Los enemigos íntimos de la democracia” (2012) se refiere al “mesianismo de la política” y a la “tiranía de los individuos” como los principales riesgos de una democracia capturada, respectivamente, por el populismo y por el clientelismo. Como en la Atenas clásica, el ágora actual es un espacio altamente susceptible a la manipulación y al sesgo por parte de aquellos que ofrecen soluciones demagógicas, salvadoras, populistas o clientelares. Despojar a nuestra democracia de los filtros de la representación puede resultar muy atractivo, pero también deja el campo abierto a potenciales amenazas.

En definitiva, la democracia sin intermediación es una forma de poner en práctica la definición etimológica de la democracia como poder del pueblo. Sin embargo, especialmente en su formato más puro, deberíamos también tener en cuenta que la representación es un eficaz filtro ante el elitismo y la demagogia. La democracia ateniense del Siglo de Oro no contó con este filtro y, finalmente, el resultado fue, primero, su degradación y, más tarde, su desaparición.

La Constitución de Filadelfia y los límites de la democracia representativa

Una desaparición que, como ya habíamos anticipado, abre un paréntesis democrático que se prolonga hasta finales del siglo XVIII. La modernidad se había iniciado como un proceso de liberación de los individuos, los cuáles, hasta aquel momento, vivían sometidos a las cadenas morales y religiosas de la Edad Media. En este proceso, como no podía ser de otra manera, a las libertades civiles y económicas se le acaban sumando las políticas.

Se trata de una auténtica revolución que facilita el tránsito desde el antiguo régimen aristocrático hasta el nuevo orden capitalista y burgués. Un orden que, por encima de cualquier otra cosa, defiende los derechos individuales a la vida y a la propiedad. Pero que, en su énfasis en la libertad individual, acaba recuperando el sistema político democrático. Una democracia que, debemos apresurarnos a decir, no tiene nada que ver con la que habían visto florecer y finiquitar en la Atenas clásica.

Para no extendernos en un debate de amplio calado, situaré los orígenes e identificaré las características básicas de este nuevo modelo democrático en la Constitución de Filadelfia de 1787. Esta Constitución representa la culminación de la Revolución Americana y alumbró el nacimiento de un régimen político basado en la democracia representativa.

La Revolución Americana es, sobre todo, una revolución burguesa que facilita la creación de una sociedad liberal-capitalista. Su principal objetivo, siguiendo las ideas de John Locke, es proteger los derechos de la propiedad y la capacidad de cada individuo para emprender sus propios proyectos sin interferencias. No es una revolución de las clases populares sino de los propietarios capitalistas, y aquí nace su desconfianza democrática. Su énfasis en la libertad individual hace ineludible el paso democrático, aunque su lógica burguesa la hace muy temerosa frente los posibles excesos del pueblo. Así pues, la Constitución de Filadelfia da forma a la democracia liberal: un modelo político que acepta la democracia, aunque con muy poco entusiasmo.

Su principal aportación la encontramos, de hecho, en la capacidad para combinar la inevitable llegada de la democracia con la deseable limitación de su potencial desestabilizador. Una combinación que es posible gracias a la creación de una densa estructura de intermediación. La democracia que nace con la Constitución de Filadelfia se caracteriza por situar, entre los gobernantes y los gobernados, una densa malla de instituciones de intermediación que actúan como filtro, evitando que explote el potencial revolucionario de las clases populares y garantizando que se protegerán adecuadamente los intereses de la burguesía propietaria.

Parafraseando una famosa expresión de CROSSMAN (1986), la gran invención de este nuevo régimen político radica en la creación de una red tan densa entre los representantes y los representados que “no permite que la atravesase ni una gota del sudor de la soberanía popular”. Se han creado unas instituciones democráticas, pero se desconfía del pueblo. La democracia representativa ofrece el voto a los ciudadanos, pero limita su participación e impide su acceso efectivo a las instancias de poder.

Este modelo de democracia liberal-representativa ha dominado el escenario político de los dos últimos siglos. No cabe duda, en este sentido, que nuestras instituciones políticas son herederas de la desconfianza democrática que destila la Constitución de Filadelfia. Un modelo que ha funcionado con éxito, pero que hoy está mostrando sus límites. Del mismo modo que durante el siglo IV aC

vimos desaparecer la democracia sin intermediación, el siglo XXI parece estar contemplando la crisis de la democracia con intermediación.

Cuando muchos ciudadanos se adhieren al eslogan del “no nos representan” están, de hecho, mostrando su hartazgo ante la densidad de la red que los separa de los decisores públicos. Una red que ha vaciado de contenido la democracia y que la ha convertido, en opinión de muchos, en una marioneta en manos de una élite política alejada de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos alzan la vista hacia sus instituciones públicas no logran ver nada, tan sólo una opaca malla de instituciones que les impide cualquier incidencia real en el ejercicio del poder. Y, consecuentemente, gritan “no nos representan”.

Esta crisis del modelo liberal-representativo se ha expresado a partir de la necesidad de una regeneración democrática, aunque bajo esta etiqueta se abre un amplio elenco de posibilidades. Por un lado, algunos –desde mi punto de vista con cierta ingenuidad- apuestan por una superación radical de la democracia representativa y por la construcción de una democracia directa de inspiración asamblearia. El lema “Democracia real ya” o las propuestas del Partido X, nacido a la luz del movimiento 15M, irían en esta dirección. La apuesta por una democracia directa se apoya no sólo en el recuerdo idealizado de la polis griega sino también en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a la hora de superar cualquier intermediación. No es sólo que no nos representen sino que ni siquiera los necesitamos, de manera que la crítica al modelo representativo se radicaliza. No se trata de mejorarlo sino de superarlo.

Por otro lado, algunos –entre los que yo me sumaría- consideramos que la intermediación es necesaria, aunque muy mejorable. Pensamos que la apuesta por una democracia directa tiende a frivolar sus riesgos y a olvidar las dificultades de ajustar su funcionamiento a sociedades tan complejas como las nuestras. La representación, desde este punto de vista, sería imprescindible; aunque también sería imprescindible –vamos a subrayarlo- transformar y mejorar sustancialmente el ejercicio de la intermediación.

Recuperando la imagen de la red que separa a gobernantes y gobernados, las alternativas se resumen en dos grandes opciones: deshacernos de la red o mantenerla –aunque sea reduciendo significativamente su densidad, haciéndola más traslúcida. En la primera eliminamos toda intermediación, mientras que en la segunda nos planteamos como podemos hacer más transparente, más responsable, más efectiva y más democrática esta representación. Desde mi punto de vista, el debate sobre el Gobierno Abierto se sitúa en esta segunda opción, pues no nos propone tanto una eliminación de las estructuras de intermediación como una profunda revisión de las mismas.

GOBIERNO ABIERTO: DEMOCRATIZAR LA REPRESENTACIÓN

El principal argumento para defender la necesidad de intermediación –de representantes- se encuentra en la obligación que tiene la política de adoptar decisiones difíciles, decisiones que nunca pueden satisfacer las expectativas del conjunto de los ciudadanos. La política no opera como los centros comerciales –maximizando la satisfacción de sus clientes-, sino que se ve permanentemente obligada a frustrar las expectativas de los ciudadanos.

Los ciudadanos tienen intereses en conflicto y visiones divergentes sobre cómo les gustaría que fueran sus vidas, de manera que –legítimamente- no se ponen de acuerdo sobre aquello que debería hacer la política para resolver sus conflictos de presente y construir sus proyectos de futuro. En esta tesitura, el representante es un tercero que, tras satisfacer determinados requisitos, se ve en la obligación de tomar una decisión que nunca podrá maximizar las expectativas de todos. Este argumento

es especialmente relevante en sociedades complejas y heterogéneas como las nuestras (BRUGUÉ, 2012).

La política arranca del conflicto y tiene que ver más con decepciones que con satisfacciones. Por eso necesitamos estructuras de intermediación que sean capaces de generar decepciones individuales para poder construir proyectos colectivos. Ahora bien, asumido este problemático punto de partida, también quisiera apuntar que aunque la política está obligada a decepcionarnos, lo que no puede es decepcionarnos de cualquier manera. Puede decepcionarnos, pero sólo aceptaremos esta decepción si se nos explican las razones de la decisión adoptada, si se opera con transparencia, si se escuchan nuestras opiniones y si se rinde cuentas de las acciones realizadas.

La ciudadanía sabe y entienden que no todo es posible, que sus preferencias no siempre coinciden con las de los vecinos y que las decisiones políticas se mueven en este lodazal. Lo que no entiende – y ya no admite – es que nuestros representantes tomen estas decisiones con opacidad, escudados en informes técnicos invisibles o, simplemente, invocando una sacrosanta legitimidad electoral que hoy es claramente insuficiente. Y lo que la ciudadanía exige a los responsables públicos es que mejoren su ejercicio de la representación; que logren reforzar su legitimidad democrática o, de otro modo, no les aceptaremos como nuestros representantes.

Lo que los ciudadanos reclaman de manera intuitiva podrían ser aquellas características que hemos tendido a aglutinar bajo el concepto de Gobierno Abierto. Desde esta perspectiva, una definición de Gobierno Abierto debería hacer referencia a una forma de gobernar que recuperará la legitimidad perdida a través de (1) un ejercicio radical de la transparencia, (2) una apuesta por la calidad democrática de las políticas públicas, (3) una orientación dialógica que favorezca la inteligencia de las decisiones, y (4) una redefinición del ejercicio de la representatividad pública.

En las últimas páginas de este artículo nos referiremos brevemente a estos cuatro aspectos del Gobierno Abierto. Se trata de una aproximación personal al término y que, consecuentemente, se explica más por plantear aquellos asuntos que pretendo subrayar que por la intención de ofrecer una definición sistemática. Se pretende, también dar pistas que orienten la necesaria transformación de un sistema político-administrativo que, tal como explicábamos al inicio de este texto, está sometido a un intenso proceso de descrédito y deslegitimación.

Transparencia: una administración de cristal

Durante los últimos años, tanto desde el Gobierno central como desde diferentes instancias autonómicas, se ha planteado la necesidad de disponer de leyes que garanticen la transparencia y el acceso a la información. Los avances en este terreno están siendo un tanto decepcionantes. En cualquier caso, muestran la imperiosa necesidad de avanzar en la construcción de una administración que, volviéndose de cristal, descorriendo las cortinas de la opacidad, recupere la confianza de la ciudadanía.

Un avance que requerirá trabajar en múltiples proyectos y direcciones, aunque quisiera destacar dos aspectos cruciales para el desarrollo efectivo de la transparencia:

En primer lugar, es imprescindible que el acceso a la información sea considerado un derecho de ciudadanía, mientras que la transparencia ha de ser una obligación de la administración. No se trata, pues, de una concesión que se alcanza en la medida de lo posible, sino de un compromiso que tan sólo bajo determinadas circunstancias (privacidad, conflicto de intereses económicos, etc.) puede delimitarse. Reconocer este derecho ciudadano y esta obligación administrativa convierte las políticas de transparencia en una política que ha de promover una reforma de amplio calado de las estructuras y los procesos de la administración pública. De otra manera, se limitará a ser un nuevo brindis al sol

que, en lugar de mejorar, puede incluso empeorar la confianza con el sistema político-administrativo. En definitiva, cualquier ley de transparencia no será más que una engañosa declaración de intenciones si no viene acompañada de una profunda y efectiva transformación de nuestras administraciones públicas.

En segundo lugar, no podemos obviar la estrecha relación entre las nuevas tecnologías de la información y la transparencia. No se trata únicamente de las posibilidades técnicas y formales que ofrecen las redes sociales y las nuevas tecnologías, sino de la posibilidad de transformar el propio contenido sustantivo de las políticas de transparencia. Las nuevas tecnologías de la información nos obligan a convertir la transparencia en algo proactivo. Las administraciones no únicamente han de responder a las demandas informativas de los ciudadanos, sino que han de ofrecerla antes de que ésta sea solicitada. La transparencia, hoy, en otros términos, no significa sólo dejar salir la información administrativa sino también permitir que los propios ciudadanos entren en la estructura administrativa. Se trata de un reto que no sólo afecta a los organigramas y a los procesos administrativos sino, sobre todo, a la propia cultura administrativa. Una cultura basada en el monopolio del poder y del conocimiento que debe ser sustituida por una nueva cultura del poder y el conocimiento compartido.

Democratizar las políticas públicas

Hasta recientemente, hemos considerado -aunque sea formulándolo de forma una tanto simplificada- que la política tenía que ver con la democracia (por eso se ejercía desde el legislativo), mientras que las políticas públicas eran un asunto eminentemente de conocimiento técnico (disponible en las estructuras administrativas al servicio del poder ejecutivo). Hoy, sin embargo, la ciudadanía reclama su involucración en el diseño y la implementación de las políticas públicas. En realidad, exige que el ejercicio de la participación se expanda, superando el momento electoral y alcanzando el día a día de las decisiones y de las actuaciones políticas y administrativas.

Como en el apartado anterior, vamos tan sólo a destacar dos aspectos que deberíamos poner en práctica para efectivamente expandir el ejercicio de la participación ciudadana:

En primer lugar, mejorar la calidad democrática del proceso legislativo. Aunque las leyes las elaboran y aprueban nuestros representantes, esta simple delegación es hoy insuficiente. La redacción de una ley que pretenda dotarse de suficiente legitimidad exige un proceso de deliberación pública que no puede limitarse al debate -más o menos ritual- que se produce en sede parlamentaria. La ciudadanía reclama un ágora pública deliberativa más abierta y permeable, de manera que convertir la elaboración de una ley en un proceso participativo, en la ocasión de contrastar puntos de vista y de, finalmente, tomar una decisión previamente discutida, es condición indispensable para mejorar la calidad de nuestras instituciones. En España -y concretamente en el Gobierno de Aragón- existen experiencias que deberían tomarse como referencia y generalizarse. Un Gobierno Abierto debería limitar procedimientos legislativos cerrados (decretos ley, por ejemplo) y asumir procesos legislativos que incorporaran al conjunto de la ciudadanía. Quizá se pierda algo de tiempo, pero los réditos en términos de legitimidad y eficacia de las decisiones adoptadas son enormes.

En segundo lugar, esta profundización en la calidad democrática no puede quedarse en los procesos legislativos sino que tiene que alcanzar también a la elaboración de los planes, los programas o los proyectos que concretan las intenciones legislativas en políticas públicas específicas. La ciudadanía está hoy preparada para entender las complejidades de los diversos ámbitos sectoriales en los que actúa la administración pública y, en realidad, en la medida que se sienten afectados y/o interesados en estos ámbitos, exigen ser involucrados en la toma de decisiones y en la implementación de las po-

líticas públicas. También disponemos de algunas experiencias prácticas que nos muestran tanto la posibilidad como la eficacia de avanzar en esta dirección. Nuestro reto es generalizarlo y convertirlo en una forma de trabajar que impregne a nuestras organizaciones y que no requiera de excepcionales y puntuales procesos participativos.

Administración inteligente

En los dos puntos anteriores nos hemos referido a como la administración se abre al exterior, ofreciendo transparencia y participación a la ciudadanía. Se trata de dos aspectos básicos para avanzar en la construcción de lo que hemos llamado un Gobierno Abierto. En paralelo a estas ideas, el Gobierno Abierto debería también modificar sus lógicas internas, completando su tradicional preocupación eficientista por la anteriormente señalada obligación de tomar decisiones inteligentes. En este sentido, ya habíamos anticipado que una administración inteligente es una administración dialógica, y éste es el tercer aspecto que caracteriza al Gobierno Abierto.

No podemos ahora entrar en detalles, pero sí, como en los apartados anteriores, destacar dos aspectos que nos parecen cruciales para avanzar en la construcción de una administración inteligente.

En primer lugar, una administración dialógica debería propiciar que las políticas públicas se diseñaran y se desarrollaran de manera transversal y multinivel. La propia complejidad de nuestros problemas actuales, exigen soluciones que no se vean limitadas por fronteras sectoriales y/o institucionales. Parece evidente que al abordar asuntos como el desarrollo económico, la cohesión social o la sostenibilidad del territorio, los diversos ámbitos sectoriales de una administración han de interactuar y colaborar. De la misma manera, la propia complejidad deja sin sentido cualquier intento de repartir competencias en instituciones estanco. Los asuntos públicos son cada vez más multinivel y, por lo tanto, deberíamos sustituir la delimitación y la competencia entre instituciones por su complementariedad y colaboración. Ciertamente, no es sencillo avanzar en la dirección de la transversalidad y el gobierno multinivel, aunque en los últimos años hemos ido acumulando experiencias que deberían servirnos de aprendizaje. No será fácil, pero es un camino que nuestras administraciones deberán transitar de manera inevitable.

En segundo lugar, una administración inteligente no es aquella que realiza unas tareas concretas de la mejor manera posible sino aquella que es capaz de pensar qué es lo más adecuado para cada momento. Frente a la regularidad y a las garantías que ofrecen las administraciones tradicionales, una administración inteligente debe ser, sobre todo, una administración innovadora. La innovación es un concepto muy ajeno a nuestras instituciones públicas, pero imprescindible para adaptarse a un mundo complejo y volátil como el actual. Convertir a una organización basada en la uniformidad en una organización innovadora supone, otra vez, enormes retos y dificultades. En cualquier caso, como podemos observar en la literatura más reciente, empiezan a proliferar experiencias y reflexiones sobre cómo avanzar en este terreno. No podremos decretar la introducción de la innovación en las administraciones públicas, pero sí convertirlas paulatinamente en espacios más propicios para la innovación: espacios abiertos, que admitan la experimentación y el error, que faciliten la hibridación creativa, que permitan generar giros conceptuales y metodológicos, etc. La apuesta por avanzar en esta dirección será necesariamente a medio o largo plazo, pero es inaplazable comenzar a dar los primeros pasos.

Redefinir la representación pública

En el actual momento de desconcierto y descrédito del sistema político-administrativo, aparecen algunas propuestas que descartan tanto lo público como lo privado y apuestan por lo comunitario. No

comparten las tendencias privatizadoras, pero su confianza en lo público está tan mermada que tampoco consideran posible su recuperación. Desde mi particular punto de vista, el Gobierno Abierto todavía cree en lo público: es ciertamente imprescindible renovarlo en profundidad, pero es posible y necesario hacerlo. El Gobierno Abierto apuesta por una nueva forma de gobernar desde lo público, pero asumiendo que necesitamos gobierno e instituciones públicas.

También este último punto lo ilustraremos con dos ideas que deberían ayudar a entender mejor su significado:

En primer lugar, la idea de Gobierno Abierto requiere recuperar el valor de lo público. Se trata, efectivamente, de un concepto muy desacreditado pero sin el cual no hay justificación ni legitimación posible para el sistema político-administrativo. El valor público está asociado a una reivindicación de los intereses colectivos y del equilibrio entre los intereses de unos y otros, mientras que el individualismo dominante de las últimas décadas ha situado el acento en los intereses particulares y en una lógica meritocrática donde el ganador “se lo lleva todo”. El Gobierno Abierto nos exige profundas transformaciones en las formas de operar y también, por encima de cualquier otra cosa, una renovada convicción y compromiso con los valores públicos.

En segundo lugar, el ejercicio de la representación pública requiere hoy de un liderazgo intenso y renovado. El interés público reclama de políticos que lideren proyectos colectivos y que, por lo tanto, no se limiten a gestionar asaltos tácticos a posiciones de poder. Los responsables públicos no deberían hacer del ejercicio del poder un objetivo, sino un medio para articular su voluntad de transformación social. Al mismo tiempo, el liderazgo político debería ejercerse de manera abierta y relacional. El mejor líder no es el que lo sabe todo, lo cual es hoy por hoy un absurdo, sino el que escucha, articula y sintetiza saberes muy diversos. Un liderazgo que la literatura ha calificado como “distribuido” y que, en cualquier caso, requiere concentrarse más en lo que hemos denominado el soft power que en el hard power (NYE, 2004).

FINALMENTE

En este artículo hemos intentado articular ciertas reflexiones de fondo con algunas líneas de trabajo en el camino hacia lo que hemos denominado el Gobierno Abierto. Nos parece imprescindible combinar ambos niveles de discurso, pues se necesitan mutuamente. La reflexión de fondo sobre el qué y el porqué se convierte en retórica si no se conecta al cómo, mientras que centrarnos en el cómo a menudo se vuelve un ejercicio ritual cuando el qué y el porqué no orientan las actuaciones de manera consciente.

Necesitamos transformar el sistema político-administrativo, pero no porqué lo propongan ciertos académicos o porqué se impongan determinadas modas gerenciales. Lo necesitamos porque se trata de un sistema desbordado por la realidad y es a esta realidad a la que debemos responder con nuestras novedades y innovaciones.

El Gobierno Abierto es una etiqueta que no nos proporciona una receta mágica, pero sí un marco en el que diversas iniciativas pueden cobrar sentido. Un marco en el que disponemos de una columna vertebral: la regeneración democrática. Hoy necesitamos tanto recuperar la legitimidad como la inteligencia que aporta la democracia, de manera que nuestro sistema político-administrativo debe impregnarse de transparencia, de diálogos, de interacciones, de valores y de liderazgo. ♦

BIBLIOGRAFÍA

BOVENS, M. y HART, P.Y., 1998. Understanding policy fiascoes. New Brunswick: Transaction Press.

- BRUGUÉ, Q., 2009. "Una administración que habla es una administración que piensa" en AA.VV. Participación ciudadana para una administración deliberativa. Zaragoza: Gobierno de Aragón.
- BRUGUÉ, Q. 2012. *Es la Política, Idiotes*. Girona: Editorial Accent.
- CROSSMAN, R.H., 1986. *Biografía del Estado Moderno*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- FISHER, F. y FORESTER, J. (eds), 1993. *The argumentative turn in policy analysis and planning*. Durham: Duke University Press.
- HAJER, M. y WAGENNAR, H., 2003. *Deliberative policy analysis: understanding governance in the network society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HAY, C., 2007. *Why we hate politics*. London: Polity.
- MOSCA, G., 1984. *La clase política*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- NYE, J., 2004. *Soft Power. The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- SUBIRATS, J., 2011. *Otra sociedad ¿Otra política?* Barcelona: Icària.
- TODOROV, T., 2012. *Los enemigos íntimos de la democracia*. Madrid: Galaxia Gutenberg.
- VALLÈS, JM (ed)(2008). *Actituds Polítiques i Comportament Electoral a Catalunya: Material per a un Debat Social*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
- WAGENNAR, H., 2007. "Governance, complexity and democratic participation", *The American Review of Public Administration*, n° 37, pp. 17-50.
- WEBER, E.P. & KHADEMIAN, A.P., 2008. "Wicked problems, knowledge challenges and collaborative capacity builders in network settings", *Public Administration Review*. Volumen 68, issue 2, pp. 334-349.
- DEL PATERNALISMO FORDISTA A LA A SOCIEDAD DEL "HÁGASELO USTED MISMO": MODERNIDAD, ORTODOXIA POLÍTICA Y ESTADO DEL MALESTAR**

CAMBIO DE SIGLO, FALLO DEL SISTEMA. REINICIAR

JESÚS OLIVA SERRANO

1. INTRODUCCION.

El último cambio de siglo parece haberse configurado como antesala de una transformación global incierta pero radical. Son recurrentes tanto en la prensa como en la literatura científica las referencias a su semejanza con el paso del siglo XIX al XX. Aquellos “años de vértigo” que forjaron las revoluciones sociales, tecnológicas y económicas de la sociedad moderna constituyeron un torbellino de experiencias (Blom, 2007; Kern, 1997). Las vanguardias, los hallazgos científicos, los nuevos medios de comunicación y transporte,... irrumpieron como fuerzas modernas casi inmanejables para las estructuras institucionales tradicionales. Igual que nuestros políticos aprenden a usar las nuevas tecnologías tras enviar desafortunados “tweets” que revelan sus tendencias machistas, la diplomacia europea de entonces, atrapada en la instantaneidad telegráfica que hacía llegar las amenazas sin enfriar, fue incapaz de prevenir la Primera Guerra Mundial (Whitrow, 1990).

También hoy vivimos a caballo de revoluciones tecno-científicas, reestructuraciones económicas y cambios sociales apenas asimilables por los aparatos de la ya antigua primera modernidad. Si el reciente colapso financiero evidencia la incapacidad de las agencias internacionales para domeñar el nuevo capitalismo postglobal, tampoco los riesgos ecológicos planetarios o los avances que se desarrollan en los laboratorios parecen poder ser regulados por unos Estados nacionales que han sido sobrepasados por la propia modernización que en su día ayudaron a desplegar.

La sociedad del siglo XXI ha adquirido una complejidad cuantitativa y cualitativamente inesperada. No solo en lo más obvio (ahora habitamos el planeta más de siete mil millones de personas y, los mil millones alcanzados en las primeras décadas del XIX, que necesitaron un siglo para duplicarse, se han multiplicado a lo largo del XX en intervalos cada vez más cortos), el proceso de urbanización y las telecomunicaciones han creado un mundo interconectado y mas “pequeño” donde todo de mueve más fácilmente (turistas, mercancías, trabajadores, información, capitales, etc.) con un coste cada vez más reducido (Urry, 2007). La creciente compresión espacio-temporal (Harvey, 1989) y el nuevo espacio de los flujos (Castells, 1996) han subvertido las viejas relaciones entre lugares y muchas de las decisiones que nos afectan se toman hoy en otros sitios. Los avances tecnológicos (telefonía móvil, aplicaciones telemáticas, biotecnología, etc.) consiguen revolucionar nuestra vida cotidiana a cada momento y el poder global se ha diversificado (ya no es bipolar como en la guerra fría). Nuevos actores (agencias de calificación, think tanks, etc.) y poderes (emporios de comunicación, corporaciones de internet, etc) trufan unos escenarios políticos, económicos e informativos cada vez más transnacionalizados.

Pero la respuesta dada a la última crisis (que no es solo económica sino también social, política e ideológica), ha mostrado un fallo institucional transversal: incompetencia para anticiparla de los organismos internacionales especializados, de la democracia representativa para consultar a los ciudadanos decisiones trascendentales para su futuro, de los políticos y administraciones para rendir cuentas sobre políticas e inversiones nefastas, etc. Como resultado, la desautorización de partidos e

instituciones, especialmente en Europa y particularmente en España, bate cualquier récord conocido al mismo tiempo que asistimos a una progresiva politización ciudadana (multiplicación de manifestaciones, actos de protesta, asociaciones reivindicativas, etc.) (CIS, 2013; Toharia, 2013; El País, 15/01/2014). Para la mayoría de la población, la prolongada recesión económica ha puesto al descubierto una política completamente subyugada por el mercado. Y mientras Sarkozy pedía al comienzo de la misma “hacer un paréntesis” en el marco neoliberal para salvar a los bancos, los movimientos ciudadanos sugerían en la calle “reiniciar el sistema”. Los años venideros mostrarán si vivimos un cambio de ciclo en las formas que adopta la política, pero merece la pena reflexionar sobre estos procesos que sin duda tienen ya un impacto visible en la manera de entenderla y demandar otra forma de gobernanza. A ese objetivo se dedican las líneas que siguen, que no pretenden un análisis exhaustivo sino dinamizar el debate del Foro.

2. DEL PATERNALISMO FORDISTA AL CAPITALISMO DESORGANIZADO

Durante el penúltimo cambio de siglo, el potencial de las fuerzas desatadas por la modernidad (ideologías, nuevas fuentes de energía, fordismo,...) era de tal calado, que sus posibles combinaciones posibles albergaban tanto la prosperidad como la autodestrucción. Las metrópolis, las máquinas, la velocidad,... que tanto emocionaron a los europeos, favorecieron también que se masacrasen durante dos guerras mundiales como ninguna otra civilización lo había hecho hasta entonces (bombardeos de población civil en ciudades, campos de exterminio, guerra química...). Amenazas y oportunidades que anidaban igualmente en el interior de cada sociedad.

La narrativa sobre la necesidad de un pacto entre los dos grandes actores (y antagonistas) modernos que encarnaban al capital y al trabajo para evitar la destrucción (o la revolución) fue simbolizada magistralmente por Fritz Lang en *Metrópolis* (1927). María, hija de las masas obreras que sustentan una mastodóntica ciudad futurista con su penoso trabajo en el subsuelo, y que ejerce una gran influencia sobre ellas, visita con un grupo de niños al director (que habita en los niveles más elevados, entre despachos luminosos y azoteas ajardinadas) para pedir una mejora de sus condiciones de vida. El hijo del director queda entonces prendado de ella y descubre más tarde que un científico resentido ha sustituido a María por una réplica robótica exacta que inflama a las masas, llevándolas a destruir la ciudad. Todo se resuelve finalmente y la pareja de enamorados animan al acuerdo entre los trabajadores y el director, mientras su amor condensa alegóricamente el matrimonio por el que sobrevive *Metrópolis*.

La configuración de las sociedades de consumo de masas en Occidente no habría sido posible sin este pacto para universalizar el bienestar reforzado tras la postguerra mundial. El Estado del Bienestar jugó un papel esencial para la estabilización de las relaciones laborales, la reproducción de la fuerza de trabajo industrial y la creación de un mercado interior regulado sobre el consumo y los salarios. El New Deal norteamericano y la salida keynesiana de la crisis de 1929, acabarán relegitimando unas democracias capitalistas fuertemente cuestionadas tras el colapso financiero. Estas políticas permitirán transformar una crisis de sobreproducción en una economía de mercado que puede entonces generalizar el consumo de bienes cada vez más baratos (automóviles, equipamientos domésticos, etc.) y el acceso a servicios ofrecidos bajo un ideal de universalización de los mismos (Graham y Marvin, 2001). Un capitalismo organizado (Lash y Urry, 1984), sustentado por la hegemonía de la racionalidad científico-técnica y la concentración de relaciones capitalistas que se desenvuelve, en su combinación de fuerzas modernas, como una modernización fordista construida sobre marcos de regulación estatales, economías de escala y un fuerte peso del capital productivo (Harvey, 1989a).

En España, la primera oleada modernizadora parecía impulsada durante las primeras décadas del siglo por un capitalismo de estado (monarquía parlamentaria, dictadura de Primo de Rivera) y orientada sobre las infraestructuras (obras públicas, plan de firmes, electrificación rural,...). Sucumbe, entre otras cosas, con el colapso crediticio de 1929 y por su incapacidad para integrar al movimiento obrero. La modernización política y social será después el programa de la izquierda durante la II República (voto femenino, educación universal, reforma agraria, integración de los proyectos nacionalistas...). Sin embargo, el golpe de Estado y la guerra civil devolvieron el país a una miseria premoderna. Como apuntaba Aldous Huxley en su introducción a *They Still Draw Pictures*, la colección de dibujos de niños que recaban las agencias humanitarias internacionales durante la guerra, para muchos de ellos, su primer encuentro con el nuevo mundo moderno fueron los bombardeos de la Legión Cóndor.

La prolongada autarquía franquista durante la postguerra retrasó la aplicación de la receta para una modernización capitalista (Rostow, 1945) hasta la maduración de la guerra fría (pre-estabilización económica, liberalización del comercio exterior, planes de industrialización,...). Realizada entonces bajo la monitorización de Estados Unidos (transferencia tecnológica, créditos, inversiones, aval para integrar el país en los organismos internacionales...), preparaba la transición ordenada del Régimen sobre este lado del tablero geopolítico. En apenas unas décadas de desarrollismo, con todos sus costes sociales, políticos y medioambientales (éxodo migratorio, clases extractivas, desequilibrios territoriales, especulación urbanística, etc.), la economía española se configuraba ya como una incipiente sociedad de consumo donde afloraban sus propias clases medias. Pero la modernización económica (y los cambios sociales que desencadena) seguía sin aparejarse con una modernización política y la transición coincidirá con el principio del fin de una era sin haber madurado un Estado del Bienestar homologable a sus vecinos más prósperos.

El final de las dictaduras del Sur de Europa confluye con la afloración de un creciente malestar a uno y otro lado del muro de Berlín que anticipa el principio del ocaso del mundo bipolar. Las críticas post-estructuralistas (feminismo, antiautoritarismo, ecologismo, post-colonialismo, etc.), anuncian en el plano ideológico la erosión de unos modelos industriales (capitalistas y estatistas) que la crisis de mediados de los 70, los cambios sociales y los nuevos patrones de consumo certificarán poco después en lo económico (incremento del precio del petróleo, disfunción de las economías de escala, etc.). Si la crítica del autoritarismo desautorizaba las formas del poder tradicionales en todas las relaciones sociales (desde la escuela a la familia o las propias organizaciones políticas), el cuestionamiento de la racionalidad occidental expresaba la conciencia de que el modelo no era generalizable ni sostenible (Oliva, 2006). La última carrera de la guerra fría se jugaba en la década de los ochenta con una “guerra de las galaxias” que endeudaba sin precedentes a Estados Unidos y derumbaba un poder ampliamente deslegitimado al otro lado del muro.

Asistíamos ya entonces a la paulatina configuración de una suerte de capitalismo desorganizado (Lash y Urry, 1984) caracterizado por la internacionalización del capital y de la división del trabajo. Una reestructuración productiva dominada por la subcontratación, deslocalización y flexibilización del trabajo. O, como sugería Harvey (1989), una nueva posmodernidad flexible basada en economías de alcance donde el poder financiero predomina sobre el capitalismo productivo. Una segunda forma de modernidad ligera, en comparación con la modernidad pesada representada por el capitalismo fordista (Bauman, 2000a, 200b). “La modernidad pesada mantenía al capital y al trabajo en una jaula de la cual ninguno podía escapar. La modernidad ligera deja uno de los compañeros fuera (...) aquellos más elusivos, aquellos libres para moverse sin dejar rastro, dominan” (Bauman, 2000b). Una transformación que también aparece asociada con la experiencia de una versión más individualizada de la modernidad y la forma como la sociedad de consumo de masas nos había configurado progresivamente como espectadores de la dominación (Marcuse, 1954; Debord, 1967), animados a

expresar sus identidades individualizadas con los productos del mercado. Una evolución que contagiá finalmente los propios sentidos de la participación política (Curtis, 2002).

3. “ECHAR UNA MANO, NO DAR UNA LIMOSNA”. DEL BIENESTAR AL WORKFA- RISM

La crítica antiautoritaria no fue bien asimilada entonces por las aristocracias incrustadas en las organizaciones tradicionales de la izquierda. Y mientras los movimientos sociales críticos ocupaban los márgenes de la política institucional, un nuevo discurso neoliberal, que situaba al individuo en el centro de todos sus referentes, acabó enraizándose en aquella deslegitimación. Exhibido por un nuevo tipo de político popular (ex-ama de casa en el Reino Unido, ex-actor en los Estados Unidos), no apelaba a lo racional sino al contradictorio magma de deseos inconscientes y motivaciones profundas de las nuevas clases medias (Curtis, 2002). Una narrativa que había sido eficazmente elaborada ya por la industria del consumo y que ahora se dirigía como discurso político a unas clases emergentes que ya no querían ser tratadas como tales sino como individuos. Como soberanos imaginarios de un Estado que actuaría como su sirviente y no como su amo. Mientras el Laborismo británico perdía elección tras elección con su promesa de subir los impuestos para atender a las necesidades de los desfavorecidos, los Conservadores las ganaban prometiendo dismantelar un Estado del Bienestar abusivo y reduciendo sus tasas. Mientras la izquierda trataba de hacer pedagogía para crear una conciencia colectiva solidaria, el populismo neoliberal criticaba con éxito su paternalismo elitista.

En 1992 Clinton reorienta el discurso político de los Demócratas hacia ese nuevo patrón: “No voy a subir los impuestos a la clase media, necesita un descanso, ya ha pagado bastante” (Curtis, 2002) y su Personal Responsibility and Work Reconciliation Act de 1996, transforma la política del Bienestar en un workfare (work + welfare) donde la ayuda para el desempleo se convierte en una presión para trabajar. Ya no se trataba de dar una limosna o de repartirlo todo (to handout) sino de echar una mano (to handup). Una frase procedente del activismo social que será reinterpretada sucesivamente por Nixon, Clinton y también repetida por Blair en la campaña laborista que gana las elecciones de 1997. El individualismo de las clases medias decidía la ortodoxia política y el New Labour propugnaba ahora un Bienestar “para la gente que lo merece”. El compromiso de aquellos que habían prosperado para sostener a los rezagados se agrietaba, y los gobiernos que trataban de satisfacer todas aquellas motivaciones irracionales, quedaban atrapados en las contradicciones de una política imposible.

El dismantelamiento del Estado keynesiano y del bienestar, asumido como única política posible para una sociedad que dudaba de su propia existencia como tal, no permitió a los gobiernos socialdemócratas proteger el sistema con políticas fiscales y recurrieron al endeudamiento para mantener las conquistas sociales básicas. En España, los primeros gobiernos socialistas, que sientan las bases de un incipiente Estado social, lejos de los presupuestos keynesianos para combatir el desempleo y la pobreza, se convencen de que solo un capitalismo desregulado crea la riqueza que luego distribuirán, “ignorando lo más elemental, que el reparto viene ya implícito en el modo de producir” (Sotelo, 2013). Desde entonces, las distintas metodologías y filosofías derivadas del workfarism (desde el copago médico y farmacéutico al trabajo comunitario a cambio de la ayuda al desempleo) se han convertido durante el último cambio de siglo en todo un desafío al sistema del Bienestar existente (Peck, 1998). Sus políticas ya no buscan combatir la pobreza sino la “dependencia del welfare” (Peck, 2001) y los derechos sociales son ahora transformados en obligaciones y responsabilidades personales. Además, su aplicación durante la recesión económica se convierte de hecho en una política especialmente lesiva (presión para aceptar empleos basura, precarización de la salud de los más necesitados,...).

4. CRISIS Y MALESTAR SOCIAL EN LA SOCIEDAD DEL “DO-IT-YOURSELF”

Si el último cambio de siglo maduraba el paso del Bienestar al workfarism, la crisis nos adentra vertiginosamente en un preocupante estado del malestar. Por un lado, diferentes procesos confluyen en la tendencia hacia una continua retirada del Estado, que abre paso a una especie de sociedad del “hágaselo-usted-mismo” (ideología del individualismo, políticas de recortes, autoempleo como salida al colapso del mercado de trabajo, sustitución gradual de servicios presenciales por otros virtualizados en todos los campos gracias a las nuevas tecnologías, etc.). El discurso del presidente holandés en la inauguración del año parlamentario, ofrecía una imagen visionaria del modelo cuando anunciaba la necesidad de sustituir el Estado del Bienestar por una sociedad participativa donde cada cual asumiera, entre otras, sus propias cargas de atención a los enfermos crónicos.

Por otro lado, las actuaciones para salvar a la banca tras la crisis, repercutiendo sus costes como una hipoteca pública sobre la ciudadanía mediante recortes de servicios y ayudas, no tienen parangón con ningún antecedente conocido. Paradójicamente, también la continua erosión del welfare desde los ochenta fue acompañada de políticas para proteger grandes empresas o negocios considerados estratégicos (exenciones fiscales, ayudas directas, etc.) a veces dudosas y que fueron consideradas como un verdadero corporate welfare (Whitfield, 2001). Ningún país de la Unión Europea ha podido evitar inyectar dinero público en su sistema financiero en un contexto donde el Estado-Nación, que en su día pilotaba la cabina principal de la modernización, quedaba atrapado por las decisiones de las agencias de calificación, las políticas monetarias, las corporaciones, etc.

La crisis parece confirmar que los protagonistas de la globalización capitalista (FMI, OMC, Banco Mundial,...) no consiguen manejar bien su impacto, ritmos y consecuencias sociales. Cuando Estados Unidos abandona el patrón oro en 1973, explica Harvey (1989), el dinero se desmaterializa, pierde sus referentes en metales preciosos, mercancías o la actividad productiva de un país en exclusiva. Desde entonces el capitalismo sufre un problema crónico de sobreacumulación (Harvey, 2010) y, como anticipaba Marx, lejos de resolver sus crisis simplemente las desplaza, llevando las burbujas financieras a Latinoamérica (en los 80), el sureste asiático (en los 90), etc. Una volatilidad que Varoufakis (2012) analiza como una estrategia para preservar la hegemonía de Wall Street.

Pero también la democracia representativa aparecía desbordada en esta crisis por los ritmos de unos procesos propios de una “high-speed society” (Rosa, 2008) que no podía esperar el tiempo requerido por sus deliberaciones. Como apuntaba Tarso Genro (El País, 11/08/2013), antiguo alcalde de Porto Alegre, ha sido superada por la modernidad y no se trata solo de una desafección por la política sino de una generalización de la conciencia de la inutilidad de la misma. Y como las crisis capitalistas, las formas de la ortodoxia política también acumulan la erosión de los cambios sociales que no asimilan y se descubre periódicamente en una encrucijada. Por ejemplo, tras la pérdida de casi un millón de votos por los Verdes alemanes en las últimas elecciones, uno de sus líderes reconocía el nefasto efecto de su propuesta para implantar un día vegetariano en todos los comedores públicos, que fue interpretada como una imposición frente a las libertades individuales.

Como resultado, los nuevos movimientos ciudadanos vuelven a surgir en los márgenes de la política institucional y el malestar social frente al pobre papel que ofrece como solución la política oficial, se nos muestra todos los días. Si *The Economist* consideraba las movilizaciones ciudadanas, en su portada de marzo de 2013, como un hito histórico comparable al 68 y al 89, los episodios de protestas que inesperadamente mutaban en episodios críticos para los gobiernos, se repetían a lo largo de todo el año. La oposición a un proyecto urbanístico en Estambul, se transformaba en una contestación general a Erdogan; la subida del transporte público en Río, se propagaba como una contestación al gobierno federal brasileño; y el modelo nórdico de integración, estallaba en la periferia de Estocolmo

tras un incidente policial (como ya ocurrió en Londres en 2010 y periódicamente en la banlieu parisina). Y los mismos patrones se repetían en otras geografías más próximas de protestas (como Burgos o Melilla) que inauguraban 2014. Un año que la revista mencionada considera de alto riesgo de estallido social para Grecia, Portugal, Bulgaria y España.

Con sus propias particularidades, estos desenlaces ilustran un nuevo malestar social alimentado por la desigualdad que se condensa en las aglomeraciones metropolitanas, el descontento de unas clases medias jóvenes más activas e informadas que nunca y la olímpica ignorancia de la gobernanza de la que hace gala la ortodoxia política institucional. Pero estos episodios permiten vislumbrar también las aguas profundas de unas tendencias que parecen caracterizar ya nuestra época, y sobre las cuales hay cada vez un mayor consenso acerca de su impacto sobre la naturaleza del poder y la política. Algunas, no todas ni las más determinantes, son resumidas por Naím (2013) en su análisis sobre un poder que considera cada vez más difícil de obtener y de usar (debido a las restricciones que encuentra en los mercados financieros, la mayor conciencia política, el escrutinio permanente de los medios...), pero más fácil de perder y por cuyos errores se paga un precio más inmediato. Por un lado, ha crecido una clase media mundial más impaciente y con más aspiraciones. Por otro lado, cada vez más personas disfrutan de un mejor nivel de vida y se mueven más que nunca alterando el peso de las relaciones de poder territoriales. Finalmente, toda esta población que consume y se mueve más que nunca, es más consciente de la importancia de las libertades individuales y más intolerante con el totalitarismo. Para Naím estas tendencias ofrecen más oportunidades pero también degradan el ejercicio del poder (los Estados reaccionan con lentitud, proliferan los Estados fallidos, etc.).

5. A MODO DE DISCUSIÓN: ALGUNAS BATALLAS DE LA POLÍTICA QUE VIENE

Las batallas sobre la política que viene se desenvuelven hoy en múltiples campos. Las demandas de regeneración democrática no están solo en la calle sino en las propias organizaciones de los partidos políticos (listas abiertas, primarias, etc.). A modo de discusión para el debate, podemos seleccionar algunas que sin duda serán decisivas, tanto por las posibilidades que ofrecen para abrir nuevas formas de gobernanza, como por los peligros que aguardan en su evolución alternativa como cierres en falso.

— Redes sociales asimétricas frente a la “democracia de las emociones”. Apuntaba Virilio (2006) que en las sociedades tecnológicas de finales del siglo XX asistíamos a las formas de una nueva cronopolítica. Una evolución paralela a la disminución del Estado, la privatización y desregulación pero determinada por la forma como los avances tecnológicos transformaban las estructuras espaciales y temporales de la política. Bajo la tiranía del tiempo real de la inmediatez comunicativa (telepresencia, tele-espectáculo, etc.) la democracia deliberativa desaparecía convertida en una nueva democracia de la emoción ordenada por la sincronización que procuraba la industrialización de la visión. En ella ya no es posible la reflexión, solo reacciones reflejas y automatismos tanto en los receptores como en los hacedores de la política. Sartori (2003) también apuntaba algunas ideas complementarias en su análisis de la videopolítica y el papel que juega la democracia de los sondeos.

Frente a estos procesos, las redes sociales surgidas al amparo de las nuevas aplicaciones de internet durante la primera década del siglo, se configuran en muchas ocasiones como verdaderos espacios deliberativos que recuperan la reflexión política y exhiben capacidades organizativas excepcionales. Su actividad establece una asimetría que antepone otras formas de sincronización frente a la omnipresencia telemática de los media tradicionales (tan a menudo trufados con ciertos poderes políticos, como Murdoch o Berlusconi). Un numeroso cada vez más numeroso de ciudadanos (especialmente

las nuevas cohortes de nativos digitales) se in-forman a través de estas fuentes e incluso realizar un control de la política formal a través de las mismas.

— Redistribución como prosperidad frente a la desigualdad. Uno de los problemas más evidentes para una recuperación sostenida de la crisis en las economías avanzadas es la desigualdad social desatada durante las décadas precedentes. Como apunta Bauman (2014) estos días, la felicidad y el bienestar no dependen solo del crecimiento sino también de la distribución de la riqueza. La renta concentrada en un reducido segmento social impide el crecimiento del conjunto. Muy lejos de las metáforas liberales de la autoregulación del mercado, como la mano invisible de Smith o del panal ramosoro de Mandeville, la redistribución fue ha sido uno de los pilares de la prosperidad alcanzada a lo largo del siglo XX y de la modernización. Si los debates para reintegrar el salario mínimo en países como en Estados Unidos, Alemania o Reino Unido apuntan a esta solución, el declive de ciudades emblemáticas como Detroit o más recientemente Los Angeles, nos ofrecen ejemplos de los efectos causados por el abandono de los sistemas de protección, la desinversión y privatización de servicios públicos o los mecanismos de cierre social derivados de ellos.

— Transparencia colaborativa (open data) frente al control social (big data). La tendencia hacia la transparencia y la publicación de datos por las administraciones públicas, pero también hacia la posibilidad de recabar información en tiempo real de forma colaborativa con los ciudadanos (por ejemplo, para una gestión inteligente de la movilidad o la realización de diagnósticos participativos) ofrece un notable potencial de regeneración democrática y legitimación social. Cualquier ciudadano equipado con la tecnología al uso (tablets, smartphones, etc.) puede convertirse en un analizador y gestor, en tiempo real, de cuestiones de la política cotidiana. Pero también es un productor continuo de información personal que ofrece una minería de datos para la industria del consumo y el control social (big data). Las tensiones que se abren en torno a los usos y regulación de esta información afectan a todos los ámbitos de la política y determinarán la calidad de la misma. Por ejemplo, las garantías de protección del anonimato de la ciudadanía frente a la publicación de la información relativa a las personalidades públicas (ingresos, patrimonio, etc.). Paradójicamente, algunos de los países que encabezaron la transparencia informativa (publicando las deliberaciones del gobierno en inglés, o las donaciones de lobbies y los visitantes a la Casa Blanca), aparecían relacionados con las prácticas de espionaje masivo y fueron también los más afectados por los sucesivos wikileaks. La realidad política ha sido radicalmente transformada por esta nueva capacidad que encierran las tecnologías de producción, almacenamiento y transmisión de información. Pero sin duda, el acceso a la información que permitan a los ciudadanos evaluar el éxito o fracaso de las políticas públicas (listas de espera en hospitales, ratios de contaminación urbana, etc.) o el compromiso ético de sus representantes es una acción ya imprescindible. ♦

BIBLIOGRAFIA

- Bauman, Z. (2000a): “Time and space reunited”, en *Time & Society*, 9(2/3): 171-185 (2000b): *Liquid Modernity*. Cambridge, Blackwellba (2014): *¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?* Barcelona, Paidós-
- Berman, M. (1988): *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. México, Siglo XXI
- Blom, Ph. (2010): *Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914*. Barcelona, Anagrama
- Castells, M. (1996): *La era de la información. Vol. I. La sociedad red*. Madrid, Alianza
- Curtis, A. (2002): *The Century of the Self*. BBC. 4 documentales
- Debord, G. (1967), *La sociedad del espectáculo*, Madrid, Castellet

- Graham, S. y Marvin, S. (2001): *Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and Urban Condition*. Routledge, Londres
- Harvey, D. (1989a): *The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change*. Oxford, UK. Basil Blackwell. (2010): *The Enigma of Capital. And the Crises of Capitalism*. Profile Book, Londres.
- Kern, S. (1983): *The Culture of Time and Space, 1880-1918*. Cambridge, Mass. Harvard University Press
- Lash, S. y Urry, J. (1984): *The End of Organized Capitalism*. Cambridge, Polity Press
- Marcuse, H. (1954): *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. Barcelona, Seix Barral, 1972
- Naim, M. (2013): *El fin del poder*. Madrid, Debate
- Oliva, J. (2006): “Power”, en Fitzpatrick, T. (ed.), *International Encyclopedia of Social Policy*, vol.II. Routledge, Londres, 1063-1065.
- Peck, J. (1998): “Workfare: a geopolitical etymology”, en *Environment and Planning D: Society and Space*, 16: 133-161 (2001): *Workfare States*. Nueva York, Guilford Press
- Rostow, W. (1960): *The stages of economic growth: A non-comunist manifesto*. Cambridge, Cambridge University Press
- Rosa, H. (2008): “Social acceleration: ethical and political consequences of a desynchronized high-speed society”, en H. Rosa and W.E. Scheverman, *High-speed Society. Social Acceleration, Power and Modernity*. Pennsylvania State University Press.
- Sartori, G. (2003): *Videopolítica. Medios de información y democracia de sondeo*. México, FCE
- Sotelo, I. (2013): “A qué llamamos franquismo”, *El País*, 30/11/2013.
- Urry, J. (2007): *Mobilities*. Cambridge, Polity Press
- Vaurofakis, Y. (2012): *El Minotauro global*. Madrid, Capital Swing
- Whitfield, D. (2001): *Public services or corporate welfare: Rethinking the nation state in the global economy*. Sterling, Pluto Press
- Whitrow, G.J. (1990): *El tiempo en la historia*. Barcelona, Crítica
- Virilio, P. (2006): *Ciudad pánico. El afuera comienza aquí*. Buenos Aires, Libros del Zorzal

GOBIERNO ABIERTO. LA ÚNICA SALIDA POLÍTICA

GUZMÁN GARMENDIA

La forma actual de relación entre la administración y los ciudadanos ha caducado. Es así de simple y debemos considerar como amortizada la hasta ahora opción ‘menos mala’ que arrastramos desde finales del siglo XVIII.

Desde la Declaración de Virginia, adoptada el 12 de junio de 1776, que podemos considerar como la primera Declaración de Derechos Humanos, y, por supuesto, desde la más cercana ‘Toma de la Bastilla’, fechada el 14 de julio de 1789, símbolo de la Revolución Francesa, mantenemos una relación entre la ciudadanía y el Estado que, en el mejor de los casos, tiene su clímax cada cuatro años en forma de elecciones. Después de esta mal llamada ‘Fiesta de la Democracia’, se supone que los elegidos deben regir el destino de millones de ciudadanos con un programa que, en muchas ocasiones, ni tan siquiera cumplen. Este escrito de ideas e intenciones de los partidos, poco consensuado, menos reflexionado y nada leído, con el paso de los años va acortando su fecha de caducidad, o lo que es lo mismo, en el siglo XXI, con las nuevas formas de participación y comunicación, los programas electorales dejan de tener actualidad y vigencia a los pocos meses de su aprobación, y lo que es peor, empezarán a ser días en lugar de meses a medida que las TIC impregnen la realidad social, como ya se está viendo en la calle y, por supuesto, en la esfera virtual.

La evolución tecnológica no se puede separar de la realidad democrática en la que vivimos. Los ciudadanos ya participan activamente en las decisiones de empresas, y así se lo hacen saber directamente, se comunican con ellas y también se comunican entre ellos. Están cambiando las relaciones, se está eliminando la lejanía física y están dejando de tener sentido infinidad de ideas, posturas, filosofías y, cómo no, objetos, como las cabinas, e incluso las imprentas, que también fueron perseguidas y demonizadas a finales del siglo XV.

La inmediatez está ahí, y la consecuente impaciencia ante la falta de respuesta también. Estas personas, ricas, pobres, trabajadoras, estudiantes, paradas o empresarias, ya han adoptado en su vida las nuevas tecnologías. Tal vez alguna capa de edad todavía no, y sigue situando su vida y horarios bajo la estricta batuta de la unidireccionalidad, cenando a la hora del informativo de televisión o leyendo diarios al mismo ritmo que engullen el café con leche. Sin embargo, la mayor parte de la población, y cada vez más, necesita estar alimentada de realidades, ya no se deja engañar y, lo más importante, quiere ser parte de esa realidad, transformarla, construirla y participar. Su única herramienta, pero por multitudinaria, poderosa, son las TIC. Es su lugar de encuentro, su espacio de decisión y, si me lo permitís, su pequeño Parlamento en el que deciden las cosas y marcan las tendencias. Por otra parte, nuestros representantes e instituciones, así como los sindicatos, están a años luz de adoptar la frescura, transparencia e inmediatez que podría aportarles su inmersión, total y sin medias tintas, en la realidad tecnología que inunda la calle. Es cuestión de voluntad, actitud y querer hacer las cosas. Todos ellos, políticos y sindicalistas, representan a gente, y éstos están en las tecnología.

Políticos, partidos, instituciones, sindicatos y administraciones públicas siempre se han situado

lejos de las opciones tecnológicas que han ido adoptando los ciudadanos. Este decalaje se ha mantenido en un honroso paralelismo aceptable, siempre mirando hacia arriba, desde la parte pública, los avances TIC que se iban produciendo en particulares y empresas. Desde más o menos 2008, esta separación, insisto, decalaje, entre la evolución tecnológica de la realidad de la calle y los que se suponen representan a los primeros se ha disparado, y está posicionándose en distancias cercanas al ridículo, situación sonrojante que se dará muy a corto plazo si no se toman medidas y los elegidos se involucran en la conversación digital, directa, sincera, transparente y colaborativa. O lo que es lo mismo, se verán fuera del juego de la nueva democracia si no adoptan los principios de Gobierno Abierto, que como hemos dejado claro, no se puede separar, ni un ápice, de los avances en materia de Nuevas tecnologías.

Algunos sitúan el nacimiento del ‘Gobierno Abierto’ moderno en el mismo día en el que Barack Obama promulgo su ‘Memorandum de Transparencia y Gobierno Abierto’, concretamente el 21 de enero de 2009, una fecha muy importante, de la que debemos extraer sus más inmediatos catalizadores. Es cierto que se habla de este fenómeno, incluso sin saberlo, desde hace décadas, pero por no perdernos en fecha y épocas ya pasadas, centremos esta necesidad ciudadana a finales de la primera década del siglo en el que estamos.

2008, en mi opinión, representa el año del definitivo distanciamiento de la sociedad y los políticos, enorme brecha que, lejos de acortarse, aumenta. Dos factores claves fortalecen este despegue que sitúa, a la poco definida ‘clase política’, en el espacio del ridículo tecnológico. La irrupción y la popularización de las redes sociales por una parte, con un microblogging incipiente, empezaba a demostrar su poderío, a lo que se suma, como factor incluso más determinante, la evolución de los dispositivos móviles en forma de auténticos centros de control, coordinación y comunicación en los bolsillos de cada vez más ciudadanos, conformando una bomba democrática que ha derivado en el abismo político que nos frustra hoy. Por lo tanto, espacios de comunicación masivos, implementados en dispositivos móviles inteligentes, han dado pie a una clase social que no diferencia entre cuentas corrientes, status, filiación, género, raza o procedencia, pero que pone, y de qué manera, en contacto ideas, propuestas, acciones y discusiones, todo ello aderezado con la inmediatez, dirigiéndose a unos interlocutores que no están presentes en esos espacios, pudiendo estarlo.

Gobierno Abierto no se puede entender sin tener en cuenta el factor tecnológico, básico y fundamental en la evolución política hoy, y espita para lo que, a muy corto plazo, marcará el pulso político de los países de nuestro entorno, que fijaron las reglas del juego en función a lo adquirido a finales del siglo XVIII. Ya no hay excusa. Solo hace falta voluntad para configurar un nuevo status quo entre ciudadanos y representantes de la sociedad –políticos, administradores, sindicatos y tantos otros-, que deberían ser lo mismo, ya que se les supone nuestros representantes. Esa nueva forma de convivencia se llama Gobierno Abierto. Las herramientas para su desarrollo son básicamente tecnológicas, pero inexorablemente deberán ir siempre acompañadas de espacios presenciales que den continuidad al debate digital, solo así aseguraremos la mayor de las transparencias, la máxima colaboración y la participación de todos, o al menos trasladaremos la realidad de que quien quiera puede participar y cambiar las cosas.

Una vez concretado y aceptado que el Gobierno Abierto es la única salida política, y, además, que el lugar de encuentro entre ciudadanía y representantes debe ser el espacio TIC en cualquiera de sus soportes como ampliación del encuentro presencial, tenemos la enorme oportunidad de hacer las cosas con la lógica de quien realmente se cree los principios de la transparencia, la colaboración y la participación. Será difícil que se transmitan estas intenciones marcando las pautas, desde un principio, sobre la comodidad de un despacho oficial, una sala de reuniones de caoba o un exclusivo club de trajes y corbatas. Lanzar propuestas desde arriba nunca fue una gran idea, y no serán acep-

tadas, es hora de preguntar y construir desde abajo, colocando entre todos el primer ladrillo y, si se diera el caso, dejemos el último ladrillo para quienes fueron elegidos democráticamente, pero solo el último.

Salir a la calle, montar foros de debate e iniciar una conversación real con la ciudadanía que tenga su continuidad en espacios digitales, se me antoja como un primer paso, que no el único y, por supuesto, nunca el definitivo. Los legítimos representantes del pueblo y de los trabajadores tienen la obligación de estar ahí donde está el pueblo, la gente, los ciudadanos y, en definitiva, aquellos que les eligieron, con independencia del soporte. Por lo tanto, es imprescindible que estén en la calle, conversando, sintiendo, convocando foros, pero bien es cierto que las personas, y cada vez más, donde están presentes es en el entorno digital, que debe ser el apéndice que se construya con los datos del termómetro de la calle. Si me lo permitís, y mencionando a una vieja red social ya venida a menos, lo que quiero decir es que los ciudadanos tienen una second life, que cada vez es más la first life. No hay mejor definición de red social que ‘plaza del pueblo’, en el que se intercambia información, se conversa, se decide y, como en las mejores familias, se discute. De todas formas, no nos quedemos en la red social, el mundo cambia y el escenario con él, de esta forma, los potenciales votantes se sitúan en nuevos soportes, que son la evolución de las redes sociales, como éstas lo fueron de los chats y los foros. Las nuevas plazas del pueblo son todos los sistemas adaptados y pensados para la movilidad, como las mismas redes sociales, pero adaptadas a móviles, así como los sistemas de mensajería, los espacios de georreferenciación y, sobre todo, los que vengan. La denostada ‘clase política’ debe permanecer atenta a las novedades, juega en desventaja, ya que a la ciudadanía no le hace falta, adquiere estos hábitos de forma natural, son, en definitiva, los ‘early adopters’.

La conversación, que demandábamos en el párrafo anterior, debe ser legible, entendible. Ya no vale dirigirse a la población o a los trabajadores con el lenguaje de finales del XIX, nos debemos adaptar. Estamos rozando el ridículo cuando seguimos anclados en unos términos, tanto cuándo nos dirigimos a la población como a los trabajadores, con unas interpelaciones vacías, huecas, antiguas y sonrojantes. Gobierno Abierto también es actualizarse, y hablar normal, natural, como todos, no como unos pocos de tiempos pasados.

Preparando el terreno de juego en el que se desarrollará el partido de la comunicación, en la interacción y la construcción conjunta de la sociedad día a día, tenemos que tener más que presente que la posición predominante no está precisamente en la ciudadanía, comenzamos, por tanto, el partido con el marcador en clara ventaja de los que, efectivamente, decimos que ostentan el poder, cuando en realidad deberíamos decir que son a los que, temporalmente, hemos cedido la vara de mando. Para poder establecer un diálogo directo y de ‘tú a tú’, es necesario que ambas partes, representados y representantes, cuenten con las mismas herramientas y partan desde el mismo punto. Información es poder, Gobierno Abierto es repartir la información y, en consecuencia, es dividir el poder. Esta es la clave del obsoleto freno en la apertura de un gobierno a día de hoy, ya sea municipal, regional, nacional o sindical. Es obvio que nadie de los que están ahora en el papel de representantes quieren diluir su poder y su estatus entre los que les han situado ahí. Puede parecer una antítesis, y lo es, pero aquellos que han sido elegidos por mí no quieren devolverme el poder de la acción, que se basa en el conocimiento, es decir, en la información. Gran error de apreciación y, a buen seguro, actitud caduca que les catapultará, tarde o temprano, al más triste de los olvidos.

Puede ser que hace años, tan solo una década atrás, esto de ‘repartir el poder’ pudiera ser una tarea complicada. Los medios de comunicación tradicionales eran prácticamente la única fuente de información, de hecho eran conocidos como el cuarto poder. A día de hoy, ya bien entrada la segunda década del siglo XXI, no solo ha cambiado el espacio en el que se informan los ciudadanos, ante todo estamos ante una forma de compartir información, en la que ésta se construye entre todos y cualquiera

puede ser fuente. Fundamentalmente estamos hablando del camino que se ha recorrido entre la vieja unidireccionalidad de los soportes de información a la bidireccional exigida en los nuevos soportes y espacios de comunicación e información, una vez más, basadas en las nuevas tecnologías.

Periódicos, revistas, televisión y radio son emisores, la audiencia es receptora. Salvo excepciones extremadamente filtradas, como son las cartas al director, las llamadas en directo o los ya viejos SMS, todos estos medios tradicionales han actuado emitiendo en una sola dirección. Al otro lado, el manipulable espectador consumía, nunca mejor dicho, aquello que se le decía, sin digestión alguna ni posibilidad de rebatir lo que leía, escuchaba o veía. Hoy, la diferencia entre receptor y emisor se está acortando. Muchas veces no sabes quién se dirige a quién, y es ahí donde nace la conversación, se genera la bidireccionalidad, y cualquier persona, con elementos tecnológicos a su alcance, puede ser fuente de información o consumidor, pero en cualquier caso, siempre tiene la posibilidad de participar o estar en el papel que considere, se gane o, en actitud sobresaliente, sea señalado por el resto de la masa colaboradora y participativa.

Los gobiernos, a los que se suman los sindicatos, como decíamos antes, muy dados a anclarse en el pasado, no han entendido la llegada de la bidireccionalidad y la caída, en algunos casos estrepitosa, de los medios de comunicación. Consideran, erróneamente, que la portada de los diarios en papel son los que marcan tendencia, y sí, podría ser en algunos casos, pero cada vez menos. Esto mismo, sumado a los titulares de informativos de las televisiones y las radios, sustentadas por el mismo sistema que maneja los hilos y las dosis informativas, son el inválido autotest de la actualidad y bienestar para los representantes públicos, y esto hace, de momento, que ante la ceguera de muchos sea difícil que se den las condiciones de fomentar el Gobierno Abierto en casi todas las instituciones. El papel de los medios de comunicación tradicionales, que hasta ahora denunciaban e indicaban el camino de los gobernantes, está siendo sustituido por una gran masa de ciudadanos que realmente marcan el camino, y están obligando a que sean escuchados. Punto, éste último, obviado por los elegidos y que entienden los electores, ya que entre ellos si que ven, con claridad, la tendencia asumida e impulsada por ellos mismos. Entre los ciudadanos no hay opacidad, tampoco se entiende el egoísmo y nunca se aceptará el individualismo, es por ello que Transparencia, Colaboración y Participación marcan el camino de la ciudadanía, es decir, el Gobierno Abierto existe, pero quien lo tiene que adoptar no se entera, o mejor, no se quiere dar por enterado.

Adentrados en una época en la que no existe disculpa alguna para igualar el ‘establishment’ global entre los habitantes de un país –incluyo, como no, a políticos-, afrontamos un profundo cambio en la relación entre la ciudadanía y la administración. Va a resultar doloroso, muy doloroso, pero solo para el decimal último del porcentaje de la población, es decir, para los que ahora se asientan cómodamente en lo que ellos creen que es un escalón más. Es cierto que generalizar es siempre errar, pero en este caso creo que estaríamos hablando de excepciones y podemos, mientras no se demuestre lo contrario, afirmar que son daños colaterales situados en el peor sitio y en el peor momento.

En una sociedad moderna solo cabe el ‘Gobierno Abierto’ como nueva forma de avanzar. No me preocupa, en absoluto, que los gobiernos se cierren en la implementación de este modelo de convivencia tan demandado, día a día, por la práctica totalidad de los ciudadanos. Sí, por la práctica totalidad de los ciudadanos, que, casi siempre sin saberlo, lo están pidiendo a gritos en sus conversaciones privadas, reflexiones, demandas y, por supuesto, en afirmaciones públicas, exigencias y, cómo no, manifestaciones. No me preocupa si se adopta o no, ya que la propia inercia del tiempo en el que nos movemos hará que la transparencia, la colaboración y la participación sea la forma natural de lo que para entonces no será gobernar, será gobernanza, será, sin duda Gobierno Abierto. La posible no adaptación de algunos malos representantes de la ciudadanía a los tiempos de conversación continua y construcción social conjunta, llevará, inevitablemente, a la desaparición natural de éstos. No será

nada traumático, simplemente sucederá, de la misma forma que otras figuras han dejado de poblar los paisajes de nuestros pueblos y ciudades por la propia evolución y, una vez más, por la llegada de la tecnología.

No hace falta sacar la bola de cristal, o remitirse a películas que en su día se adelantaron al tiempo como 'Regreso al Futuro' para entender cómo funciona un 'Gobierno Abierto'. Como dije al principio, este modelo ya está funcionando entre la ciudadanía y las empresas, entre ellos, existe la conversación, la crítica, la ayuda y la colaboración, sucede las 24 horas del día y dentro la más absoluta transparencia y franqueza. Los gobiernos, es decir, los que deberían ejercer la 'gobernanza', que no 'gobernar', tienen la obligación de escuchar a la ciudadanía de forma continua. Para ello, deben abrir absolutamente su espacio vital, aportar todos los datos que sean demandados y, en definitiva, ser absolutamente transparentes. Sin esta primera premisa, vital en el manual de un buen 'Gobierno Abierto', no podemos continuar. En ese momento estamos en España, en el momento del oscurantismo injustificado que empieza a desmoronarse. Mientras esperamos a que el absoluto colapso suceda, los intentos de hoy no dejan de ser meras acciones de marketing más o menos logradas. Establezcamos un campo de juego neutral con los mismos datos y herramientas en cada lado, impensable seguir con las siguientes premisas, y entonces, hablemos.

Pronto, muy pronto, y de forma natural, la transparencia formará parte de nuestras vidas en la relación con los que elegimos. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, podremos participar en la elaboración de proyectos y en decidir nuestra forma de vida, actuaciones, políticas y decisiones trascendentes e intrascendentes, que de todo habrá. Finalmente, la colaboración, en cualquier materia en la que entendamos que podemos aportar, será bienvenida por los que a día hoy consideran que están por encima de sus propios representados, opinando sobre temas en los que, a buen seguro, tiene mucho más criterio el ciudadano especialista que lleva años tratando el tema pero que hoy no es preguntado. Sintiendo que participe del proyecto aportará como el que más, y siendo por su país, lo hará de forma orgullosa y altruista.

Afortunadamente se está dando 'la tormenta perfecta' del 'Gobierno Abierto'. La situación de fuerte demanda en la calle, inexorablemente unida al distanciamiento insoportable entre políticos y pueblo, sumado a la irrupción brutal de las Tecnologías de la Información en forma de redes sociales y teléfonos inteligentes, están sirviendo de catalizador para que, más pronto que tarde, comience la verdadera conversación y se inaugure una nueva era en la que los ciudadanos se sientan partícipes y estén dispuestos a aportar en la construcción del futuro de su país, todo ello en un escenario, todavía por construir, de absoluta transparencia. No va a ser fácil. Más difícil, para algunos, será prolongar el modelo actual. ♦

LO PÚBLICO, LO COOPERATIVO Y LO PROFESIONAL CON ANIMO DE LUCRO TASADO: UN DIÁLOGO CLAVE PARA LA IZQUIERDA POSTAUSTERICIDIO

JAVIER BURÓN CUADRADO

En los últimos años, como consecuencia de los recortes impuestos por el FMI y la UE, se habla mucho de privatizaciones. En los últimos meses, como consecuencia de huelgas en servicios públicos profundamente dañados por las condiciones de algunas nuevas licitaciones públicas, se habla aún más de tema.

El discurso político dominante establece que privado es más barato y eficiente; y público, lo contrario. La evidencia científica apunta a que hay formas de gestión públicas y privadas eficientes e ineficientes, estando más la clave en el liderazgo y la motivación del personal que en la forma jurídica. A muchos les sorprende, pero, además, en ciertos servicios públicos lo privado es caro/baja calidad y lo público barato/de calidad. Los medios hacen referencia a estos ejemplos de gestión pública virtuosa en términos de «noticia», cuando no debería serlo.

Es más, la situación actual de muchos de nuestros vecinos de la UE apunta más a procesos de república de ámbitos esenciales de la economía y la sociedad (sanidad y transportes en el Reino Unido, agua en Alemania, etc) que a la privatización. Algunos (por cierto, los más listos de la clase) vuelven de las privatizaciones, cuando nosotros aún estamos yendo. E incluso se debe tener en cuenta que muchos estados claves de la UE (con Alemania y Francia a la cabeza) nunca han privatizado de forma completa servicios esenciales para la comunidad como la energía, los transportes, el agua, la banca o la vivienda (además de la sanidad y la educación).

Sea como fuere y sin ánimo de ser exhaustivos, sería conveniente aclarar terminológicamente un poco el debate. Ciertos sectores sociales y políticos llaman privatización a procesos que no lo son y ciertas prácticas de las Administraciones nadie las considera privatizadoras aunque puede que lo sean.

Empezando por una disección analítica. Si la propiedad es pública (lo que implica asunción de riesgo); si el control estratégico es público (lo cual significa determinar el que, para quien, como, cuando, etc); si la ciudadanía accede a los beneficios de ese proyecto en función de su estatus ciudadano (y no de su renta) y si los beneficios/pérdidas que se puedan producir son públicos (partiendo siempre del principio máximo rendimiento con el mínimo coste); estamos ante un proyecto público y no privado. La clave de bóveda del sistema es el servicio al público (por eso les llamamos servicios públicos, porque son para atender al público) y la segunda derivada es el control público estratégico (lo que implica poner a disposición de la ciudadanía una cartera de servicios a los que se accede no en función de la renta, así como disfrutar de los beneficios económicos de los proyectos públicos que son rentables y asumir las pérdidas monetarias de los servicios públicos que son deficitarios).

Como se verá, en esta definición de público no aparece para nada el estatus jurídico de los empleados al servicio de las Administraciones Públicas. Pues bien, la mayor parte de la gente entiende que un ser-

vicio público está o no privatizado en función de si lo atienden empleados públicos o si lo atiende otro tipo de personal. Desde mi punto de vista, esto es un error. Es más, algunos sectores sociales y políticos entienden que siempre que haya empleados/profesionales privados o empresas privadas trabajando para la Administración el servicio ya se ha privatizado. Entiendo que no se puede deformar de esa manera la recta visión de lo público.

La clave de los servicios públicos es el servicio al público, siempre y cuando se garantice que quien trabaja para la administración no tienen ánimo de lucro o el mismo está tasado y solo atiende la razonable retribución del trabajo, financiación y gerencia, siendo el excedente siempre público.

De todo lo anterior se deduce que no se puede llamar privatización a procesos que son, en sentido estricto, «desfuncionarización» y/o profesionalización. No es privado, sino público el siguiente escenario: una empresa pública, de capital 100% público, con una agenda estratégica pública y un férreo control por parte de la Administración sobre que se hace, para quien se hace y como se hace, pero sin personal público (o prácticamente sin él), gestionada por una empresa que (previa licitación) provee (temporal y reversiblemente) de personal, gerencia y financiación, que cobra en función de objetivos (máximo rendimiento público con el mínimo coste público) con el fin de retribuir dignamente a los factores productivos y que, en el caso de haberlos, los beneficios (excedentes, plusvalías, etc) se los entrega a la matriz pública. Para muchos, al no haber empleados públicos esto es un proceso de privatización. Desde mi perspectiva, no. Es más, algunos de los mejores proyectos públicos que podemos alumbrar en el futuro deben caminar por esta senda.

También se deduce de todo lo anterior que ciertas cosas que nadie llama privatización son, sin duda, procesos privatizadores. Ponemos otro ejemplo. En los años de abundancia presupuestaria era muy frecuente ver a un grupo de empleados públicos de alta cualificación encargar a empresas privadas hacer el trabajo que ellos mismos podían hacer (al menos parcialmente). Hoy la crisis ha reducido esta práctica. Pues bien, cuando esa práctica se mantiene durante años, a veces, no siempre, se da la circunstancia de que ningún funcionario de alto nivel es capaz de saber cuál es el coste de producción del trabajo que han encargado en el mercado. Y como consecuencia de ello, no saben si las empresas le están cobrando (al contribuyente, no a ellos) un precio razonable, alto o delirantemente inflado. Pero en estos casos no solo se puede dar un lucro privado injustificado, sino que además hay una transferencia de capacidad de pensamiento, desarrollo y control estratégico de lo público a lo privado. La función largo tiempo contratada en el mercado y nunca supervisada está mucho más en manos de la cadena de proveedores privados que de la propia Administración. No se ve en medios sindicales, políticos o periodísticos que a esto se le llame privatización, cuando lo es. Y además con un potencial nocivo para lo público prácticamente ilimitado.

Y acabamos con los instrumentos que pueden servir para fortalecer y modernizar lo público en un contexto como el actual. No solo es preciso hacer disección terminológica o crítica a la praxis de otros. Es más, quien no aporte soluciones además de críticas no está cumpliendo con su papel en la sociedad, la Administración, la política, el sindicalismo, la academia, los medios o el mercado.

Por eso, se pueden aportar técnicas tales como:

- la Empresa Pública Total (EPT)
- el Gestor Integral de Proyectos Públicos (GIPP)
- la Activación de Nuevos Ingresos Públicos (ANIP)
- la Internalización de Servicios (públicos locales) con Ahorro de Costes (ISAC)
- otras posibilidades de licitación que tienen las Administraciones que no privatizan, sino que republian: ánimo de lucro tasado y cooperativización profesionalizada (ALT-CP).¹

Estos cinco conjuntos de herramientas, que implican que profesionales y empresas privadas, cooperativas y entidades del tercer sector trabajen con la Administración y para el contribuyente, no son técnicas que debiliten lo público (privatizar), sino que lo revitalizan (republificar).

Animamos a quien lea estas líneas a pensar en cómo funcionarían estas técnicas en contextos (hoy, por desgracia, muy presentes en los medios de comunicación) en los que los servicios públicos se han licitado por debajo de su coste y de forma inmediata aparecen bajadas de calidad en el servicio al público, marginación de los usuarios con menos poder adquisitivo, despidos, recortes de salarios, precarización, huelgas, etc.

Estas herramientas son buenas salidas para proyectos (economía pública) y servicios (oferta prestacional y asistencial) públicos en los que hay que erradicar el lucro privado, sin renunciar a la máxima profesionalización y a la dignidad de los trabajadores, en un contexto de restricción presupuestaria, amenaza de privatización pura y dura y necesidad de nuevos pactos entre Administración-Trabajo-Ciudadanía-Mercado.

Y finalmente, todas estas técnicas no son hallazgos de laboratorio, sino proyectos que están ya en marcha en todo tipo de Administraciones. El futuro ya está aquí y no tiene por qué ser forzosamente la involución. Frente a la privatización en sentido estricto, debemos darle una oportunidad a las buenas y necesarias repoblaciones y a un nuevo pacto sociedad civil-mercado-estado. ♦

NOTAS

¹ Una descripción de las herramientas en <http://leolo.blogspot.com/archive/2014/01/31/las-cinco-nuevas-metodologias-de-trabajo-con-lo-publico-de-u-2993051.html>